

**PERÍODO 129°**



— REPÚBLICA ARGENTINA —

# **DIARIO DE SESIONES**

## **CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN**

---

**17<sup>a</sup> REUNIÓN – 2<sup>a</sup> SESIÓN EXTRAORDINARIA**  
**22 DE DICIEMBRE DE 2011**

---

**Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, don AMADO BOUDOU, y de la señora presidenta provisional del Honorable Senado, senadora BEATRIZ ROJKÉS DE ALPEROVICH**

Secretarios:

Señor don **JUAN H. ESTRADA** y señor don **JUAN H. ZABALETA**

Prosecretarios:

Señor **LUIS G. BORSANI**, señor **MARIO DANIELE** y señor **GUSTAVO CARLOS VÉLEZ**



## PRESENTES:

AGUIRRE DE SORIA, Hilda Clelia  
 ARTAZA, Eugenio J.  
 BARRIONUEVO, Walter Basilio  
 BASUALDO, Roberto G.  
 BERMEO, Rolando A.  
 BIANCALANI, Fabio D.  
 BLAS, Inés Imelda  
 BONGIORNO, María José  
 BORELLO, Marta Teresita  
 CABANCHIK, Samuel M.  
 CABRAL ARRECHEA, Salvador  
 CANO, José M.  
 CASTILLO, Oscar A.  
 CIMADEVILLA, Mario J.  
 COLAZO, Mario J.  
 CORRADI DE BELTRÁN, Ana María  
 CORREGIDO, Elena M.  
 de la ROSA, María Graciela  
 di PERNA, Graciela A.  
 DÍAZ, María Rosa  
 ESCUDERO, Sonia M.  
 ESTENSSORO, María Eugenia  
 FELLNER, Liliana B.  
 FERNÁNDEZ, Aníbal D.  
 FILMUS, Daniel F.  
 FUENTES, Marcelo J.  
 GIMÉNEZ, Sandra D.  
 GIUSTINIANI, Rubén H.  
 GODOY, Ruperto Eduardo  
 GONZÁLEZ, Pablo G.  
 GUASTAVINO, Pedro G.  
 GUINLE, Marcelo A.  
 HIGONET, María de los Ángeles  
 IRRAZÁBAL, Juan Manuel  
 ITURREZ DE CAPELLINI, Ada del Valle  
 JUEZ, Luis A.

LABADO, María Esther  
 LATORRE, Roxana I.  
 LEGUIZAMÓN, María Laura  
 LINARES, Jaime  
 LÓPEZ, Osvaldo R.  
 LORES, Horacio  
 LUNA, Mirtha María T.  
 MANSILLA, Sergio F.  
 MARINO, Juan C.  
 MARTÍNEZ, Alfredo A.  
 MAYANS, José M. A.  
 MEABE de MATHÓ, Josefina A.  
 MENEM, Carlos S.  
 MONLLAU, Blanca M. del Valle  
 MONTERO, Laura G.  
 MORALES, Gerardo R.  
 MORANDINI, Norma E.  
 NEGRE DE ALONSO, Liliana T.  
 NIKISCH, Roy A.  
 PARRILLI, Nanci M. A.  
 PÉREZ ALSINA, Juan A.  
 PÉRSICO, Daniel R.  
 PETCOFF NAIDENOFF, Luis C.  
 PICHETTO, Miguel Á.  
 REUTEMANN, Carlos A.  
 RIOFRIO, Marina R.  
 RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo  
 ROJKÉS de ALPEROVICH, Beatriz L.  
 ROLDAN, José M.  
 ROMERO, Juan C.  
 RUIZ DÍAZ, Elsa Beatriz  
 SANZ, Ernesto R.  
 VERA, Arturo  
 VERANI, Pablo

## AUSENTES, CON AVISO:

RACHED, Emilio A.  
 VERNA, Carlos A.

## SUMARIO

1. **Fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel de diarios.** (O.D.-852/11.) (Pág. 2.)
2. **Acuerdos.** (Pág. 60.)
3. **Protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales.** (O.D.-920/11.) (Pág. 64.)
4. **Apéndice.**
  - I. **Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.** (Pág. 98.)
  - II. **Actas de votación.** (Pág. 130.)
  - III. **Inserciones.** (Pág. 148.)

—En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13 y 02 del jueves 22 de diciembre de 2011:

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). — Señoras y señores senadores, buen día. Continúa la sesión.

## 1

**O.D. N° 852/11**

**FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN  
Y DISTRIBUCIÓN DE PASTA CELULOSA  
Y DE PAPEL DE DIARIOS**

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto de ley en

revisión por el cual se declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios. (C.D. 852/11)

En consideración.

Tiene la palabra la senadora Fellner.

**Sra. Fellner.** – Gracias, señora presidenta. Muy buenos días.

Vamos a considerar el proyecto de ley remitido de la Cámara de Diputados, por el cual se declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios. Además, se establece el marco regulatorio participativo para esta actividad.

Es un proyecto de ley que nos está hablando de igualdad, de equidad, de defensa de la competencia; nos habla también de competitividad y de libertades.

Todas estas palabras, todas estas definiciones, tienen que ver con la democracia, y de eso estamos hablando en esta mañana y con este proyecto.

Se trata de un proyecto de ley que se nutre en principios constitucionales y que se inscribe dentro de un proceso de fortalecimiento y profundización de la democracia, que estamos siguiendo a paso, firme, constante y con toda la voluntad desde el gobierno nacional.

¿Cómo se inscribe este proyecto en el proceso de profundización y fortalecimiento de la democracia? ¿Por qué uso estos términos? Se trata de políticas macroeconómicas y de crecimiento económico con inclusión social; se trata de medidas para el ejercicio real y efectivo de la libertad de prensa y expresión para todos los argentinos. También se trata de medidas de defensa de la competencia y, en especial, señora presidenta, se trata de medidas que tienen que ver con el derecho a la información plural que tenemos absolutamente todos los ciudadanos de esta Argentina.

Decía que esto era un marco regulatorio, y permítame que haga un poco de memoria, señora presidenta. El 15 de septiembre de 2010 la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en una reunión en Olivos, ante empresarios, dueños de diarios, editoriales, periodistas y el público en general anunció que iba a despachar al Congreso de la Nación un

marco regulatorio para esta actividad, y dijo que quería que ese marco regulatorio fuese participativo. Por eso anunció la realización de diez foros en distintos lugares de nuestro país. Así se pusieron en marcha dos procesos participativos en tal sentido. Por un lado, los foros en distintos lugares del país, y por el otro lado, una serie de audiencias públicas en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados.

Se han realizado foros en Tucumán, en Chaco, en Entre Ríos, en Rosario, en Mendoza, en La Rioja, en La Pampa, en Lanús, en Mar del Plata, en Viedma y en Puerto Madryn. En la gran mayoría de estos foros estuvo presente el ministro de Economía, hoy presidente de esta Cámara, Amado Boudou. Cuando él no podía concurrir, quien estaba presente era el viceministro. Así se fueron sucediendo los foros.

Con respecto a las audiencias en la Cámara de Diputados, quiero hacer en este momento un paréntesis para felicitar a la Comisión de Comercio y a su presidenta, la diputada Juliana di Tullio, por la labor que llevó adelante.

Pero además de eso, señora presidenta, y en esto hay que aclarar un poquito...

–Varios señores senadores hablan a la vez.

**Sra. Fellner.** – Les pido silencio, por favor, señores senadores. Yo sé que recién entran, pero nosotros estamos tratando un tema.

Si pueden hacer un poco de silencio, señora presidenta, le agradecería...

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Senadores: si toman asiento podemos continuar con esta brillante exposición.

Es muy lindo el libro.

**Sra. Fellner.** – Tiene que ver también con la libertad de prensa y el acceso al papel, así que es cierto, es muy lindo el libro y viene muy bien en este momento. Gracias, presidenta.

Estaba diciendo que felicito a la Comisión de Comercio en la persona de su presidenta, Juliana di Tullio, por la labor llevada adelante en las audiencias públicas.

Quiero recalcar algo. Cuando el Congreso Nacional, ya sea el Senado o la Cámara de Diputados, a través de una comisión, deciden dar participación en audiencias al que quiera hablar, lo hace por distintos mecanismos, que son baratos, son gratis. Es decir, uno se puede escribir a

través de una página web, por teléfono, yendo a la comisión... No hay necesidad, como hemos visto en estos últimos días, de usar grandes hojas de papel para decir que se los invite, porque hay momentos y lugares adecuados, que se tienen que cumplir, porque si no seguiría la discusión y no se cerraría nunca un tema.

En ese sentido, quiero dejar aclarado que las audiencias públicas son gratis, sale barato inscribirse e ir; no hay necesidad de gastar hojas de papel y minutos de radio o de televisión.

También quiero agradecer a todos los que, en forma espontánea, previa inscripción, se presentaron y nos dejaron sus percepciones y sugerencias sobre el tema. Porque, hay que aclararlo también: no solamente vinieron dueños de diarios, dueños de editoriales y periodistas, sino que también vinieron catedráticos, juristas, gente perteneciente a Defensa de la Competencia, en fin, gente, particulares; y todos ellos nos ayudaron a tener la pluralidad de voces en lo que sucedía y lo que sucede, y de esa forma pudimos tener una idea integral e integradora del problema.

Señora presidenta: yo leí y recontraleí el proyecto y pude establecer ocho objetivos claros previstos en la media sanción de la Cámara de Diputados.

El primero de ellos es que se garantice a todos los medios de prensa del país el acceso en condiciones de igualdad en materia de precios y de cantidad, del insumo básico que necesitan para poder hacer un diario, es decir, del papel. Igualdad en materia de precio y cantidad.

El otro objetivo que puedo marcar es que se garantice el cumplimiento de las inversiones necesarias para que todos aquellos que requieran el papel de diario, porque quieren o están haciendo un diario, puedan hacerlo. Hay que invertir en el país, y esto es lo que hace también este proyecto: garantizar el cumplimiento de las inversiones.

También –como no podía ser de otra forma–, hay que resguardar la transparencia y el acceso a la información. Medidas muy claras y concretas: balances separados, una página web donde figure el stock, los precios, quiénes son aquellos a quienes se les vende. Como dije, transparencia y acceso a la información.

Otro de los objetivos clarito –porque es cumplir con un artículo de nuestra Constitución, nada más y nada menos que con el artículo 42– es el vinculado con el control a los monopolios. Tenemos que cumplir con el artículo 42 de la Constitución. Es otro de los objetivos claros de este proyecto.

También tenemos que promover la competencia en el sector. ¿Y cómo promuevo la competencia? Fomentando las inversiones de las pequeñas y medianas empresas que están relacionadas con este sector.

Otro de los objetivos es preservar el medio ambiente. Hay dos artículos que hablan de esto.

Y puedo nombrar dos objetivos más. Uno de ellos es federalizar y dar participación a las discusiones en todo lo que significa la fabricación, producción, comercialización y distribución de este insumo básico para que haya periódicos –y muchos periódicos– en nuestro país.

El octavo objetivo, que a nadie puede caerle mal, porque estamos nada más y nada menos que en la Cámara de Senadores, se establece un seguimiento democrático para la actividad, mediante una comisión parlamentaria.

Señora presidenta: ¿cómo entiendo todo esto? ¿No hay igualdad en los precios? ¿No hay igualdad en el acceso a la cantidad? ¿No hay transparencia en el sector?

Para comprender esto tenemos que repasar un poco qué pasa actualmente con el papel para diarios en la República Argentina. Buscando información encontré que existe en nuestro país una sola empresa que fabrica la pasta de celulosa, que fabrica papel para diarios, lo comercializa y lo distribuye. Esa empresa se llama Papel Prensa Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Financiera y de Mandato. De ahora en más la voy a llamar directamente Papel Prensa. Por eso dicen que esta ley tiene nombre. Pero ¡claro que tiene nombre! Si existe una sola empresa. De allí viene el nombre y dicen que hay un nombre.

Usando esta maravilla de la Internet, si entramos en la página web de la empresa –que es muy linda y está muy bien armada; de verdad, me gustó–, podemos encontrar lo siguiente: las necesidades crecientes del mercado de papel para diarios y la aparición constante de nuevas tecnologías en máquinas de impresión hacen

que Papel Prensa Sociedad Anónima desarrolle un plan permanente de inversión para perfeccionar la calidad de su producto, incrementar la producción y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente. ¡Lindo!

¿No? Suena muy, muy bien. Y tiene mucho que ver con lo que estamos proponiendo o con los objetivos de esta ley. Sabemos que las necesidades del mercado son crecientes. Hay más necesidades, hay más ganas, se crece en este país. Además, lógicamente, todos los días aparecen nuevas tecnologías. Por eso dice que desarrolla un plan permanente de inversión, en concordancia con lo que son los objetivos de esta ley y el perfeccionar la calidad del producto. Eso es lógico, porque si queremos estar en competitividad, hagamos una buena calidad de productos. Hay que incrementar la producción y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente. Hasta ahí vamos todo bien y en la misma sintonía. Pero cuando empezamos a investigar un poquito, nos damos cuenta de que hay algunas cosas que no están tan bien.

Lo primero que todos nos preguntamos, ¿quiénes son Papel Prensa?, ¿quién es esta sociedad anónima llamada Papel Prensa?, ¿cuál es su paquete accionario?

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Secretaría de Comercio Interior, da cuenta de a quién pertenece el paquete accionario. Dice así: Arte Gráfico Argentino Sociedad Anónima, 37 por ciento; Compañía Inversora en Medios de Comunicación –CIMECO–, 12 por ciento; Sociedad Anónima La Nación, 22,5 por ciento; el Estado nacional, 27,46 por ciento, y terceros accionistas, 1,04 por ciento.

¿Quién es Arte Gráfico y quién es CIMECO? Yo voy a dejar esto, señora presidenta, porque sé lo que van a decir. Es de la Secretaría de Comercio Interior y van a caer sobre el señor Moreno. Entonces, para evitar eso voy a usar un artículo del diario *La Nación* del jueves 15 de diciembre de 2011. Hay una nota que dice: Hacia un grave e inadmisibles despojo. Esto es en la página 22 y el subtítulo: Opinión. Acá hay una frase que me encantó y después también la voy a volver a tomar. Dice así: en el número 1 del año 1 del Diario *La Nación*, que viene de 1870, *La Nación* será una tribuna de doctrina. Está muy bien.

Pero les hablaba sobre el paquete accionario y me remito a esto. Dice lo mismo que he leído de la Secretaría de Comercio: Participación del Estado, 27 por ciento; socios del Grupo Clarín, 47 por ciento; Sociedad Anónima La Nación, 22 por ciento. O sea, lo mismo que dice acá, nada más que redondea la cifra.

Fíjense, si sumo el 47 por ciento de Clarín más los 22 de La Nación, me dan 69 por ciento, frente a un 27 por ciento y al uno y pico por ciento que me queda para otros accionistas. De modo que estamos frente a una empresa que está manejada, porque tienen las acciones, tanto por *Clarín* como por *La Nación*.

Ahora, en esto quiero ser muy clara, señora presidenta, porque los datos varían según leo a uno, según leo a otro, voy a usar para los lindos y para los feos, el piso. Siempre de todos los datos, voy a usar el piso. ¿Cuántos periódicos circulan en nuestro país? Encontré datos que van de 1.800 a 2.500. Me quedo con el piso de 1.800, como dije. Circulan mínimamente 1.800 periódicos en nuestro país. ¿Cuántos de estos periódicos tienen acceso al papel argentino, al papel que produce Papel Prensa? Oh sorpresa –y también me quedo con el mínimo–: 170 periódicos que son abastecidos por Papel Prensa.

Voy a tomar otra vez esa nota del diario *La Nación* porque también, según el día, los números van cambiando. Hay una nota que habla de más de 400 periódicos que abastece Papel Prensa. Si tomo los estados contables de 2010 advierto que son 300 y pico, pero yo dije que para los buenos, lindos y feos, el piso; entonces, para referirme a este piso me remito a la misma nota que recién le mostré que hablaba de un grave despojo, qué sé yo, en donde dice que abastece a más de 170, esto es entre 171 y 179, no va a ser 180. Entonces, tomo 170 como piso. Entre 1800 y 170, al papel argentino solamente tienen acceso el 9 por ciento de los periódicos que hay en la República Argentina. ¿Desbalanceado, no? Nueve por ciento es medio poquito, ¿no? A mí me parece que es muy poquito.

Ahora bien, ¿quiénes son los 170? Ahí viene otro tema, porque hay cupo. ¿A quién corresponde el cupo? Les voy a decir que hay algo que no puedo entender pero sí sé que el cupo es de *Clarín*, de *La Nación* y a su vez de algunos diarios que son los asociados. Por ejemplo, la



secretaria de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, la senadora Morandini, de Córdoba. Uno de los socios es la *Voz del Interior*, de Córdoba, otro de los socios es *Los Andes*, de Mendoza. No estoy diciendo nada que no pueda verse. Ahora, ¿cuánto es el acceso que tienen esos socios con *Clarín* y *La Nación* a ese 9 por ciento del que yo hablaba? Esta información la he obtenido—para que nadie hable de Moreno o de otra cosa— de la memoria y estados contables presentados por la empresa en La Bolsa de Comercio de Buenos Aires, así que el dato lo está dando la empresa. Fíjense que *La Nación* y *Clarín* se quedan entre un 70 y un 80 por ciento de eso que solamente es un 9 por ciento. Es decir, el dueño de fabricar papel celulosa y papel para diario es el mismo de los que se llevan la mayor parte.

Para que nos entendamos, doy un ejemplo. Todos sabemos que el país necesita ponerse en marcha. Necesitamos más y mejor trabajo para todos los argentinos. ¿Cuántas veces hemos dictado leyes o hemos presentado proyectos para que las pymes avancen? Son pequeños emprendimientos que tiene la gente que quiere trabajar y apostar al país.

Hagamos un caso hipotético. Por ejemplo, un grupo de mujeres de mi Jujuy que cosen muy bien deciden poner una fábrica de ropa o un grupo de gente decide poner una panadería, que en algún momento la tuvo que cerrar y decide ponerla diciendo que la gente ahora compra un poco más. Cuando quiere ir a comprar el hilo que necesitan para coser—si no tengo hilo ¿cómo uno?— o el panadero quiere comprar la harina. Resulta que se enteran que la única que vende las bolsas de harina es una empresa que está acá, en Buenos Aires, y que no hay otra, o que la que vende el hilo solamente está acá, en Buenos Aires, y que no hay otra. Usted que trabaja tanto con las mujeres, señora presidenta: ¿se imagina a esas mujeres modistas que tienen ganas de poner una pequeñita empresa de ropa con aire jujeño—y el mercado está lleno del vestido nacional— cuando vienen a golpear la puerta de la única empresa que vende hilo y que, encima, es la dueña del vestido nacional? ¿Qué le van a decir, señora presidenta? Una de dos, o directamente no le venden el hilo o se lo venden al precio que ellos quieren, si es un

monopolio. Eso es lo que está sucediendo con el papel para diarios.

Pero el tema es más perverso, porque un vestido distinto o un pan distinto... Bueno, sí, están coartando mis posibilidades de acceder a otra cosa, pero en este caso, cuando hay un monopolio del papel, que es el insumo básico para producir periódicos, están coartando a quien escribe la libertad de pluma, la posibilidad de tener el medio que necesita para escribir.

Además de eso, supónganse que yo no sé escribir y quizá nunca escriba ni un renglón en un diario, pero como persona viviendo en esta Argentina yo debo tener la posibilidad de que mis opiniones y mis pensamientos los pueda hacer en un contexto colectivo, que pueda leer y escuchar las voces y las opiniones de muchos, para que con lo que a mí me quede de eso pueda formar mi pensamiento en esa colectividad de voces y de letras. Eso es lo que también me están prohibiendo, señora presidenta. Cuantas más opiniones puedo recibir sobre un tema mejor formo la mía, y así soy cada vez un poquito más libre. Me están coartando mi posibilidad de pensamiento y de ser una persona libre.

Ayer alguien habló aquí de Amartya Sen, y cuánto habló de la íntima relación que hay entre desarrollo y libertad; también estamos hablando de eso en este tema.

Volviendo al punto del que me fui para citar este ejemplo tan simple y tan sencillo a ver si entendemos de qué estamos hablando, con ese agregado que hice sobre la posibilidad de formación de mi pensamiento. Los 1.800 periódicos mínimos que existen en la Argentina los puedo dividir en tres grupos. Hay un grupo que yo llamo los privilegiados, y lógicamente ahí están *Clarín* y *La Nación*. Y tienen que ser los privilegiados; porque, a ver, si yo produzco para mí mismo el insumo, lógicamente tengo que tener privilegios. ¿Cómo no los voy a tener? Por eso son los privilegiados, porque tienen acceso al papel y al cupo que quieren, y encima con determinados beneficios, incluso—hasta tanto salió una resolución de la Secretaría de Comercio— con diferencias de precios.

He visto estados contables en donde consta que en algún momento a estos dos diarios se les dio el papel a un precio por debajo del costo de la producción. Usted me va a decir: “No. Usted está mintiendo. Nadie puede vender algo por

debajo del costo de su producción”, pero cuando el negocio es redondo vendo, pierdo por esta empresa, pero gano con creces por esta otra, y entonces el negocio me cierra; pero ¿en perjuicio de quién?, de los otros accionistas de esta otra empresa que no es solamente mía.

¿Se entiende? Sí, señora presidenta. Se entiende perfectamente. Lo sé.

Hay un segundo grupo de los que no son socios y no son ni *Clarín* ni *La Nación*, pero que sí tienen un cupo y que no les alcanza para lo que ellos quieren hacer con el diario ni para lo que hoy tienen de tirada de diario. Ellos no tienen beneficios y pagan un determinado precio que hasta la resolución 1/2010 lo imponía la empresa que manejaba Papel Prensa.

Y hay un tercer grupo, que es la gran mayoría, ese 90 por ciento, que directamente no tiene acceso al papel y tiene que conseguirlo en otro lado. Ellos no tienen acceso directo al papel argentino.

¿Por qué digo eso de la diferencia de precio? La Secretaría de Comercio Interior, a través de la primera resolución del año 2010, estableció las pautas para las operaciones de comercialización de papel para diario y que éstas deben efectuarse a un precio igualitario, porque no eran del mismo precio.

Justamente con respecto a esto, el domingo estaba haciendo *zapping* y en un programa político vi a un señor que estaba diciendo –y siempre con esa estocada– que había diarios pequeños del interior –y, claro, a uno que es del interior usted sabe que le da en el corazón, porque los pequeños siempre son del interior– que desde la resolución 1/2010 de Moreno pagaban más caro el papel. Dijo eso y no aclaró nada. Si yo hubiese sido el periodista le habría preguntado qué diarios, cómo es que se aumentó el papel, qué pasó. Pero el periodista no dijo ni una palabra. Yo supongo –porque ahí uno empieza a pensar– que, claro, deben ser por ejemplo *Los Andes*, *La Voz del Interior*, que son los socios, en parte la dueña es *Clarín* y *La Nación*.

Entonces, cuando el Estado nacional dijo: “No, señores. Precio igualitario para todos”, dejaron de tener –así, sin que se vea mucho– algunos beneficios. Porque los beneficios siguen existiendo, por ejemplo por volúmenes o que les puedo dar cuotas de hasta a 24 meses porque

son amigos; a otros no, a otros les cobro ya, de contado.

El otro tema es el de dónde consiguen los que tienen un poquito de cupo y necesitan más. ¿De dónde lo consiguen? Y bueno, uno dice: “A ver, si el papel argentino no alcanza lo tienen que importar”. Entonces importan: de Rusia, de Chile. Pero con respecto a esto tengo una duda que me sobrevuela y no puedo lograr que nadie me la conteste, y es que cómo puede ser que, según las versiones taquigráficas de las exposiciones de toda la gente que vino –y lo leemos también en las últimas publicaciones de los diarios–, dice que en la Argentina existe una reventa del papel, y a quienes la llevan a cabo los llaman los bolseros.

Yo creí que los bolseros vendían papel importado, que era gente de mucha plata que tiene, que compra y que junta y que después hacen su negocio. Pero resulta que los bolseros también tienen Papel Prensa, y ahí a mí se me armó lío. Porque si Papel Prensa se maneja con cupos y estos no alcanzan, ¿cómo puede ser que haya para reventa? Esto significa que tenemos problemas con los cupos, que a alguien le están dando papel de más o que no lo está usando y lo revende.

Ya tenemos una denuncia sobre esto. Y esto no lo digo yo sino que lo han dicho quienes saben perfectamente de este negocio.

Tema importación. Sobre este tema el 16 de diciembre de 2011 se publicó una nota en *Perfil* que se tituló “Mienten con Papel Prensa”. Voy a leer solamente una parte. “*Clarín* y *Nación* sostienen que hoy (en el pasado era así) no se le produce ningún perjuicio a quien no tenga cupo para comprar Papel Prensa”. Me pregunté qué sería esto, y luego dice que el precio del papel importado es de 680 dólares la tonelada, mientras que el de Papel Prensa en este momento es de 753 dólares la tonelada. O sea que visto así, en frío y un poco distraído, uno piensa que cuesta más barato importar que hacer el papel acá. Quiero recalcar –porque lo sé– que no existen aranceles para la importación, es cierto, pero ¿saben lo que es importar?

¿Saben los costos financieros que lleva, a más del precio, el hecho de importar? A más, ¿cuál es el volumen que puedo llegar a importar? ¿Cuánto es lo que puedo pedir?

A la vez, las empresas que venden este papel en el exterior requieren la orden de compra con 60 o 90 días de anticipación y después tengo que guardar ese stock de papel, con el costo financiero que eso supone. Y lo dice claramente este artículo, porque dice por ejemplo que a 680 dólares la tonelada sólo lo pueden comprar *Clarín*, *La Nación* y *Perfil*, los tres mayores importadores de papel del país, porque para conseguir ese precio es necesario hacer una compra de 5 mil toneladas juntas y pagar, de contado, 3,5 millones de dólares. Por lo tanto, eso es imposible.

Esto es lo que se desprendió de las audiencias públicas realizadas en la Cámara de Diputados.

A continuación, leeré lo que sucede, por ejemplo, con *El Tribuno de Tucumán*, periódico que, seguramente, conocerá la señora presidenta. Por dicho diario vino a hablar el señor Amaya, quien dijo que el acceso al papel en condiciones competitivas para un diario del interior —todos los que somos del interior sabemos que la gran mayoría de los periódicos son pymes— es vital, ya que el papel usado por cualquiera de esas empresas, según la tirada y otras variables, incide entre el 15 y, a veces, más del 40 por ciento en el costo de un diario. O sea que el papel implica entre el 15 y el 40 por ciento del costo del diario.

Luego, el señor Amaya hizo referencia adónde consigue el papel *El Tribuno de Tucumán*: por su condición y envergadura —no sé cómo será *El Tribuno de Tucumán*, pero sí sé lo que son algunos diarios de mi provincia; son flaquitos, parecería que pasan hambre en comparación, por ejemplo, con algunos de la Capital, que son muy gordos—, al igual que muchos diarios del interior, ni siquiera pueden importar el papel porque tienen imposibilidad de volumen —lo cual es lógico—, de condiciones económicas y de posibilidades ciertas de hacerlo. Por lo tanto, la única vía de adquisición del papel es a través de revendedores, que son locales —y aquí viene nuevamente el tema que les mencioné anteriormente— y que revenden el papel de Papel Prensa o revenden el importado. Esto lo decía un representante del diario *El Tribuno de Tucumán*.

En suma lo que sucede con el papel de diario en la República Argentina es lo siguiente.

La empresa Papel Prensa Sociedad Anónima, la única que produce, comercializa y distribuye el papel de celulosa y el papel para diarios, ejerce una actividad en condiciones monopólicas, ya que no tiene competencia alguna. El 70 por ciento de su producción se vende a sus socios mayoritarios —*Clarín* y *La Nación*—, quienes acceden al papel en condiciones más que convenientes, y solamente un 30 por ciento de la producción queda para el resto de los diarios del país. Los medios que tienen la suerte de tener cupo terminan pagando siempre el papel a un precio más elevado que los que son socios, y los medios que no tienen la suerte de tener cupo deben comprárselo a los revendedores, quienes, además, venden papel prensa.

Eso es lo que está sucediendo con el papel en la Argentina: distorsión, notable desigualdad y falta de equidad en el mercado del papel de diario y de la pasta celulósica. Esta es una situación monopólica y, tal como dije al comienzo de mi intervención, tenemos la necesidad y el deber de cumplir con la Constitución. El artículo 42 es claro en cuanto a que tiene que ejercerse el control de los monopolios, garantizándose el derecho a la información plena y armónica y demás derechos y garantías.

También podría mencionar lo expresado por los representantes de *Ámbito Financiero*. En ese sentido, nadie puede decir que dicho diario sea kirchnerista ni que su fundador, Julio Ramos, haya sido afín a algunas de las iniciativas que nosotros estamos llevando adelante. Sin embargo, el señor Julio Ramos, durante más de una década y muchas veces en soledad, denunció este tema. En primer lugar, abordó la cuestión de la conformación de Papel Prensa Sociedad Anónima y, en segundo término, la hizo explícita en un libro titulado *Los cerrojos de la prensa*, del año 1993. Si se lee el mencionado libro y, también, el informe *Papel Prensa: la verdad*, advertirá que son muy parecidos. Eso está en manos de la justicia, y lo dejamos allí.

Podría referirme a la competitividad y a las ventajas competitivas. O sea, podría referirme a quién decide “a quién sí, a quién no”; al poder del “sí o no” en cuanto a la venta de un producto indispensable para esa actividad; al poder de fijar el precio al que se vende el papel; al privilegio de pagar menos porque son los dueños; a la posibilidad de definir la escala de la producción,



es decir, cuánto produzco y, sobre esa base, hacerlo para mi autoabastecimiento. Todo eso atenta contra la defensa de la competencia. De eso estamos hablando.

Todos conocen el proyecto de ley, por lo que solamente haré unas aclaraciones. El artículo 1° declara el interés público. Cuando el Estado decide declarar de interés público una actividad, es porque a esa actividad le está dando una relevancia especial, en virtud de que entiende que en ello está comprometido el interés general de la población, y se hace necesaria su intervención.

Lo que mencionaré a continuación no fue expresado por la presidenta, sino que apareció en el diario *La Nación*, y es muy claro: el que controla el papel de diario, controla la información. Posteriormente, ese concepto fue tomado por la presidenta.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Perdón, senadora, el senador Cano le pide...

**Sra. Fellner**. – No. Estoy haciendo el informe; después tendremos oportunidad de discutir el tema.

Continúo: controlar el papel de diario es controlar la información. Este concepto apareció en un artículo del diario *La Nación* –“La historia inventada para Papel Prensa”– en el año 2010, antes de que la presidenta tomara esa frase. Es cierto, el que controla la producción y comercialización del papel, controla la información.

La declaración de interés público de la fabricación, comercialización y distribución del papel es un aporte muy importante a la democracia. Por lo tanto, ¿a qué tiende este proyecto de ley? A que se disponga de instrumentos que posibiliten la transparencia, el control y la toma de decisiones políticas pertinentes para la democratización del sector. En ese sentido, podría hablar de la comisión bicameral que se crea, de las funciones y atribuciones de la autoridad de aplicación y demás. Pero me quiero detener en los artículos 40 y 41.

En cuanto a la Comisión Federal Asesora, no sé por qué tiene el título de “asesora”, ya que sus funciones van mucho más allá del asesoramiento. Por ejemplo, sus competencias tienen que ver, también, con el análisis del mercado nacional e internacional. En consecuencia, cuando se dice que no vamos a permitir la importación y que se establecerán aranceles, debo aclarar que

se creará una Comisión Federal que se ocupará del análisis de los mercados nacional e internacional. Y en cuanto a las funciones de dicha comisión asesora, existe un inciso h) vinculado con los artículos 40 y 41, que son muy discutidos por algunos. A través del mencionado inciso se dispone que eventualmente se podrán ejercer los derechos políticos del acrecentamiento de participación del Estado nacional en la firma Papel Prensa. Esto tiene que ver con el artículo 40, y uno de los objetivos de este proyecto es, justamente, que todos los que lo requieran puedan tener papel argentino. Esto es así porque si hay que invertir, alguien tiene que hacerlo. Si lo hacen los privados, acrecentarán sus acciones si el Estado no puede; y si lo hace el Estado, este acrecentará sus acciones. Es lógico que esto sea así. Pero la decisión política que emane de ese acrecentamiento de las acciones la tendrá esta Comisión Federal.

Por lo tanto, con esto se echa por tierra a los que dicen que el Estado nacional se quiere quedar con las acciones de Papel Prensa, porque la decisión política –y usted, señora presidenta, sabe perfectamente qué es eso– la tiene esta Comisión Federal conformada, mínimamente, por un representante de diarios de cada una de las provincias.

Para finalizar, quiero defender muy brevemente la absoluta constitucionalidad de esta ley. Podría haber leído los manuales de ética y de estilo tanto de *La Nación* como de *Clarín*. Leeré solamente lo que dice el de *La Nación* acerca de la pluralidad de enfoques: en los temas en que haya posiciones contrapuestas, *La Nación* recogerá en sus páginas todas las disidencias, a fin de ofrecer al lector una cobertura completa del asunto, imparcialidad y pluralidad. Es lo que mínimamente queremos en los periódicos y si no hay imparcialidad, por lo menos, déjennos tener pluralidad en el pensamiento, como decía antes.

¿Por qué no hay imparcialidad? Resulta que una de las cosas que más usan es el tema de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la misma del Pacto de San José de Costa Rica. Es tan confusa la información que dan que en algunos artículos hacen parecer como que la Convención Americana de Derechos Humanos es distinta del Pacto de San José de Costa Rica. Es decir, nos están diciendo que no solamente

violamos una norma, sino dos, cuando es lo mismo.

En el diario *Clarín* del 16 de diciembre una persona que es profesor titular de Derecho Constitucional, al referirse al Pacto de San José de Costa Rica o a la Convención Americana de Derechos Humanos, habla del abuso de controles oficiales para papel de periódico. Y aquí estoy confundida: o la Comisión Americana cambió y yo no me di cuenta o se olvidaron de poner el control particular, que es tan malo como el oficial cuando es monopolístico. Pero yo pensé: “Si este hombre es un profesor universitario no puede no poner lo que dice la Convención; después que diga lo que quiera”. Pero no se trata sólo de eso...

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Señora senadora: hay muchos oradores...

**Sra. Fellner**. – Sí, pero yo soy la miembro informante.

Exactamente lo mismo dice el diario *Clarín*: “La Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe el control estatal del papel...”. No, señora presidenta. Lo que dice esa convención es que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales o particulares al papel de los periódicos.

En cuanto a las objeciones constitucionales al artículo 32 podría leer muchas cosas, pero solamente voy a señalar lo que dice Bidart Campos en su obra *Manual de la Constitución Reformada*: “La otra corriente de interpretación a la que adherimos entiende que lo prohibido es restringir estando permitido reglamentar razonablemente”. Ya termino, señora presidenta. Dos párrafos.

Los derechos y garantías constitucionales deben interpretarse en forma armónica y sistemática, de modo de asegurar la vigencia simultánea de todos y no la prevalencia de unos sobre otros. De eso se trata este proyecto: de garantizar la vigencia de la Constitución Nacional al ciento por ciento. Estamos legislando de un modo que permita a todos, en la pluralidad de voces, la posibilidad de informarnos. De eso estamos hablando y de terminar en esta Argentina con un monopolio que está acabando con la competitividad en el acceso a un insumo, que es el papel, para que pueda existir una pluralidad de periódicos en la República Argentina.

Dicho esto, señora presidenta, pido a los demás senadores que nos acompañen en la sanción de este proyecto de ley.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

**Sr. Pichetto**. – Presidenta: es para formular algunas reflexiones en orden a la sesión de hoy.

Hay senadores que tienen prevista su salida al interior a través de vuelos en avión. Nosotros hemos avanzado en un diálogo con los otros bloques para que los que quieran hacer uso de la palabra lo hagan durante cinco minutos, salvo el caso de las autoridades de bloque.

Me parece que si nos atenemos al cumplimiento de estos plazos vamos a poder formular este debate y cumplimentar una hora de votación que sea razonable para que aquellos que tengan que viajar, puedan hacerlo.

Así que yo les voy a pedir el cierre de la lista de oradores, si estamos de acuerdo en esta limitación. Nuestro bloque también va a hacer un esfuerzo para ver si algunos senadores pueden insertar sus discursos en el Diario de Sesiones, a los efectos de llegar a un horario razonable para poder votar.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.

**Sr. Rodríguez Saá**. – Como nuevamente nuestro bloque ha sido omitido y marginado de las decisiones quiero decir que además de la pluralidad de voces hay que respetar la pluralidad de presencias en el Senado. Vamos a hacer todo lo posible por acotar los minutos de nuestras exposiciones, pero nosotros no compartimos el acuerdo que han celebrado los otros bloques.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Senador Petcoff Naidenoff.

**Sr. Petcoff Naidenoff**. – En primer lugar, quiero hacer una aclaración: acá no hay ningún acuerdo. Lo que pasó fue que cada bloque acercó a la Presidencia la lista de oradores que quieren participar de este debate y así he tomado nota de que son treinta y siete los anotados. Entonces, a mí me parece que corresponde a cada bloque hacer los esfuerzos necesarios para cumplir, si se puede, con el tiempo estimado de cinco minutos y para tratar de que aquellos senadores que lo deseen puedan insertar sus discursos en el Diario de Sesiones. Pero eso quedará bajo la responsabilidad de cada bloque.

En el bloque de la Unión Cívica Radical trataremos de ajustarnos a estos criterios pero siempre con la idea de dar un debate razonable, porque el temario de hoy no se agota en la cuestión de Papel Prensa, sino que continúa con otros temas.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

**Sr. Giustiniani.** – Señor presidente: quiero decir que nosotros tampoco participamos de ningún diálogo ni acuerdo. Por una cuestión de sentido común de funcionamiento de la Cámara, en representación del interbloque del Frente Progresista va a hacer uso de la palabra la señora senadora Morandini, quien dispondrá del tiempo que corresponda a los jefes de bloque.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

**Sr. Pichetto.** – A veces hay que escuchar. En algunas ocasiones hay que hablar y en otras hay que prestar oído. Yo nunca hablé de alterar el derecho de los bloques. Dije que habíamos conversado y que en el ámbito de la decisión que debíamos tomar iba a plantear que cada senador pueda exponer durante cinco minutos. Lo toman o lo dejan, simplemente eso. No dije que los bloques tenían limitaciones; dejé eso a salvo, señor senador Rodríguez Saá. Las autoridades de bloque dispondrán del tiempo que les corresponde.

Nosotros vamos a hacer un esfuerzo por achicar nuestra lista y nuestros senadores van a hablar por un lapso de cinco minutos.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Se va a votar si se autorizan las inserciones.

–Se practica la votación.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Aprobado.<sup>1</sup>

A continuación se va a votar el cierre de la lista de oradores.

–Se practica la votación.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Aprobado.

Tiene la palabra el señor senador Sanz.

**Sr. Sanz.** – Señora presidenta: aun cuando sea posible compartir algunos aspectos del diagnóstico que se ha formulado y de los diagnósticos

que han surgido a lo largo del debate público, no sólo en el Congreso sino también fuera de él durante todos estos años, a partir de la discusión sobre la provisión del papel para prensa, nosotros no vamos a acompañar al oficialismo en el dictamen en mayoría porque entendemos que, aun cuando insisto en que podemos compartir algunos rasgos del diagnóstico y otros no, tomó un camino equivocado. Nosotros disentimos en la salida del problema, en la resolución del problema, en el camino utilizado para abordar el problema.

Y digo que tomó el camino equivocado porque una vez más se encierra en una lógica de pelea que desde ya adelantamos que no es la nuestra y que nos animamos a decir que tampoco es la de la sociedad. Porque entre dos opciones: una virtuosa, como era la defender y garantizar derechos, y otra opción no virtuosa, como es la de avanzar en enfrentamientos contra empresas o personas, el oficialismo eligió esta segunda: la no virtuosa. Y para el radicalismo este debate –lo queremos dejar bien clarito– es sobre la ampliación de los derechos y sobre la garantía del acceso a esos derechos. Es decir, una suerte de doble tiempo en la plena vigencia de los derechos constitucionales: la ampliación de un derecho y la garantía del acceso a ese derecho.

¿Cuál es el derecho? Se ha dicho, desde luego que desde distinta visión, el derecho a la expresión y el derecho a la información. También aquí tenemos una doble vuelta: el derecho a la expresión a través de la prensa gráfica, que involucra al que quiere publicar; y el derecho a la información a través de la prensa gráfica, que es el que tiene derecho a informarse a través de la lectura de diarios y revistas.

Ahora bien, ¿cuál es el rol del Estado respecto de este derecho? Aquí radica el debate. Para nosotros, el rol del Estado consiste en asegurar que todos aquellos que quieran publicar sus ideas por la prensa gráfica puedan hacerlo, y asegurar que todos aquellos que quieran leer esas publicaciones, también puedan hacerlo.

Entonces, el desafío es expandir, no restringir. El desafío es garantizar, y no prohibir. Por eso, el punto medular de los proyectos de ley está en identificar o caracterizar cuál es el objeto de tutela legal. O más claramente, en los mismos

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.

términos del proyecto del oficialismo como del dictamen de la Unión Cívica Radical, que es el único en minoría, en identificar en el artículo 1º cuál es el objeto de interés público que nosotros declaramos. Acá consta, desde su artículo 1º del proyecto, la diferenciación de conceptos y de criterios. Porque a partir de allí, a partir de esa situación tendiente a identificar cuál es el objeto de tutela legal con la declaración del interés público, aparece entonces, a nuestro juicio, cuáles son las intenciones que existen alrededor de esto.

Nosotros hemos presentado un dictamen en minoría. Quiero rescatar, desde el bloque, que no solamente lo hemos hecho en este tema. Ayer, prácticamente en todos los temas hemos presentado dictámenes en minoría, no solamente para diferenciarnos o para ofrecer alternativas, sino también para dejar sentado un trabajo que nuestro bloque, junto con el bloque de la Cámara de Diputados, ha realizado de manera conjunta.

Y en el caso del dictamen en minoría, que se inició en la Cámara de Diputados, el artículo 1º declara de interés público el acceso libre e igualitario del papel necesario para editar diarios y revistas. Y a partir de allí le otorgamos al Estado una serie de herramientas legales para promover y asegurar ese acceso. Por ejemplo, la primera herramienta, que está en la Constitución, es la famosa cláusula del progreso del artículo 75, inciso 18. Así, establecemos la posibilidad de formular un régimen de promoción para la construcción, instalación y readecuación de nuevas plantas, y fijamos cuáles son todas las herramientas concretas del régimen de promoción en tal sentido, como incentivos fiscales y otro tipo de incentivos que implican una participación activa del Estado o un compromiso concreto frente a este tema.

En segundo lugar, está la cuestión de la importación del papel, con la liberación absoluta de trabas, aranceles o restricciones para su importación, lo cual lo dejamos establecido en la norma, para que no esté sometido al arbitrio de ningún funcionario. Este tema de las trabas o de las aperturas vinculadas a las importaciones y las exportaciones nunca tiene que quedar, en este tipo de casos, sometido a la decisión de un funcionario. Por eso, está muy bueno que una ley lo pueda establecer como liberación absoluta y permanente.

Y en tercer término, debo referirme a la implementación de un fondo de ayuda, que hemos denominado “papel para todos”, con foco en los editores pequeños, sobre todo de ciudades con menos de cien mil habitantes. Se trata de un fondo de ayuda que se nutre de fondos específicos para poder resolver algunas inequidades. Todo eso —esto sí lo compartimos con el dictamen en mayoría— controlado y con la participación de una comisión bicameral del Congreso.

En ese dictamen, señora presidenta, van a encontrar el perfil de un Estado con un rol totalmente distinto al que ha desempeñado durante muchos años. Es decir, un Estado que somos todos y por el cual hemos pasado todos.

Se podrán decir muchas cosas hoy en este debate, pero la verdad es que cuando uno se para objetivamente y observa hacia atrás cuál ha sido el rol del Estado, más allá de quiénes han sido los gobiernos que lo han administrado en los últimos años —muchos años—, advertirá que es bueno que podamos discutir un rol diferente.

Para nosotros, ese rol diferente se refiere a un Estado comprometido y presente; un Estado que no mire de reojo, sino que intervenga proactivamente en un área de desarrollo económico. Y al mismo tiempo un Estado que sea respetuoso, criterioso y garante de las libertades que subyacen detrás de esta actividad económica, pero no es cualquier actividad económica, porque detrás de ella hay libertades públicas muy importantes.

Ahora bien, si esta es la propuesta del radicalismo que arranca desde el artículo 1º, ¿dónde está la diferencia con el proyecto oficial? Desde el artículo 1º, porque el oficialismo declara de interés público otra cosa. Declara de interés público la producción, comercialización y distribución. Y luego propone una serie de regulaciones sobre la actividad.

En tal sentido, lo que se declara es el interés público sobre una actividad. Y aquí viene la cuestión constitucional, porque se permite considerar a esta actividad como un servicio público impropio. De tal modo, este proyecto de ley avanza jurídicamente y lo que hasta hoy era una actividad privada que estaba sometida al régimen del derecho privado, ahora pasa a ser una actividad pública, sometida al derecho público, bajo la caracterización de un servicio público impropio, esto es, un servicio público prestado por particulares.



Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia jurídica más importante de declarar un servicio público impropio? Que la actividad que antes se regía por un derecho, por una jurisdicción y por un fuero en materia judicial, al pasar al ámbito del derecho público encuentra ahora una subordinación por parte de los particulares que prestan ese servicio, o de los administrados a la administración pública, dado que a través de esta norma existe una juridicidad, una legalidad o una excusa legal –por si se quiere ser más concreto– para ejercer esa potestad bajo el nombre de distintas herramientas. El proyecto del oficialismo enumera a algunas. Otras podrán aparecer a través del tiempo. Por ejemplo: limitaciones, regulaciones, imposiciones, intervenciones, etcétera.

En cambio, todo esto, bajo el ámbito del derecho privado y en una relación de derecho privado, no se podría hacer. Pero ahora, como se trata de un servicio público impropio, se va a poder hacer, y bajo el amparo de la defensa del interés general.

Ahora bien, nosotros vemos aquí una colisión constitucional, porque la idea del interés público, que es la que justifica el acrecentamiento o la intensificación del control estatal sobre una actividad privada en materia de servicios públicos es correcta desde la teoría, pero esa situación, planteada respecto de la provisión del papel para diarios, resulta absolutamente impensable porque el artículo 32 de la Constitución Nacional impide al Congreso dictar leyes que restrinjan la libertad de prensa o que sujeten la misma a la jurisdicción federal. Mucho menos, entonces, podría convertírsela en un servicio público y someterla a su especialísimo sistema de control. Éste es el tema.

Por eso, nosotros advertimos una colisión con el artículo 32 de la Constitución Nacional desde el momento en que el oficialismo eligió como camino para resolver un problema de monopolio o de mercado vinculado a la provisión del papel la caracterización de esa actividad privada como un servicio público impropio. Y aquí la jurisdicción federal no es una cosa menor. Aquí la jurisdicción federal es doble: por vía de regulación, con la autoridad de aplicación y con la comisión bicameral, y por vía judicial. Así, será el fuero contencioso administrativo el que intervendrá. Y los entendidos sabemos de qué

se trata y cómo funciona el fuero contencioso administrativo federal en la República Argentina. Entonces, a buenos entendedores, huelgan las palabras.

¿Por qué el gobierno y el oficialismo avanzan en ese camino? Nosotros no compartimos todas las cosas que se han dicho aquí vinculadas con el tema del mercado.

Se ha señalado que existe una sola empresa de provisión; pero esto en la Argentina está funcionando, más allá de la situación de Papel del Tucumán. Respecto a esto, podríamos hablar largo de lo que pasó en la historia.

Es cierto que cuando existe una sola empresa que provee esto en la Argentina funcionando –más allá de la otra, Papel de Tucumán, respecto de la cual podríamos hablar largo en cuanto a lo que pasó en la historia–, hay problemas de mercado. No son los problemas de mercado de hoy, en estos momentos y en los últimos dos años los que han motivado el avance del oficialismo sobre esto. Porque los propios protagonistas del mercado desmienten esta cuestión: Fontevecchia, en ese artículo y en algunas otras cosas que he leído; la gente de ADIRA u otros actores. Esto, obviamente más allá de que hay otros protagonistas del interior –acá, se han dado ejemplos– que dicen lo contrario.

El problema no está en el mercado. De última, si el problema fuera solamente el mercado, el Estado, sin necesidad de caracterizar un servicio público de esta naturaleza con tanta potencia en la solución, podría resolverlo. La Secretaría de Comercio Interior tiene absolutamente todas las armas y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia también las tiene.

Ahora, acá hay otro problema, un problema político. El problema político no es con la empresa sino con los dueños de la empresa, con los accionistas de la empresa. El problema no es institucional, el problema no es de mercado. El problema es que el gobierno está enfrentado con los dos accionistas principales de Papel Prensa: con *La Nación* y con *Clarín*.

Señora presidenta: el sistema jurídico institucional del país no puede estar sometido a los vaivenes de los conflictos personales del gobierno. Éste es el meollo de la cuestión política que hoy estamos discutiendo. Y no he utilizado la palabra “vaivén” casualmente. Vaivén se origina



en “va” y “viene”, y grafica que ni siquiera son conflictos inmutables o permanentes.

— Murmullos en el recinto.

**Sr. Sanz.** — Vamos a pedirle al secretario Parlamentario que termine con la lista, y sigo. ¿Le parece, presidenta?

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). — Continúe, senador Sanz.

**Sr. Sanz.** — Utilizo la palabra “vaivenes”, de “va” y “viene” —insisto—, para graficar que, entonces, ni siquiera son conflictos inmutables o permanentes: van y vienen. Y la realidad en la Argentina, en este “va” y “viene”, resulta tan dinámica que la verdad es que, a veces, asombra a propios y extraños.

La realidad indica, respecto de los enfrentamientos personales, que, con igual pasión, amigos de hoy —por ejemplo, vinculados con el espacio de los medios o con el famoso *establishment* de las corporaciones industriales— han sido feroces enemigos ayer; con la misma pasión: amigos de hoy, feroces enemigos de ayer. Y si no al revés: con la misma pasión, enemigos de hoy —quizás, hay que buscarlos en el campo sindical— han sido ayer del más puro riñón del poder.

Entonces, ¿quién protege al sistema de todos estos vaivenes y avatares? ¿Quién protege al sistema de estas pasiones; de enfrentamientos personales que hoy lo colocan acá y al tiempo; sin que uno se dé cuenta, colocan al gobierno, a las personas o a las entidades y a las corporaciones en otro lado?

En el caso particular de esta empresa, la actitud pendular —el vaivén, el va y viene— es notable. Uno podrá escuchar esta tarde de boca de todos los oficialistas la dureza de la miembro informante y de todos los que se han anotado con respecto a las maldades, a los vicios, a las inequidades, a los riesgos y a todas las cuestiones vinculadas con esta empresa. Pero en Derecho, hay algo que rebate todas estas cuestiones, que es la doctrina de los actos propios. Y cuando uno va a esta doctrina de los actos propios, las palabras se quedan, de alguna manera, devaluadas, porque con estas empresas, hay un camino sinuoso que este gobierno, en estos ocho años, ha recorrido. De hecho, sobre el particular, yo no he escuchado a nadie —por lo menos, con propiedad— que lo reconozca.

Este gobierno sancionó la ley 26.053, que reformó el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión; y no se tocó la propiedad de los diarios ni nada se dijo de lo que significaba concatenadamente tener una empresa como Papel Prensa. Este gobierno emitió un dictamen en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que generó un monopolio en el sistema de cable de Multicanal y Cablevisión. Hoy, está juzgada e investigada toda esta cuestión, como lo hemos leído en estos días; pero este gobierno fue el que autorizó esa fusión vía la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. El señor Sbatella, que ayer nos acompañaba, en ese entonces, era presidente de ese organismo. Este gobierno, en 2005 —y con ejercicio en la Ley de Emergencia 25.561—, dictó el decreto 527, que prorrogó las licencias de radiodifusión y de telecomunicaciones, incluidas las empresas que hoy están objetando.

Y este gobierno —y acá viene el punto central respecto de la empresa—, en todos estos años, como los anteriores gobiernos, tuvo directores que formaban parte del Directorio en representación de las acciones del Estado nacional. Este gobierno y el anterior no tuvieron cualquier director. En la primera etapa, tuvo a un joven economista, hijo de un caracterizado dirigente del justicialismo: Juan Carlos Mazzón. Luego tuvo, nada más y nada menos, que al jefe de Gabinete de esa época: Alberto Fernández; una señal fortísima de que no cualquiera iba a formar parte del Directorio. Y en la última etapa, lo tuvo al actual embajador ante Uruguay, que —todos saben— forma parte del círculo más íntimo, más estrecho, del gobierno.

Directorio de todas las reuniones en las que participaron todos esos funcionarios en representación del Estado. Jamás dijeron nada de lo que yo he escuchado en los últimos tiempos. Jamás dejaron sentadas, en ninguna de esas reuniones de Directorio, algunas de las cosas que hoy son motivo de una defensa tan feroz para sostener el proyecto del oficialismo. Es más, hay un acta que es una perla. Me refiero al acta que sólo suscriben los dos miembros en representación del Estado nacional, no así los de *Clarín* y *La Nación* —por supuesto, con un acuerdo como para salvar la ropa—, donde les permiten a las empresas tener un precio diferenciado por volumen. Reitero: esa acta la

suscriben nada más que los dos miembros en representación del Estado. Y acá yo he escuchado que esa cuestión —la de pagar menos precio por volumen— se convierte hoy en una de las razones de la crítica.

Señora presidenta: para terminar, quiero decir que si el desafío, como en muchas otras ocasiones, es legislar sin cargas personales, sin rencores, sin revanchas, sin ninguna cuestión subalterna y para proteger derechos, la bancada de la Unión Cívica Radical está acá para dar el debate y para acompañar. Por eso, ofrecemos un dictamen que —a nuestro juicio— es superador. Ahora, si lo que se quiere es ganar una batalla de amores y odios personales, no cuenten con nosotros.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). — Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.

**Sra. Negre de Alonso.** — Señora presidenta: abordamos hoy un proyecto de ley que, aparentemente, estaría despojado de pasiones en su letra. Se habla en el mensaje de protección; de declarar de interés público la fabricación, la comercialización y la distribución de la pasta celulosa para diarios a efectos de proteger el derecho a la información, de proteger los insumos, etcétera.

La verdad es que, cuando uno lee el mensaje del Poder Ejecutivo, que tiene su tiempo, como se ha dicho acá —entró por la Cámara de Diputados—, también se pregunta cuál es la necesidad o cuál es la adecuación constitucional que tiene que haber incorporado este proyecto en el artículo 99 de la Constitución Nacional, es decir, en el llamado a extraordinarias. Y digo esto porque lo que dice la Constitución es que el Poder Ejecutivo tiene la facultad —es una facultad propia, por supuesto— de incorporar cuestiones que hagan al grave interés del orden o de progreso, de tal gravedad que esto lo requiera. Y en realidad, señora presidenta —como lo manifestó recién el senador Sanz—, han pasado varios años desde 2003, cuando asumió el presidente Néstor Kirchner; después, cuatro años de gobierno de la señora Cristina Fernández de Kirchner. Lo cierto es que de golpe, después del 23 de octubre, con urgencia, se incorpora en extraordinarias el tratamiento de este proyecto que, por supuesto, vamos a debatir. Creo que casi todos los grupos y partidos políticos que estamos ocupando una banca en este Senado tenemos una posición ya

dicha; pero no por eso debo dejar de decir que no se ajusta a lo que establece el artículo 99. Y la urgencia no tiene razón desde el 23 de octubre hasta ahora cuando, desde 2003, el kirchnerismo ocupa el Poder Ejecutivo de la Nación.

El mensaje del Poder Ejecutivo —no quiero releerlo para no perder los minutos de los que dispongo— expresa que se trata de evitar una democracia tutelada por los intereses de quienes controlan el papel. Se indica: “desde una democracia tutelada por poderes no democráticos que nadie ha elegido”. Asimismo, se indica que debemos avanzar hacia una democracia que responda a la voluntad popular. Entonces, a partir de allí, quería empezar a hacerme una serie de preguntas a raíz del mensaje del Poder Ejecutivo.

Hablamos de una democracia tutelada por poderes no democráticos a través del monopolio del insumo; de la producción de este papel. Entonces, nos preguntamos a qué monopolio nos referimos. Ya lo dijo la senadora Fellner, miembro informante: al monopolio que tiene Papel Prensa sobre los diarios locales; sobre los medios de información escritos. Entonces, nos preguntamos: ¿hay monopolio? ¿Qué es el monopolio? Porque hay monopolio cuando no hay otra forma u otra vía. La misma miembro informante lo ha explicado. Hay posibilidades de importación a arancel cero. O sea que, en realidad, estricta y jurídicamente, el término monopolio no se aplicaría, pero sí se puede aplicar la expresión “posición dominante”.

Entonces, también nos preguntamos: ¿la posición dominante es ilícita en nuestra legislación? En realidad, la posición dominante no es ilícita en la legislación siempre y cuando no haya abuso de dicha posición dominante. Así, en el análisis del abuso de la posición dominante, no podemos marginar un hecho que es como una verdad de Perogrullo: el papel es un *commodity*, es un *commodity* de otra naturaleza, pero *commodity* al fin. Es una mercancía homogénea que tiene venta internacional y que está sometida a los precios y a los vaivenes que tienen los *commodities*. Tal el caso de los *commodities* de la soja, los granos, de los cereales, etcétera.

El Estado tiene la obligación, por el artículo 42 de la Constitución, de garantizar que no existan monopolios; pero además, tiene la obligación de garantizar que no exista abuso de posición

dominante. Entonces, me pregunto: a partir de 2003, y después de todo lo que relató el senador Sanz en cuanto a la historia que viene ocurriendo en esta relación, ¿ésta era la única posibilidad y herramienta que el Estado tenía para dar solución, y abrir y ampliar e incluirse en este mercado? No, presidente; efectivamente, no. Habría muchas otras posibilidades. Por ejemplo, propender a la apertura de nuevas fábricas de celulosa.

Aunque, a lo mejor, los pliegos licitatorios están vencidos y ha habido una quiebra de por medio, todos sabemos que cuando Papel Tucumán se licitó en el año 71, la condición en los pliegos era que debía fabricar papel para diarios. Hubo una quiebra de por medio. Por supuesto, uno no tiene posibilidad de acceder a esa documentación. Pero también, podría haber habido una medida para obligar a Papel Tucumán a producir este tipo de papel; o podría haber habido una política de promoción de inversiones o ayudas crediticias para generar nuevos emprendedores, nuevos empresarios, en el marco esta cláusula de paz entre el progreso y el medio ambiente que tiene la Constitución. Bueno, nada de esto existió acá, señora presidenta.

Pero nosotros tenemos experiencias de antecedentes donde el Estado nacional –este Poder Ejecutivo– ha tomado otro tipo de medidas y otras soluciones cuando consideraba que había monopolio o posiciones dominantes de abuso. Voy a mencionar una: ENARSA. Yo era presidenta de la Comisión de Legislación General cuando el 29 de diciembre de 2004 se promulgó la respectiva ley, que acompañé. Me acuerdo de que discutíamos mucho con el radicalismo. El ex senador por Mendoza, Baglini, estaba muy en contra de que el Estado fundara una sociedad anónima. Yo acompañé al oficialismo en ese momento porque me parecía que era correcto, que estaba ajustado a la ley. Y fíjese que, casualmente, señora presidenta, el Poder Ejecutivo mandó en su momento este proyecto con el objeto de que pudiera tener una empresa que interviniera en el mercado, a efectos de evitar situaciones de abuso de posición dominante originadas en la conformación de monopolios u oligopolios.

¿Qué implica esto, señora presidenta? Que, en realidad, ésta no es la única forma de actuar. Si el diagnóstico que hace el Poder Ejecutivo

y que ha referenciado la miembro informante existe en la Argentina en su totalidad, teníamos herramientas constitucionales al efecto. Además, están los propios antecedentes del Poder Ejecutivo a cargo del ex presidente Néstor Kirchner, donde se ha avanzado en otros instrumentos constitucionales adaptados a la legislación vigente y que hoy, como vemos permanentemente en el Boletín Oficial, siguen funcionando. ENARSA sigue funcionando. Si no teníamos todo el capítulo de la ley de sociedades –si mal no recuerdo, el senador Baglini decía que ENARSA debía ser una sociedad del Estado– para formar una sociedad del Estado y cumplir los mismos objetivos que hoy se están buscando a través de una herramienta que, por supuesto, nosotros creemos que es absolutamente vulneratoria del Derecho Constitucional.

No me voy a referir a los medios –a la cantidad o no cantidad– porque parto de la base de la información que ha dado la miembro informante respecto de la cantidad de diarios. Ella ha sido muy precisa. Todos hemos leído y sabemos qué cantidad tiene ADEPA, ADIRA y quiénes son los medios del interior que han adherido. Una sola violación constitucional para un ciudadano o para una persona jurídica basta para poner en marcha los mecanismos de defensa constitucional que prevé la propia Carta Magna, que es el Poder Judicial. No voy a avanzar sobre esa temática.

Sí quiero adherir –no voy a repetirlo para no perder el tiempo– a todo el desarrollo que ha hecho el senador Sanz respecto del servicio público. De hecho, según lo que hemos leído y de acuerdo con la opinión de los propios administrativistas, en realidad, estamos ya ante una declaración de servicio público. En seguida voy a volver sobre este tema con relación a los efectos.

Sí quiero avanzar en una posición en cuanto al meollo de la cuestión, pero no sin antes hacer algunas aclaraciones. Porque es verdad que, por ahí, algunos dicen “ocurrió esto o lo otro”. Acá ha sido relatado por los dos senadores preopinantes. Pero me parece que algunos senadores que estamos sentados en estas bancas –me refiero a Pichetto, a Escudero, a Mayans, a Morales y a mí– somos testigos partícipes y, además, testigos presenciales de toda una situación que se ha venido dando en la Argentina. Lo

digo porque esto me da absolutamente libertad en cuanto a la opinión que voy a verter, pero libertad visible, porque la libertad la he tenido siempre, absolutamente siempre; y creo que no vale la pena ni referenciarlo, porque ha sido públicamente demostrado. Pero tengo liberad visible y, por eso, lo voy a expresar, por los antecedentes que los senadores hemos tenido desde enero de 2002 en adelante.

Fíjese, señora presidenta, que allá por diciembre de 2001 —un día como éste, si mal no recuerdo—, por decisión de este Cuerpo, asume la presidencia de la Nación quien hoy es senador por mi provincia, Adolfo Rodríguez Saá. A los dos o tres días, *Ámbito Financiero* publica una noticia diciendo que el gobernador Ruckauf le trajo a Rodríguez Saá el proyecto de ley para licuar los pasivos del Grupo Clarín, para modificar la Ley de Quiebras, que era licuar los pasivos del Grupo Clarín, eliminar los privilegios que tenían los acreedores nacionales y extranjeros sobre el grupo Clarín y, además, avanzar en la devaluación, cosa que fue rechazada. No pasó el mes de enero —yo estaba de presidenta de la Comisión de Legislación General— cuando me llegó un proyecto firmado por el ex presidente Duhalde y quien en ese momento era jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Efectivamente, me remiten un proyecto mediante el cual se modificaba la Ley de Quiebras...

**Sr. Fernández.** — Solicito una interrupción.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). — Perdon, senadora. El señor senador Fernández le solicita una interrupción.

**Sra. Negre de Alonso.** — No; no voy a dar interrupciones hoy. Ustedes discúlpennme, pero después, me cortan el tiempo.

**Sr. Fernández.** — Es una intervención chiquita, senadora; de treinta segundos.

**Sra. Negre de Alonso.** — Adelante, entonces, senador.

**Sr. Fernández.** — Yo fui con Ruckauf a ver al entonces presidente Rodríguez Saá —como el senador recordará— y no se llevó ninguna de esas cosas. Al presidente Rodríguez Saá lo fuimos a ver el 25 de diciembre, día de Navidad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el vicegobernador y yo —que era ministro de Trabajo— y no llevamos ningún papel en la mano.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Señora presidenta: solicito el uso de la palabra, dado que he sido aludido.

**Sra. Negre de Alonso.** — Pero a mí me tienen que descontar el tiempo, porque el senador ha sido aludido.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). — Adelante, senador Rodríguez Saá.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Efectivamente, el 25 de diciembre, viajé de San Luis para entregarle a la provincia de Buenos Aires el decreto que le daba —no recuerdo exactamente— 150 mil planes de trabajo, y a las 3 de la tarde nos reunimos en la Casa de Gobierno. Esto fue el 25 de diciembre, día de Navidad. Pero con el doctor Ruckauf tuve muchas reuniones; ésa fue una.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). — Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

**Sra. Negre de Alonso.** — Gracias, presidenta.

Le aclaro al senador Fernández que yo estoy relatando un artículo de diario que tengo guardado.

Posteriormente, nos llega este proyecto de ley. Venía impulsado por el Poder Ejecutivo; y en este Senado, estábamos estas cuatro personas que hoy seguimos estando. Por supuesto, nosotros lo modificamos; no aceptamos la licuación de pasivos privilegiados para el Grupo Clarín. Todo esto está en las versiones taquigráficas, así que esto me da absoluta libertad.

Pero además, señora presidenta, usted sabe que yo pertenezco a un grupo político en el cual el ex gobernador de mi provincia se presentó a las elecciones nacionales. Nunca salimos ni en *Clarín* ni en *La Nación*. Nunca nos entrevistaban, nunca seguían las campañas nuestras. Así que no tenemos absolutamente nada que ver con el Grupo Clarín ni con *La Nación*. Por eso yo quería relatar esto, porque a mí me da la necesaria liberad —me refiero a la libertad visible, porque siempre la ha tenido— para expresar lo que quería expresar respecto de este proyecto de ley.

Con respecto al interés público —como dije—, me remito a lo que me dijo el senador Sanz, que lo explicitó correctamente. Pero quiero decir que, en realidad, dentro del “interés público”, atento a la complejidad de la cuestión y a cómo se está referenciando, prácticamente, se está hablando de un servicio público. Ahora, la doctrina



dice también que esto del interés público y del servicio público tiene un límite, y que uno de los casos del límite es el caso de la libertad de información y de la libertad de prensa. Es un principio irrestricto el de la libertad de expresión, el de la libertad de prensa, el de la libertad de pensamiento; y que sólo puede ser limitado por el Estado, por ejemplo, en el caso de que la prensa pida el uso del espacio público, que necesite ondas para señales televisivas, etcétera.

Entonces, creo que para el interés público —no dudamos de que haya interés público del Estado argentino en garantizar la libertad de información, la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, la libertad de expresarse—, esta herramienta no es la adecuada. Además, la seguridad jurídica y el valor justicia no pueden ser nunca dejados de lado, aunque estemos hablando de proteger el orden público. Al respecto —si usted me permite—, quiero citar una obra que ha sido traducida del alemán, donde dice que, en el orden de prelación de los valores, tenemos que colocar en el último lugar a la conveniencia de derecho para el bien común. De ninguna manera es derecho todo lo que al pueblo aprovecha sino que el pueblo aprovecha, en último análisis, sólo lo que es derecho, lo que crea seguridad jurídica y lo que aspira a ser justicia. La cita es de Radbruch, Gustav, “Arbitrariedad legal y derecho suprallegal”, traducido del original “*Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*”.

Señora presidenta: yo escuché ayer al senador Pichetto cuando dijo que el enemigo del Poder Ejecutivo es *Clarín*. Indudablemente, si el enemigo del Poder Ejecutivo es *Clarín* y el 54 por ciento de la población apoyó a la señora presidenta, hay una ratificación y hay un aval de sus políticas. Ahora —por eso cité esta traducción—, yo me pregunto: ¿las mayorías dan derecho a violar la Constitución? No, las mayorías no dan derecho a violar la Constitución; ni a un solo individuo, como hice la referencia recién, con respecto a las garantías que se encuentran conculcadas.

Creemos que hay dos garantías constitucionales fundamentales que se violarían de aprobarse esta ley. En primer lugar, el artículo 42 de la Constitución Nacional —acá lo mencionó la señora presidenta de la Comisión— establece que el Estado tiene la obligación del control de los monopolios, la protección de los derechos

y, además del control de los monopolios naturales y legales, el de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y el de la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios. El Estado tiene la obligación de controlar los monopolios privados y tiene la obligación de abstenerse de constituir monopolios públicos.

Por supuesto, tengo que hacer referencia al artículo 32 de la Constitución Nacional. Nosotros tuvimos una posición clara cuando fue el debate de la Ley de Medios, y la quiero ratificar: no hay posibilidades de reglamentación. Además, nosotros ratificamos la posición con respecto a que reglamentarla es un avasallamiento del orden federal a las autonomías de las provincias. O sea que el Congreso Nacional no estaría en condiciones de hacerlo.

¿Qué es lo que creo que hay, señora presidenta? Que es el primer camino, o el primer paso, o se vendrá una segunda ley. Creo que, en definitiva, lo que estamos generando es una expropiación. Esta expropiación podrá ser directa, si es el primer paso, o estará generando las condiciones para que sea indirecta, en tanto la Ley de Expropiaciones dice que puede haber expropiación indirecta cuando el Estado le imponga al derecho del titular de un bien o cosa una debida restricción o limitación que importe lesión a su derecho de propiedad. Esto ha sido ratificado por la Corte Suprema en distintas formaciones: en el caso Verbitsky y, después, en el caso de *La Prensa*, con un voto muy importante de Belluscio. En el caso Verbitsky, con un voto de Fayt. Voy a pedir la inserción de eso para no perder los pocos minutos que me quedan.

Además, me quiero referir a la Convención Americana de Derechos Humanos. Como dice la senadora, efectivamente algunos diarios la leen de una forma y otros, de otra, pero es la misma; por supuesto, es la misma. De hecho, está incorporada a nuestra Constitución Nacional. Allí se declara que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, etcétera.

También, tenemos la Declaración de Chapultepec, que tiene diez principios básicos, pero voy a mencionar dos: “No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión



de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”. En segundo término, indica: “Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas”.

Entonces, señora presidenta, ¿qué es lo que me va quedando para terminar? Lo relativo a los derechos políticos y a los derechos patrimoniales. No es como la señora presidenta dijo –o a lo mejor, la entendí mal– que los derechos políticos son una responsabilidad política. ¡No! El derecho político en la Ley de Sociedades Comerciales –estamos refiriéndonos a una sociedad anónima– está previsto para situaciones excepcionales, a fin de que sea ejercido por personas que no son los titulares del derecho patrimonial, y está consignado como excepcionalidad. Porque el derecho político va unido al derecho económico. En este caso, esta ley le está cediendo a una comisión externa –totalmente externa; que no tiene prenda, que no tiene usufructo– los derechos políticos de las inversiones que el Estado realizare en el marco de estas inversiones que quiere hacer para garantizar el acceso al papel.

Señora presidenta: la verdad es que yo no tengo un diario; no manejo los números; no sé cuál es el costo de la importación. Hay acá encumbrados señores senadores que harán referencia a eso. Lo que sí digo es que, en realidad, por algo les dicen el cuarto poder a los medios. El medio controla el poder público, el medio controla al gobierno. ¡Es así! ¡Por algo le dicen el cuarto poder! ¡Es así! Esa es la vía que garantiza la información y que, ahora, en realidad, está suplida por las páginas web.

De nada le valía a China cerrar la información, porque llegaba a través de Internet. Si no, recordemos a la señora de Cuba, cuyo nombre ahora no recuerdo: cómo lograron que, finalmente, la señora presidenta la hiciera venir a nuestro país. ¿Cómo penetró la información sobre la situación en la que se encontraba ella? Bueno, penetró a través de Internet. O sea, hoy los medios y la información están absolutamente superados por eso.

No nos gusta que nos critiquen. No pertenezco a un grupo político que haya sido bene-

ficiado por los medios de prensa nacionales. Al contrario; creo que nuestro candidato fue ninguneado, absolutamente ninguneado. No tenía ninguna posibilidad. De hecho, cuando se llamaba a debates, a veces, hasta había que hacer reclamos porque se nos omitía en las invitaciones. Recuerdo perfectamente –y esto pertenece al grupo *Clarín*– que TN hizo un debate de candidatos a vicepresidente. Estaban todos menos el candidato nuestro, que no fue ni siquiera invitado. Así que en esto estamos absolutamente libres para poder opinar. Ahora, no me gustan ni los monopolios privados ni los estatales. También me gustaría que la televisión pública fuera más abierta. Por supuesto que me encantaría que fuera más abierta.

Entonces, concretamente, creemos que hay una clara violación de los artículos 32 y 42 de la Constitución Nacional, del artículo 13 de la Convención de Derechos Humanos –llamado Pacto San José de Costa Rica, incorporado con nivel constitucional a nuestra Carta Magna– y, también, creemos que la Corte Suprema, con la actual constitución, ha reforzado el principio de la “real malicia” que, como ustedes saben, es el principio por el cual los funcionarios públicos no pueden –o no podemos– pedir indemnizaciones, en principio, a los diarios, por información que se brinde sobre nosotros, salvo que el funcionario tenga la prueba contundente de que el diario sabía que se trataba de una falsedad. La Corte de Estados Unidos lo ha hecho en el *New York Times* contra Sullivan, y lo ha profundizado para garantizar este derecho, el derecho de expresión, el derecho de información que, señora presidenta, no es otra cosa que garantizar la libertad.

El pensamiento se trasluce a través de la palabra, y si no tenemos la garantía de poder transmitirlo a través de la palabra, entonces, estaríamos violando la libertad. Y la verdad es que lamento que el Poder Ejecutivo haya elegido este camino porque tenía un antecedente, aparentemente muy exitoso –para quienes seguimos el Boletín Oficial–, como el de ENARSA. También, tenía un capítulo entero de la Ley de Sociedades, que hubiera logrado los mismos objetivos en el camino de la Constitución y de la ley.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora Monllau.

**Sra. Monllau.** – Trataré de acotar mis palabras, señora presidenta, por cuanto el Bloque del Frente Cívico y Social va a coincidir en esta ocasión con el dictamen en minoría, que con tanta ejemplaridad ha defendido el senador Ernesto Sanz. Así lo haremos porque, como bloque, creemos que el proyecto de ley a sancionar debería ser superador de la tensión que existe entre los medios *Clarín* y *La Nación* con quienes hoy nos gobiernan.

En el ámbito de este recinto se ha planteado hace unos momentos que se debe pedir a los medios imparcialidad. Yo creo, señora presidenta, que en realidad, más que imparcialidad se estaba pidiendo neutralidad y asepsia, cosa que en el campo de las ciencias sociales no existe. Porque como bien señalan algunos estudiosos, todo discurso es ideología.

Habiendo dicho esto, me permito señalar, juntamente con el pensador Noam Chomsky que, si creemos en la libertad de expresión, entonces, debemos creer que la libertad de expresión es también para puntos de vista que nos disgustan. Por ejemplo, Chomsky decía que Goebbels estaba a favor de la libertad de expresión, pero para los puntos de vista que compartía; igualmente, Stalin. “Si estás a favor de la libertad de expresión [seguía diciendo Chomsky], significa que lo estás, precisamente, para los puntos que no compartes.” Si no creemos en la libertad de expresión para la gente que despreciamos, no creemos en ella para nada.

Señora presidenta: últimamente, me ha tocado asistir a muchos espacios donde se clausuran el debate y la libertad de expresión; convocatorias que se realizan, precisamente, en nombre de la libertad de expresión. Me ha tocado hacerlo en espacios propios y extraños, en los que, de antemano, se ponen reglas de lo que se puede decir o no. Espacios que terminan siendo simulacros –cuando no verdaderas fantochadas– para legitimar discursos hegemónicos, si no posiciones personales.

He visto y vemos, señora presidenta, cómo se afianzó en el discurso oficial la lógica amigo-enemigo, y hasta me animo a decir –a juzgar, por el modo de comportamiento y las acciones de algunos funcionarios de gobierno– que, también, se afianzó una lógica casi de esclavo y amo, sobre todo, para algunas jurisdicciones

provinciales. Nada se define en las provincias; todo se define en los despachos ministeriales.

Son estas acciones las que nos hacen dudar de algunas iniciativas que provienen del gobierno y, precisamente, hacen que sostengamos que aquí no hay debate, señora presidenta. Porque el verdadero debate, el más intenso, no está hoy aquí sino que se da en el proceso de gestación de las leyes en el tiempo. Repito: en el tiempo que lleva ese proceso retroalimentador de discrepar y acordar, y volver a discrepar y volver a acordar, y que esto se refleje en sucesivos dictámenes y borradores de dictámenes, hasta llegar a la versión final. Porque quienes estamos en bloques minoritarios –como en este caso– creemos que es imprescindible y necesaria para la vida democrática la polifonía de voces.

El tiempo, la premura, el querer sancionar –como dicen– las leyes que la presidenta necesita –no escuché decir “las que las instituciones o la gente necesitan”– en esta alocada carrera, en definitiva, hacen que mostremos frutos, como ya ha ocurrido en otras instancias, que no están maduros. Lo de ayer y lo de hoy creo que, precisamente, son muestras de ello.

La libertad de expresión y el acceso a la información creo que merecen más que esto. Sabemos muy bien cómo y de qué manera en los años 50 los editores debían solicitar autorización para importar papel a un organismo oficial que definía los cupos desde criterios arbitrarios. Hoy, la situación es diferente porque los diarios no encuentran dificultades para obtener el insumo.

Sabemos, y no obstante ello no compartimos, los silencios cómplices de muchos medios ni los excesos en el manejo del papel. Pero no podemos por ello violentar la Constitución Nacional de manera intempestiva y con omnipotencia –a la que ya nos tiene acostumbrados el gobierno–, cosa que hace que miremos con recelo y consideremos que entraña un serio riesgo para la libertad de expresión este proyecto que hoy estamos abordando en el marco de este recinto, al que el bloque del Frente Cívico y Social no habrá de apoyar.

Me permito, para cerrar –ya que usted me ha pedido que redondee–, citar a un escritor catalán a quien llamaban “Perich” –que, además, era humorista, por lo cual, tal vez, podemos observar cierta sorna en lo que voy a decir–.

Él decía que, gracias a la libertad de expresión, es posible que cualquiera pueda decir que un gobernante es un inútil sin que nos pase nada; al gobernante, tampoco.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Verani.

**Sr. Verani.** – Señora presidenta: pido autorización para insertar. Solamente voy a expresar algunas ideas, en homenaje a la brevedad que se nos ha pedido.

En primer lugar, quiero decir que no creo que exista ningún monopolio; y no hay monopolio porque existe libertad de importación, no hay trabas a la importación, no hay aranceles. Aquí esto se ha dicho y reiterado. También, se habló de que esto no se tiene en cuenta, a pesar de que el papel importado es más barato. Pero en todo eso hay libertad de empresa. Si se tuviera en cuenta el costo, no quedarían empresas que produjeran a precios mayores que otras ni siquiera dentro del país. Esto lo vemos en cualquier ramo comercial.

Además, quiero decir que existe otra empresa, que es Papelera Tucumán, que no se tuvo en cuenta. Sin embargo Papelera Tucumán, que recibió los mismos incentivos, prefirió elaborar un papel diferente del papel sobre el cual estamos discutiendo porque es más redituable. Por otra parte –aquí sí merecería una aclaración–, no se dijo nada sobre la violación de esos contratos iniciales por parte de Papelera Tucumán.

Así que reitero que –tal como dijo el senador Sanz– mi concepto con respecto a la iniciativa del Ejecutivo sobre Papel Prensa es que resulta claramente inconstitucional. Basta con leer el artículo 32. Soy un abogado que ha trabajado mucho en su estudio. No soy constitucionalista, pero no hace falta ser un genio de interpretación para llegar a esta conclusión. Simplemente, con leer el artículo 32 uno se da cuenta de que es inconstitucional.

Además, hay algo que es importante. Acá se declara de interés público. Así estamos transgrediendo la libertad de prensa; porque al declarar de interés público, lo sometemos a la jurisdicción y, además, lo dejamos sujeto a expropiación. Yo creo que Papel Prensa, a partir de que sea declarada de interés público, es expropiable. Ésta es la realidad de las cosas.

Lo que digo –a ver si puedo dar el pensamiento general– es que se regula con apresuramiento. De parte del gobierno, se quiere regular este tema de Papel Prensa. La pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué ya legislar sobre la única empresa que produce papel para diario, que no escasea en el mercado ni acá ni mundialmente? Fíjese que en el mundo había once empresas productoras de este papel, quedaron cinco; las demás se fundieron. Así que no creo que sea un gran negocio.

Lo que me pregunto es si resulta urgente la regulación de la producción del papel o es urgente la alineación de la prensa escrita bajo un solo discurso. ¿Cuál de las dos cosas es urgente? Es otro interrogante. De manera que si esa es la realidad con respecto a este insumo, objetivamente no existe ninguna razón comercial monopólica, ni de posición dominante, ni de especulación que haya sido probada que dé motivo al Estado para intervenir de una manera tan compulsiva en el rubro que produce y provee este insumo principal de la prensa escrita. Aquí es donde este insumo –materia prima de la prensa escrita– trasciende la significación y se convierte en el insumo indispensable de la transmisión de las ideas. Pero yo digo de todas las ideas: de las mías y de las tuyas. O sea, las del oficialismo y las de los que no compartimos, algunas veces, ciertas ideas del oficialismo; otras, coincidimos. Esto forma parte de la concepción estrictamente democrática.

En el papel, se plasman las ideas del que piensa igual que el gobierno y del que piensa distinto, con lo cual resulta un elemento esencial para la contribución democrática; para una democracia plural, en serio, que defiende y respeta al adversario; que no convierte en un enemigo instantáneo al que se atreve a expresar una idea diferente. La democracia que se reinventa en el pensamiento distinto, diverso y que rechaza por definición un discurso unilateral.

Para finalizar, lo que más deseo es que esta conclusión que hago sobre el tema de esta concepción de amigos y enemigos sea un rotundo error de análisis. Lo digo con absoluta sinceridad, sobre todo, a esta altura del partido de mi carrera política. Espero que dentro de uno o dos años, cuando seguramente ya voy a dejar el bastón, pueda pedir disculpas por haber errado el análisis. No sólo será una cuestión de

honestidad intelectual sino que será para mí un verdadero alivio republicano que tenga que pedir disculpas por esta sospecha.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Romero.

**Sr. Romero.** – Señora presidenta: no abundaré en el criterio que se ha expresado aquí sobre la incompatibilidad de esta ley con el artículo 32 de la Constitución. Esa será una discusión de abogados, será una discusión judicial. El tema es que estamos ante un problema político y no un problema jurídico. Es un problema de enfrentamiento que tiene el gobierno, que así lo ha entendido hace varios años. Creo que fue cerca del conflicto del campo cuando, en un momento, todo el mundo supo que el ex presidente estaba enojado con *Clarín*, después de haber convivido unos años positivamente. Entonces, se trata de un problema político que, ahora, lo legislamos y, luego, lo judicializamos. Ese es, justamente, el problema: cuando judicializamos los problemas políticos o politizamos los problemas judiciales.

Este conflicto no se da sólo a nivel nacional sino que, también, se da en nuestras provincias cuando no somos capaces de encontrar soluciones a los problemas que se plantean a través del diálogo, del equilibrio, del análisis, del debate. Aquí estamos abordando un tema que en sí no tiene problemas, salvo el aspecto político que acabo de decir.

Yo no veo que hoy haya un clamor de los consumidores de papel para consumir y conseguir ese material. ¿Es posible que haya habido problemas? Sí, es posible. Había dos fábricas. Esto lo digo con conocimiento y vengo aquí despojado de las peleas que tuvimos desde el diario de mi familia en Salta hace treinta años. En los años 70, un grupo de diarios comenzó a construir una unidad para lograr que la producción fuera de los diarios. Por una cuestión de oportunidades o por lo que fuere, el éxito lo tuvieron los grandes diarios –porque así se dividían– que pudieron adquirir Papel Prensa. El resto de los diarios del país, los diarios llamados pequeños –que éramos muchos–, no pudimos llevar adelante el proceso de Papel Tucumán porque, al ser un beneficio fiscal y como los diarios no tenían excedentes de impuestos para aplicar, no pudieron soportar tanta inversión y tuvieron que ceder. Luego de esa cesión, y después de que se inauguró y se hizo andar la

fábrica, dio varios tumbos hasta que terminó fabricando otro tipo de papel.

Además, estamos regulando el papel hecho con madera de bosques cuando, ya en los años 70, se pensaba que era mucho más amigable ambientalmente hacerlo con bagazo de la caña que se quemaba para las calderas. Esta materia prima utiliza el ingenio Ledesma en Jujuy, pero para fabricar otro tipo de papel. Eso es parte de la disputa comercial; eso es parte de la competencia que hay entre las empresas. Es posible que algunos medios termináramos con cupo de papel en Papel Tucumán y otros con cupo de papel en Papel Prensa. Es posible, también, que algunos diarios, en algún momento, no hayamos podido comprar a Papel Prensa. Entonces, se recurre a la importación.

También es cierto que cuando Papel Tucumán cerró la fabricación de papel para diarios, se abrió el cupo de Papel Prensa para aquellos diarios que eran clientes de Papel Tucumán. Es decir, estaba dentro de lo que es la competencia comercial. Nunca se nos ocurrió a ningún medio del interior ir a quejarnos a la Justicia, porque no había motivación judicial, o al Estado, para que ejerza una protección en un ámbito en el que los diarios no consideran propicio legislar.

Para los diarios, no de aquí sino del mundo democrático, la mejor ley de prensa es aquella que no existe: eso es un axioma prácticamente. Así lo entendieron muchos países que eliminaron leyes que restringían o no llegaron a sancionar otras, advirtiendo que la mejor ley es la que no existe.

Otra cosa es la competencia comercial. Se ha citado aquí a Julio Ramos, a quien conocí en 1974. Fue amigo mío hasta que murió. Aunque no debemos citar a los muertos, ya que no pueden defenderse ni respondernos, a veces él me criticaba por el diario y yo me la aguantaba. Una de las críticas que nos hizo fue cuando, en el Congreso, eliminamos ese artículo que limitaba a los medios gráficos poder adquirir otros medios audiovisuales. También fue un error, pero acá lo aprobamos. En ese momento, ésa fue la opinión mayoritaria. Eso abrió la posibilidad de que los medios grandes fueran más grandes y que esta concentración que existe en Buenos Aires en todo sentido también se diera en los medios. Luego, el advenimiento de la transmisión satelital y de los medios electrónicos hizo



que lo que antes era un canal local de Buenos Aires hoy sean canales llamados nacionales y todo esté más globalizado.

Pero si bien es cierto que, en ese momento, compartimos con Ramos el enfrentamiento con *Clarín*, *La Nación* y *Papel Prensa*, yo estoy seguro de que así como era un firme defensor de las ideas, también era un firme defensor de la libertad de prensa.

Vengo acá sin ninguna pasión ni amiguismo, porque nunca lo tuve. En cambio, el gobierno sí fue amigo de estos grupos. Incluso, cuando yo era gobernador o cuando era candidato no recibí nunca ningún favor de estos medios, al contrario. Recuerdo que un año hubo una inundación inesperada en Tartagal y el compañero Alberto Fernández se ocupó de enviarme todos los movileros a los puentes en Tartagal, porque parecía que yo era responsable hasta de la lluvia. Pero son parte de las reglas del juego. Yo creo que la prensa tiene derecho a decir lo que quiera y yo también, pero sin limitar su derecho.

¿Y cómo creo yo que se da el ejercicio del derecho a la diferencia de la década de los cuarenta, de los cincuenta? Por la multiplicidad. En esa época, eran contadas con los dedos de la mano las radios que existían. No existían las FM, no existía Internet, existían algunos diarios y algunas radios AM –con suerte, tal vez, una por provincia–. Era otro el esquema que había.

Hoy, la tendencia a la concentración que pueden tener los medios es la mejor solución a la diversidad y la pluralidad. Y lo que no hizo el Estado estas últimas décadas lo hizo la gente. En cada uno de nuestros pueblos no alcanza el dial para las FM irregulares –llamémoslas así– o para las radios con algún permiso precario. Pero son la expresión local, la expresión vecinal, la expresión que ha surgido irregularmente, porque ni siquiera fueron autorizadas en su mayoría, pero existen. Esa es una forma de pluralidad y de lucha contra las tendencias monopólicas, es decir, que haya diversidad. El gobierno ha practicado la diversidad, hoy podemos enumerar cientos de medios que por alguna razón u otra son oficiales, paraoficiales o son amigos del oficialismo, cosa que no me molesta. Pero, además de fastidiarnos, no podemos correr el riesgo de permitir que se avance de distintas maneras sobre aquellos que no hablan a favor, con denuncias penales, con ataques verbales,

con escraches a periodistas que, aunque no nos caigan simpáticos, no se merecen escrache alguno.

Esto no lo digo como crítica sino como una opinión y un aporte, porque esto puede ser malo para el gobierno, porque en el mundo va a ser muy difícil de explicar que aquí estamos, con justicia, declarando de utilidad pública una fábrica de papel para diarios y que hacemos leyes con nombre y apellido. Eso va a ser muy difícil de explicar, va a haber muchas críticas hacia la Argentina, y no es la imagen que nos gusta de la Argentina, no es la imagen a la que se refiere la señora presidenta en sus mensajes. Pero, por otro lado, en el accionar legislativo o el de muchos funcionarios se dice o hace lo contrario. Y así sucede con las agresiones del señor Moreno, o con la presencia de Gendarmería, con la intervención de un juez de Mendoza muy “traído de los pelos” en un conflicto en otras dos jurisdicciones, que se aboca y manda a un interventor a una compañía de cable con cincuenta gendarmes creando allí una situación más que complicada. ¿Qué es lo que yo veo? En el mundo el ataque a la libertad de expresión no es patrimonio de la derecha o de la izquierda; es patrimonio de una visión autoritaria, de una visión seguidora de esa teoría de “amigo-enemigo” de Carl Schmitt, que fundó la base doctrinaria de muchos autoritarismos.

Considero que no es lo moderno; eso es la confrontación de la Guerra Fría y no es lo que el país necesita. Si uno hace un análisis de la ley, se puede ver que aquí no se puede decir que haya un interés público del Estado. Y que, además, incluya a todos los diarios aquí en la ley, porque al ponérselos como consumidores o usuarios, también esta ley pone a los medios dentro, porque habla de los fabricantes, distribuidores y compradores. Se habla de la fabricación y de los compradores, y por la ventana tenemos una ley que nos mete aquí a los diarios con obligaciones. ¿Con qué razón los diarios tienen que ir a un censo? ¿Con qué razón tienen que ir y presentar documentación?

Después, el artículo 7º dice que las actividades comprendidas serán ejercidas libremente pero después hablamos de una serie de requisitos enormes de obligatoriedad y del establecimiento del Ministerio de Economía como autoridad de aplicación. Creo que podemos lograr el



efecto contrario, no sólo que no resolvamos el tema del papel ni que aumente la fabricación, sino que terminemos importando ese insumo, como pasó con la carne.

Ahora están subiendo los aranceles del Mercosur, pero no creo que la primera medida sea subir los aranceles del papel. Si puede ser la primera medida que los permisos de importación no sean automáticos, con lo cual los diarios estarán como tanta gente que quiere importar repuestos, accesorios para equipos industriales y no sabe cuándo le van a llegar. ¿Quién nos asegura que dentro de poco tiempo no vaya a resultar que para importar papel no haya que pedir un permiso especial, que para unos demore y para otros no? Eso sería lo más nefasto que nos pueda pasar, pero la ley lo permite.

Y ¿cómo será la voluntad de entrometerse en las empresas? El artículo 11 tiene dos incisos donde habla de inspecciones: el inciso *e*) dice que deberá realizar las inspecciones que sean necesarias, y el inciso *n*) también habla de realizar auditorías e inspecciones, pero ¿qué voluntad de inspeccionar tienen si hay dos incisos referidos a lo mismo? La técnica legislativa correcta sería haber puesto un solo inciso de inspección y poner todos los casos, pero acá hay otras cosas.

El inciso *f*) autoriza a la autoridad de aplicación a promover ante las autoridades competentes las acciones pertinentes que tiendan a asegurar el cumplimiento en sus funciones y los fines de esta ley y su reglamentación. O sea, no va a recurrir a la autoridad ante casos de incumplimiento, sino al revés, preventivamente para cumplir. Esto y pedir la intervención de la empresa pasado mañana, es lo mismo. Con esto el gobierno va a lograr desapoderar a los actuales propietarios de una manera mucho más barata que con la expropiación.

Después voy a hablar de cómo en la época de la guerra, del final del gobierno conservador, del gobierno militar del 43, luego el gobierno constitucional del general Perón, había algún mecanismo de control del papel en época de guerra. Pero le llamaban expropiación y cuando un barco traía quinientas toneladas, expropiaban cien. No digo que esté bien expropiar, pero, por lo menos, cuidaban la forma de decir que era una expropiación. Acá sería una especie de confiscación o de expropiación baratísima.

Lo mismo sucede respecto de la Comisión Federal Asesora, en donde haríamos una asamblea popular con diez diarios por provincia. Pero, además, lo malo es que el artículo 14 obliga a que los integrantes de la Comisión Federal Asesora deban estar inscritos en un registro. Ahora, los diarios tienen que estar inscritos en un registro en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Les recomiendo a los diarios que no se presenten en ningún registro, porque ello sería convalidar la inconstitucionalidad de una norma que rige a la prensa y no debería ser porque no está facultada por la Constitución.

**Sr. Fernández.** – Para importar tienen que estar inscritos.

**Sr. Romero.** – Como importadores, pero esa es otra cosa. Un importador no está inscripto como diario, está inscripto como importador.

**Sr. Fernández.** – Hoy están inscritos.

**Sr. Romero.** – Acá dice que para poder integrar la Comisión Federal Asesora, los compradores deben estar inscritos en un registro que se crea. Es otro registro, no el registro de importadores de Aduana, es otro registro.

Sobre la fábrica de Tucumán se deben estudiar bien las condiciones originales, porque la estamos excluyendo de esta ley cuando, en todo caso, si vamos a hacer una maldad, hagámosla completa, pongamos en la ley a la fábrica de Tucumán, a Ledesma, a Celulosa Argentina y a todas. Vamos a ver cuántos papeles de diarios vamos a producir, cuánto va a faltar, cuánto hay que invertir si queremos el autoabastecimiento. Con la ley como está, ¿cuántos se van a animar a invertir?

No creo que el problema se solucione ni que se vaya a incrementar la producción.

Ahora viene el tema del cupo. El artículo 27 está prácticamente estableciendo el cupo, porque dice que a los efectos de asegurar el reparto equitativo del costo relativo de importar entre todos los demandantes, el comprador de pasta de celulosa y de papel para diarios, para hacerse acreedor a la confirmación de venta de pasta de celulosa –aclaro que nunca ningún medio compra pasta de celulosa; éste es un error técnico, dado que para no decir siempre papel prensa a veces dicen pasta celulosa, a veces papel y otras papel prensa, pero la pasta de celulosa es materia prima que no la conoce ningún con-

sumidor— deberá acreditar qué importó y va a importar, o sea, hay que declarar qué se importó y qué se va a importar directa o indirectamente para poder asegurar el reparto equitativo.

Esta es la “cupificación”. Esto es la forma sutil de decir que, de alguna manera, se va a asignar el cupo de papel que existe.

Si a esto le agregamos lo que creo que va a suceder, que es que se va a dificultar la importación, lo que estamos diciendo aquí, más allá del problema legal que pueda tener Papel Prensa, es algo mucho más grave, que es que atrás del papel están los medios, y atrás de los medios está la libertad de prensa. Ese es el nudo del problema.

Creo que el gobierno, cuando avance en este proceso, va a terminar afectando la libertad de prensa, lo cual va a traerle a sí mismo —más que a la prensa— una serie de problemas que no quisiéramos, ya sea en materia de imagen a nivel internacional y en materia de prestigio del país. Esto es lo que debería evitarse.

Tengo aquí algunos decretos de “cupificación”; uno del año 1942, que está firmado por el entonces presidente del Senado, un provinciano nuestro, Robustiano Patrón Costas, y otros de 1944/1945, de Farrell y Perón. Pero en ese momento había un pretexto, estaba la guerra y había escasez de papel en el mundo. En la época de la guerra los barcos llevaban otras cosas, no papel, pero después eso quedó como costumbre.

Nosotros, como peronistas, tenemos que asumir lo que estuvo bien y lo que estuvo mal, y el enfrentamiento con la prensa, justificado o no, no nos fue positivo. Durante décadas a los justicialistas nos reprocharon esa actitud.

—Murmillos en las galerías.

**Sra. Negre de Alonso.** — Señora presidenta...

**Sr. Romero.** — ¿Pueden hacer silencio en las galerías, por favor?

Tardamos décadas en explicar esto.

Yo me quedo con el general Perón que conocí cuando teníamos 20 años y éramos estudiantes, cuando dijo que volvía descargado de pasiones, de odio y de rencor; con el general Perón que se dio el abrazo con Balbín, con el general Perón que dijo respecto a la libertad de prensa que nos fuimos con todos los medios a favor y en 1973

volvimos con todos los medios en contra. Esa es la virtud de un político que priorizó la política a las pasiones.

La que elige es la gente. La gente es la que eligió a la señora presidenta por la cantidad de votos que obtuvo y es la gente la que elige qué canal va a ver o qué diario va a leer. Y no nos tenemos que enojar si la gente prefiere un diario que no nos gusta. Podemos seguir leyendo uno que nos guste aunque tenga menos tiraje; ¿qué problema hay?

Para terminar, quiero decir que toda la metodología que se está usando, la falta de reclamos y las presiones de diversa índole a distintos medios es parte de un conjunto de cosas que nos dan temor.

Además, con el éxito que obtuvo el gobierno es injustificado que genere un conflicto que no existe, que genere un conflicto mayor, que aparezcamos en la lista de los países que restringen la libertad de prensa, que no son tantos.

La tradición de restricción a la libertad de prensa de Cuba es conocida, porque data del año 1960, después hubo una época, durante la dictadura de Somoza, en la que se sumó Nicaragua y luego Paraguay en la época de Stroessner, pero a medida que las dictaduras se fueron yendo esos países fueron recuperando la libertad de prensa, y hoy quedan Cuba, Venezuela, Ecuador. Ni siquiera Bolivia restringe, tiene conflictos con algunos medios pero no hay restricción ni tantas denuncias.

No me gustaría que la Argentina esté jugando en esa liga; en la liga de los países donde se restringe la libertad de prensa, y que nosotros los peronistas, sobre todo los que están gobernando ahora, no hayamos aprendido que eso fue un error reconocido tácitamente por el propio general Perón y que no debemos repetir los errores.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). — Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.

**Sra. Estenssoro.** — Señora presidenta: el marco regulatorio que se quiere sancionar hoy para controlar la producción, comercialización e importación de papel de diarios, a mi entender, es una aberración legislativa y una afrenta a las garantías y derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos a los cuales

hemos adherido y que han sido incorporados a nuestra reforma constitucional de 1994.

Voy a decir a qué me refiero porque, aunque ya se ha dicho anteriormente, por la importancia de este debate creo que vale la pena que sepamos a lo que nos referimos.

El artículo 14 de nuestra Constitución dice que todos los habitantes de la Nación gozan del derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; también de usar y disponer de su propiedad –lo cual creo que está en riesgo en este caso– y de asociarse con fines útiles.

El artículo 32 es muy específico respecto de lo que estamos tratando y dice que el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta –ya ni siquiera dice “de prensa” sino “de imprenta”– o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.

La Corte Interamericana, la Convención, el Pacto de San José de Costa Rica, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos –que es una garantía supranacional de la cual nosotros formamos parte– dice en su artículo 13 que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales o particulares sobre el papel para periódicos.

Pero, además, en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre los principios que se resaltaron en el año 2000, en el punto 12 se dice que los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas, por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos, y que en ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Dice también que las leyes antimonopólicas que tienen que regir para los medios de comunicación, tanto audiovisuales como escritos, no pueden ser –como esta ley– leyes específicas sino generales. Acá estaríamos violando todos los artículos que leí y este principio.

En 2010 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en su informe sobre la libertad de prensa en las Américas, se refirió a los proble-

mas entre el gobierno y la prensa. Ya ha sido parte y está preocupada.

En el punto 32 de ese informe –voy a agregar esto a la versión taquigráfica– dice que la existencia de un contexto de confrontación extrema en el cual se producen descalificaciones y estigmatizaciones constantes genera un clima que impide una deliberación razonable y plural sobre todos los asuntos públicos. Si bien es cierto que la tensión entre la prensa y los gobiernos es un fenómeno normal que se deriva de la natural función de la prensa y que se produce en muchos Estados, también lo es que una aguda polarización cierra los espacios para debates sosegados y no ayuda ni a las autoridades ni a la prensa a cumplir mejor el papel que a cada uno le corresponde en una democracia vigorosa, deliberativa y abierta. Y agrega algo importante: en estos casos es tarea del Estado, dada sus responsabilidades nacionales e internacionales, contribuir a generar un clima de mayor tolerancia y respeto por las ideas ajenas, incluso cuando las mismas le resulten ofensivas o perturbadoras. Como lo ha reiterado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado debe abstenerse, en todos los casos, de utilizar cualquiera de sus facultades para premiar a los medios cercanos y castigar a quienes disienten o critican sus acciones.

La legislación nacional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos son muy claros, no dejan lugar a dudas. Además, también queda en claro, por lo que acabo de decir, que no estamos hablando de un problema industrial o comercial de fabricación de papel, sino de la libertad de expresión, que es un derecho fundamental sin el cual –sin la libertad de prensa y de expresión– la democracia es “de papel”, vacía, porque no tiene libertad.

Ésta no es la primera vez que en la Argentina un gobierno quiere establecer controles y restricciones a la venta de papel para diarios y a la libertad de imprenta; pero, sin dudas, es el caso más sofisticado y abarcativo. El Estado quiere regular, minuciosamente, desde la forestación hasta la elaboración nacional de pasta de celulosa, desde las metas de producción nacional de papel para diarios, hasta los cupos y permisos de compra de papel nacional e importado para cada diario del país. Nada quedará sin regular ni controlar por el Ministerio de Economía,

auxiliado, como se ha dicho, por una Comisión Federal Asesora de 33 miembros –de dudosa legitimidad o representatividad– y una comisión bicameral de 16 miembros, muy representativa –porque representa al Congreso de la Nación–, pero que tendrá mayoría oficialista. Para todo se necesitará un permiso, una autorización y una cuota.

De aprobarse esta ley, las libertades de imprenta, de prensa y de expresión, así como también el derecho a la información, se administrarán en la Argentina desde el Ministerio de Economía. Entonces, pregunto: ¿se puede ser libre cuando uno necesita un permiso, un cupo y una autorización estatal para ejercer ese derecho?

–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

**Sra. Estenssoro.** – Durante la última dictadura, la Argentina importaba la totalidad del papel para diarios que consumía. Hoy producimos el 70 por ciento. Había una oficina, en la Secretaría de Comercio, que otorgaba los permisos de importación. En esa época, algunos diarios pequeños del interior habían formado una cooperativa –una suerte de *pool*– para comprar en el exterior, a precios preferenciales, por volumen. Periódicamente tenían que ir –como el resto de los diarios y tal como se establece en este proyecto– a esa oficina del Ministerio de Economía a presentar su pedido ante el funcionario a cargo. El funcionario leía la lista –en la que constaban las necesidades de cada diario– y decía “A este sí” o “A este le falta un papelito”, y demoraba la entrega de papel –lo cual, obviamente, perjudicaba al diario–, todo por razones políticas. En ese sentido, me contaron personas que participaban de esas reuniones que una vez, y sin tapujos, ese funcionario dijo: “A éste no; no se preocupen, no necesitará más papel”. Se trataba del editor de un pequeño diario de provincia, y al poco tiempo desapareció.

Los registros, permisos, cuotas y autorizaciones oficiales para la compra de papel para diarios y el funcionamiento de las imprentas –tales como los establecidos por el proyecto oficial en los artículos 1º, 2º, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 40 y 41– son mecanismos tan viejos como perversos. El artículo 32 se incorpora en nuestra Constitución en el

siglo XVIII –en 1860; no en 1853 sino años después– a pedido de la provincia de Buenos Aires porque, obviamente, destruir las pequeñas imprentas, que les permitían a los grupos políticos hacer oír su voz, era una práctica corriente. Durante siglos, gobiernos de todo signo –de derecha, de izquierda, de facto o elegidos por el voto popular; esto hay que decirlo, también gobiernos elegidos por el voto popular– han utilizado este tipo de medidas para perseguir a sus adversarios, acallar las críticas, domesticar a la prensa y, de a poco, imponer un discurso hegemónico, una historia oficial.

El proceso lo conocemos demasiado bien. En el siglo XX se han invocado –como sucede con esta ley– objetivos muy nobles, tales como el interés general, la soberanía nacional, los derechos del pueblo y la igualdad, para cometer los atropellos más increíbles contra la libertad de prensa, de pensamiento y de expresión. Pienso, obviamente, en el nazismo y en el fascismo, pero también en la Unión Soviética, en el macarthismo –en los Estados Unidos–, en la Década Infame –en nuestro país–, en el primer gobierno de Perón –como expresó el senador preopinante– y en el Proceso de Reorganización Nacional. ¿Queremos volver a esas épocas oscuras? Nunca pensé –fui periodista y considero muy importante el renacimiento de la prensa en los años 80 y, sobre todo, en los 90, con la aparición de *Página/12* y de revistas como *Noticias*, que despertaron a una prensa muy domesticada por años de autoritarismo– que llegaríamos a esta situación. En ese sentido, recuerdo que, en el marco del juicio a las juntas militares, durante meses escuchamos los relatos de lo que había sucedido en nuestro país. La prensa había estado amordazada y, por eso, los militares pudieron desarrollar su plan, ya que no había libertad de expresión ni de información.

Es muy grave comenzar a restringir, tal como viene haciendo este gobierno desde hace años, las libertades por medios de censura indirecta, como los denomina la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En el siglo XXI es muy difícil encarcelar a periodistas o exiliarlos, cerrar los diarios y demás, sin que eso genere una cuestión internacional. Entonces se utilizan medios de censura indirecta que, por sutiles, no son menos perversos, tales como la distribución de la publicidad oficial, la asignación de



licencias de radio y televisión y, también, los controles sobre el papel para diarios. Ese es el paquete de medidas que está utilizando, de una manera creciente, este gobierno.

Si el gobierno realmente quisiera garantizar la producción nacional de papel para diarios y el acceso igualitario —a un precio único— de todos los medios, tiene los instrumentos legales necesarios para hacerlo. Pero no quiere. La Argentina cuenta con una moderna Ley de Defensa de la Competencia desde 1999, que también incorporará a la versión taquigráfica, pero los gobiernos no han querido implementarla. Se trata de la ley 25.156, que cumple con los estándares internacionales de defensa de la competencia y cuyo artículo 1° establece: “Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la presente ley, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar un perjuicio para el interés económico general”.

La mencionada norma dispone, en su artículo 17, la constitución de un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia elegido por concurso. Las academias de Economía, de Derecho, los ministerios y el Congreso de la Nación integrarían un jurado para elegir a sus miembros. Finalmente, el concurso se hizo en 2002. Sin embargo, a partir de 2003, el presidente Néstor Kirchner, primero, y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, después, se resisten a integrarlo, porque tiene que ser un tribunal de defensa de la competencia autárquico.

¿Qué sucede actualmente? La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia es una comisión asesora dependiente del secretario de Comercio que no tiene ninguna independencia, solamente responde a las órdenes del secretario de Comercio. En consecuencia, ¿cuál ha sido la actitud del gobierno? Mientras se trate de amigos permitió las fusiones, como sucedió con Cablevisión y Multicanal. Pero con los enemigos comenzaron los avasallamientos.

Hay monopolios buenos y monopolios malos en la Argentina. Cablevisión y Multicanal no eran un monopolio; actualmente sí lo son y, por

ello, constituyen un peligro. Yo creo que son un peligro, pero hay otros monopolios mucho más grandes, como los de las telefónicas. Al respecto, en la Comisión de Libertad de Expresión, hace unos meses analizamos la situación de las telefónicas ya que, por ejemplo, esas empresas conforman un oligopolio, solamente considerando la telefonía celular, de 27 mil millones de pesos. La facturación de los celulares es similar al presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires y hay tres compañías oligopólicas que cobran en los celulares tarifas que son dos y hasta tres veces más altas que en otros países de América y de Europa. Pero no se dice que en ese caso se trate de un monopolio malo y los celulares no son un servicio público, siendo que un altísimo porcentaje de la población los utiliza y donde las tarifas más caras son las prefinanciadas, las prepagas. Pero ese monopolio no importa porque, obviamente, hay un arreglo con Telefónica, con Telecom y con Telefó. Digo esto sabiendo que hay muchísimos medios en los que yo no aparezco y a sabiendas de que esto me puede perjudicar; de cualquier manera, no tengo ningún problema.

Entonces, la lucha de este gobierno contra los monopolios es muy selectiva. Si esta ley funcionara y existiera este tribunal, no tendría que esperar a que ningún ministro o secretario le diga que actúe. Porque ante cualquier denuncia o irregularidad puede actuar y hacer un estudio verdadero del mercado, dictando las recomendaciones que corresponda. Pero esto no se ha hecho.

¿Cuál sería la solución? Porque hay problemas: nosotros tenemos una sola empresa que produce todo el papel y, además, dos de los accionistas de la empresa son los editores de los principales diarios del país. La manera de garantizar el pleno abastecimiento para todos los editores pasa por garantizar la libre importación; o sea, que Papel Prensa tenga que competir, como hace ahora, con todos los fabricantes de papel del mundo. Hay que garantizar la libre importación automática, con arancel cero y sin ningún tipo de barrera paraarancelaria.

Hay una diferencia de precios. En la actualidad el precio de Papel Prensa está a razón de 750 dólares la tonelada, mientras que el precio internacional está en 680. A veces, uno está más caro y el otro más barato, pero en este momen-



to es más barato el extranjero. Si no, pueden comparar por volumen, si tienen que pagar al contado y, además, incluyendo el tema del flete; todo eso hace que haya una diferencia de hasta un 20 por ciento en el precio al que compran los editores más pequeños.

Realmente, ha sido difícil llegar a esta cifra porque la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia no ha hecho ningún estudio sobre los precios en general ni tampoco sobre los diferentes precios a que compran y acceden los distintos editores en la Argentina. Estamos regulando a ciegas.

Creando un fondo fiduciario que permita subsidiar el acceso a precios igualitarios a todos los editores del país y obligando a Papel Prensa a competir con todas las empresas del mundo, estaremos garantizando la transparencia y la competencia.

Con respecto al objetivo del autoabastecimiento nacional, cabe señalar que ése era un objetivo que se definió en los años 70 con la creación de empresas para producir pulpa de papel y papel para diarios y hubo muchísimos programas de promoción. En ese momento era un objetivo muy razonable porque el papel para diarios era un bien escaso y los medios principales eran los diarios, pero hoy existe una sobreabundancia de papel en el mundo y estamos frente a un gran cambio tecnológico: los diarios han perdido en otros países, y también en la Argentina, más del 50 por ciento de su circulación. Entonces, embarcarse en un objetivo de autoabastecimiento es irracional y antieconómico.

A efectos de que tengamos una idea de qué estamos hablando voy a aportar los siguientes datos: la producción nacional es de 175 mil toneladas y se importan otras 50 mil, por lo que el consumo total es de 225 mil toneladas. Entonces, hasta en la hipótesis de que el gobierno pague lo que se importa, estaríamos hablando de 34 millones de dólares; es decir, 50 mil toneladas a razón de 680 dólares la tonelada. No es una cifra tan grande.

Ahora bien, ¿por qué nos vamos a embarcar en este proyecto de autoabastecimiento cuando para muchos editores es más barato y más cerca comprar en Chile? Aclaro que esto no tiene nada que ver con no creer en la soberanía productiva y económica, sino que lo cierto es que hoy el

papel para diarios no es un tema estratégico. Si lo es, como dije ayer, la soberanía energética. No hay proceso de industrialización que se pueda sostener sin soberanía energética. Este año el Estado nacional está gastando 3 mil millones...

**Sr. Presidente.** — La señora senadora Fellner le pide una interrupción.

**Sra. Estenssoro.** — En un rato se la doy.

Este año el Estado nacional está gastando 3 mil millones de dólares para importar energía, que sí es un recurso estratégico no renovable. ¿Por qué vamos a hacer todo un marco regulatorio si el Estado puede hacerse cargo, si es necesario, de 34 millones de dólares? Obviamente, el objetivo es otro: seguir poniendo esta mordaza alrededor de los pocos medios independientes y críticos que quedan en la Argentina; y cuando hablo de independientes me refiero a su independencia económica.

Esto hay que decirlo: muchas veces, los escucho y les digo con respeto —no es ni para hacerlos enojar ni para descalificar— que hay como una especie de victimización de parte de los funcionarios de gobierno, cuando hoy en nuestro país la mayoría de los medios tienen una enorme dependencia económica de la publicidad oficial. Muchos medios no podrían existir sin el financiamiento público: para que veamos cómo es el mapa de los medios, voy a decirles cómo es la situación desde que sancionamos la Ley de Medios. En cuanto a los cuatro canales de aire, la situación es la siguiente: el 9 depende económicamente en su totalidad del gobierno oficial y de la pauta de publicidad oficial. Telefón tiene que ser disciplinado porque le interesa mucho más el negocio de la telefonía y que no establezcamos que es un servicio público, como debería ser y como se propone a través de distintos proyectos que hemos discutido en este Senado, pero que no hemos logrado sancionar, para que la telefonía celular sea un servicio público. El canal 7 es el canal público. Después, C5N y CN3, que son señales de noticias, dependen de la publicidad oficial.

Lo mismo ocurre dentro del universo de los medios paraoficiales, que dependen del financiamiento público. Ahí están *Página/12*, *Electroingeniería*, el grupo de Hadad —yo no aparezco en C5N— con respecto al cual quiero decir que hace una década a mí me molestó mu-

chísimo que Hadad se quedara, por un acuerdo con Menem, con la radio municipal. Pero este gobierno le dio C5N, con la obligación de que esté en la grilla. Y ahora también se han incorporado Moneta y Vila; hasta hace poco este último era el socio de De Narváez pero ahora sale a defender la política del gobierno.

Esto ya lo hemos visto en otras épocas: cuando se empieza a poner este corsé económico y regulatorio, a lo que se le suman los aprietes —que si bien no son formales ocurren en la Argentina—, la prensa se empieza a domesticar. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que pasó en estos días: efectivos de la Gendarmería entrando a las oficinas de Cablevisión o estas acciones de la AFIP contra el diario *La Nación*, que es uno de los pocos medios que tienen autonomía económica en nuestro país. También está la editorial Perfil, que ha quedado como si fuera golpista y, en realidad, fue la que tuvo más juicios en su contra durante el gobierno de Menem por investigar la corrupción. Uno de sus fotógrafos, José Luis Cabezas, fue asesinado porque *Noticias* fue uno de los pocos medios —y yo trabajaba ahí— que investigaban a la mafia de Yabrán, un aliado estratégico del gobierno menemista y del peronismo que gobernaba la Argentina en ese momento.

Es muy grave lo que estamos haciendo. Hoy, algunos pensarán que esto es para nuestros adversarios en esta democracia y en esta economía de amigos y de enemigos. Pero un día vienen por ellos y otro día vendrán por nosotros.

El año pasado le dimos una medalla de oro a Bob Cox, un periodista inglés radicado durante años en la Argentina que fue el editor del *Buenos Aires Herald* y que fue una de las pocas voces que publicaban los hábeas corpus y que escribían sobre las Madres de Plaza de Mayo cuando casi ningún diario lo hacía. Creo que él y también el diario de Río Negro difundían esa información a pesar de la censura y de los distintos aprietes de papel y de todo tipo. Y Bob Cox, en este homenaje que le hicimos el señor senador Torres —del oficialismo— y yo, dijo que incluso él defendía la posibilidad de la información y del derecho de quienes no pensaban como él. Porque ni siquiera estaba de acuerdo con los grupos armados, ni con la guerrilla. Pero él estaba defendiendo las libertades, la ley, la democracia, los derechos humanos. Y éstos

son valores que tienen que estar por encima de nuestra ideología. No hay derechos humanos para los que piensan como yo, y leyes hechas a medida para perseguir a los que piensan distinto. Sin embargo, creo que esto se inscribe en una tradición latinoamericana, para lo cual quiero recordar lo que dijo un dictador latinoamericano: “Para los amigos, todo; para los enemigos, la ley”.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador López.

**Sr. López.** — Señor presidente: se ha hablado bastante en detalle sobre el proyecto en consideración a partir de la intervención de la miembro informante. Yo simplemente quiero realizar una mirada con relación al artículo 32 de la Constitución Nacional, que se ha mencionado también aquí, respecto a la situación de que la Nación Argentina no dictará leyes sobre la libertad de prensa.

Creo que no hay una sola forma de cumplir o de violar este artículo, porque no hay una sola forma de dictar leyes. A veces, no dictar leyes en sentido formal significa imponer leyes en sentido material. Creo que, en este sentido, hay una ley material o un derecho cultivado al compás de prácticas históricas o de situaciones de hecho que no son acordes, realmente, con la garantía de la libertad de expresión. Y me parece que la necesidad de dictar una ley en sentido formal para poner cotos a esos obstáculos es el imperativo al cual estamos tratando de ceñirnos hoy.

No me preocupa que algunas personas físicas o jurídicas sean accionistas de algunas empresas o que integren grupos empresarios y, quizá, que algunas sociedades tengan algún trato preferente para con algunos de sus socios en negocios vinculados al objeto propio de la empresa. Quizá todo eso, en algún esquema de relaciones comerciales, puede ser normal.

Tampoco me preocupan algunos argumentos vinculados con supuestas disputas coyunturales, momentáneas e inclusive cambiantes a través de los años.

Lo que me parece es que hay un punto donde el tráfico o el comercio toca derechos. Y considero que, cuando se trata de disputar la participación en el concepto o el significado de este esquema, nos enfrentamos a la disputa que se produce entre el derecho y la mercancía.

O sea, cuando se produce la mercantilización del derecho, el Estado es el único que puede intervenir, sostener, profundizar o desactivar la situación. Y me parece que esto no ocurre solamente con la libertad de expresión, sino con muchos derechos fundamentales.

Es decir, hay un comercio vinculado a la educación privada; otro vinculado a la salud privada; otro vinculado a la vivienda. Y en el esquema institucional y constitucional de nuestro país, eso no está prohibido ni está mal; forma parte de nuestra historia y de nuestro programa constitucional.

Sin embargo, esto no quiere decir que el tráfico, el comercio o el mercado sobre estos derechos se encuentren exentos de la regulación por parte del Estado. Algunos dicen que, en realidad, no es que no haya regulación cuando hablamos de un Estado neoliberal, chico o flacuchento, como el que tanto se publicitó o trató de instaurar hace algunos pocos años atrás. En realidad, lo que hay es una regulación por parte de otros actores que no son el Estado, y en base a otras finalidades, objetivos y principios.

Entonces, dejar el mercado sobre derechos fundamentales librado absolutamente a las leyes del mercado y a las regulaciones impuestas por los sectores empresariales es lo que profundiza la mercantilización del derecho. De ese modo, las personas podremos acceder —o no— al derecho según las posibilidades de cada uno, que sabemos que no son idénticas, pero no podremos acceder en base a una garantía mínima, que corresponde al Estado brindar.

Sin embargo, desde la definición misma de derechos fundamentales sabemos y decimos que éstos son aquellos a los cuales todo ser humano debe poder acceder por el solo hecho de existir. En consecuencia, me parece auspicioso que se pueda avanzar en la sanción de este proyecto de ley. Creo que es un proyecto vinculado a otras iniciativas legislativas que hemos venido tratando y abordando en estos últimos tiempos, con relación a la posibilidad de poder pensar en la preeminencia del interés público por sobre los intereses sectoriales y, fundamentalmente, sobre los intereses meramente lucrativos o empresariales.

Ahora bien, si declarar de interés público la producción y la distribución de papel podrá significar un antecedente que en el futuro des-

emboque en un expediente de expropiación, no lo sé. No creo que sea el momento de hacer futurología. Pero si esta posibilidad en el futuro se llegara a dar, la discutiremos, la evaluaremos y tomaremos la decisión que corresponda. En todo caso, si se llegase a dar, estará refiriéndose a la expropiación de una empresa o de un determinado bien material. No se puede confundir eso con la expropiación de la libertad de expresión.

Por otra parte, algunos han lanzado la acusación de que, so pretexto de contrarrestar o combatir algún monopolio, de lo que se trata aquí es de instaurar o de fortalecer otro monopolio.

Me parece que es un argumento que apunta a confundir a las partes intervinientes en estos debates y sobre todo a la sociedad, que tiene que tomar partido con relación a este tema. Porque en realidad, cuando el monopolio en el tráfico de derechos fundamentales lo tienen los actores privados de la economía, el pueblo, que es el interesado en estos derechos, no puede incidir. Y en tal sentido, tendríamos que preguntarnos si la información es un bien social o no, porque de lo contrario diferente será el eje en torno al cual vamos a discurrir. Pero lo cierto es que los que no formamos parte de empresas o sociedades no tenemos cómo incidir en la política empresarial, ni en la toma de decisiones de dichas compañías, ni podemos disputar la conducción de esas empresas para poder llevar adelante, eventualmente, otra política empresarial.

Sin embargo, esto no ocurre cuando participa el Estado en la distribución de esos derechos. Es decir, podemos tener diferencias con la forma en que, en un determinado momento o por parte de un determinado gobernante, se conduce el Estado con relación a tal o cual derecho. Pero todos tenemos, a partir de que todos formamos parte del Estado —cosa que no pasa con las sociedades anónimas—, la posibilidad de disputar la conducción del Estado para conducirlo de manera distinta. Esta permeabilidad del Estado, del cual todos formamos parte, no la tienen las empresas, las cuales no tienen la responsabilidad de afianzar la justicia, ni de promover el bienestar general, tal como señala el Preámbulo de nuestra Constitución. Las empresas tienen, simplemente, un compromiso con su rentabilidad...

**Sr. Presidente.** — Disculpe, señor senador: le pido que vaya redondeado su discurso, por favor...

**Sr. López.** – Sí, cómo no, señor presidente.

En ese contexto interpretamos este proyecto. Y no sólo lo vamos a votar desde nuestro bloque afirmativamente, sino que lo vamos a hacer contentos. La verdad, no siempre tenemos todos los sectores la posibilidad de estar contentos. Pero a veces, da la casualidad de que todos, aun en la diversidad, podemos estarlo. Otras veces, a algunos nos toca resistir o padecer.

Sin embargo, si hoy este proyecto de ley resultara sancionado –sumando nuestros votos y los de otros bloques que están de acuerdo, además del oficialista– creo convencido y con entusiasmo que habremos dado un paso fundamental en el fortalecimiento de nuestra democracia.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Juez.

**Sr. Juez.** – Señor presidente: estaba intentando ser original, para no repetirme o reiterarme y, aun así, quizá no lo sea.

Voy a aprovechar este momento, aunque se fue la senadora Higonet, para agradecerle la agenda maravillosa que me regaló. La tenía acá, en el escritorio, y veo el Martín Fierro. Y escuche lo que le voy a leer; no es La Marcha de Rolando, pero escuche, que es interesante...

**Sr. Presidente.** – La Mancha de Rolando, senador.

**Sr. Juez.** – La Mancha; no, yo tengo menos rock que Charles Ingalls. (*Risas.*)

“Procuren de no perder ni el tiempo ni la vergüenza, como todo el hombre que piensa, procedan siempre con juicio y sepan que ningún vicio acaba donde comienza.”

Tiene que ver con este vicio de la intolerancia. Yo me entusiasmé muchísimo, el otro día, cuando la presidenta hablaba de la sintonía fina. Me encantó y dije: “Eso, me interesa”. Me interesa ver cómo arrimamos posiciones, cómo nos achicamos, cómo los que tenemos una posición distinta podemos coincidir en los títulos generales porque creemos que hay temas que merecen escucharse, escuchar la otra campana, que eso enriquece. ¿Qué tiene que ver esto con la sintonía fina?

Ya le va a tocar, presidente. Va a ver, en los próximos cuatro años, cómo nos empezamos a impugnar y nos tiramos la década del 90 encima, y el tema del helicóptero. Y vivimos

impugnándonos. Estamos todos conformes. Hace dos años, entraba acá y éramos Gardel porque la oposición se había consolidado, la construcción mediática nos obligaba y los senadores supuestamente opositores teníamos que estar todos juntos, todos teníamos que actuar de la misma forma, votar de la misma forma, todo disciplinadamente. Y nosotros decíamos: “No, queremos diferenciarnos”. Imposible. Ahora, sucede al revés. Ahora, le toca al gobierno una mayoría maravillosa, con el 54 por ciento; ojalá uno, alguna vez, pueda tener esa mayoría en la política. Estamos del otro lado.

Intolerancia, dije yo. Y lo digo con respeto. Voy a contarle que, en mi breve historia política, me tocó estar cinco años en el directorio de Papel Prensa, representando al Estado. A mí nadie me dijo, nunca, que ésa era una empresa apropiada. Cuando me enteré, acá, en el Senado, lo primero que hice fue presentar un proyecto para que una comisión bicameral se encargara de investigar un tema delicadísimo. Por ese directorio, creo que pasó el actual embajador del Uruguay, un tipo bárbaro, Dante Dovená, que tampoco se había enterado. Todos nos enteramos después de que el gobierno instaló este relato. Nadie, ni de un lado ni del otro, ni oficialistas, ni opositores, tomó el tema porque, la verdad, mejor que investiguemos por otro lado, que no nos involucremos, porque todos tenemos algo que decir.

Yo me pregunto si, con un 54 por ciento, este gobierno necesita que *Clarín* hable bien de él. Con un 54 por ciento, ¿a quién le importa la tapa de *La Nación*? No se puede gobernar pensando en lo que dicen los comunicadores. No es más importante lo que dicen los comunicadores que lo que necesita la gente, presidente. Éste es un concepto básico.

Todos venimos de provincias donde pareciera que el gobernante llega, consolida su poder y lo primero que hace, en forma directamente proporcional, es pensar que cuánto más poder tiene, más intolerante se vuelve. Lo sufro en carne propia, en mi provincia. No estuve cuando hizo su exposición la miembro informante; en mi provincia, el Grupo Clarín tiene un diario que es casi monopólico, es un diario que maneja el gobernador. Y lo sufro permanentemente. Nosotros hemos armado una estructura política como una coyuntura o



cuña hacia el bipartidismo, intentando plantar banderas. Y no necesitamos que los comunicadores digan que somos buenos, etcétera. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. No nos interesa. No disputamos, no peleamos. Es más, muchas veces nos enriquecen con la crítica porque, por ahí, nos enceguecemos, como le pasa a todo tipo que gobierna. Muchas veces quien gobierna se enamora de sus ideas y, quizá, las ideas son buenas pero, por ahí, desde otro lado, te señalan los desaciertos. Y no por eso uno tiene que, con esa cuota de intolerancia que da el poder, querer llevarse puesto todo el tema.

Seguramente, desde el Frente Amplio, la senadora Morandini, por la veteranía que tiene en la comunicación, y el senador Giustiniani van a fijar con mayor precisión la postura. Saben que nosotros los vamos a acompañar.

Sepa que nosotros estamos en contra de todos los monopolios, presidente. Ojalá nos sumen, algún día, con esta idea de la sintonía fina, para discutir cómo enfrentamos a los monopolios, en serio. Pero no nos vamos a sumar nunca a las disputas.

El otro día se cumplió el primer aniversario del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner. Yo terminé medio peleado con él, en el final, pero debo reconocer que me distinguió con un trato maravilloso. Y le decía a Morandini que iba a pedir la palabra porque quería decir que este tipo me había distinguido con afecto, con cariño, me recibió como intendente de Córdoba, me brindó su amistad. Después, terminamos peleándonos, porque la política es así. Y la vida no me dio tiempo para reconciliarme y charlar con él. Quise rendirle un homenaje, pero dije: “No. Me van a matar. Van a decir que éste se pasó a la vereda de la oposición”.

La verdad es que yo no quiero ser senador para perder mi libertad. Lo mejor que tengo yo es mi libertad. Entonces, si para ser senador tengo que perder mi libertad, la posibilidad de decir lo que pienso, lo que opino, con libertad absoluta, sin tener que rendirle culto a ningún monopolio, ni a éste, ni a aquél, ni a ningún funcionario, habré permitido que mis ideas sucumban, y son las que me hacen libre.

Pregunto por qué los que queremos combatir a los monopolios tenemos que estar con las leyes del gobierno. ¿Por qué, si decimos que no vamos a acompañar esta ley, somos representantes de

los grupos concentrados de la comunicación? Nosotros estamos en otra posición. Queremos decir que no hace falta, presidente. La historia lo acredita. Lo han dicho acá varios veteranos. Hay varios ex presidentes en este recinto; hay veteranos de viejas guerras; lo han planteado, les ha tocado vivirlo. No tiene sentido esta pelea, porque no se puede explicar. Hoy, probablemente, porque uno se entusiasma ideológicamente y pareciera que ésta es una confrontación. Pero, ante la duda de que en el futuro nuestros hijos nos puedan reclamar que hemos sido parte en el cercenamiento de derechos y garantías individuales, de la libertad expresión, no hay forma de que podamos acompañarlo. No nos interesan las mordazas. No importa lo que nos digan, no importa que nos critiquen; no nos interesa. Jamás nos va a ver a nosotros ponerle la mano en la boca a quien nos critica; a lo sumo, intentaremos mejorar nuestras propuestas.

Para terminar, quiero decirle, presidente, que estamos esperando deseosos que llegue el momento de la sintonía fina. Los que no somos obstruccionistas, pero sí opositores, estamos esperando ansiosos el momento de discutir estos temas con seriedad y con serenidad, pensando en los próximos veinte años, no en los próximos veinte meses.

Esto, probablemente, nos permita una victoria a lo Pirro. Lo vamos a lamentar el día de mañana. Lo vamos a lamentar. Y esta mayoría con la que se regodean hoy, y con la que nosotros nos regodeábamos hace un par de meses, porque la habíamos obtenido en junio de 2009, es efímera. Siempre el poder es efímero. Entonces, no por el hecho de tener el poder en un momento circunstancial podemos arrebatar, atropellar y llevarnos por delante la Constitución.

Con ese sentido —y perdóneme que me haya excedido—, no tenemos ninguna posibilidad de acompañar una pelea entre grupos que antes eran amigos y, hoy, se han enemistado.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra la senadora Díaz.

**Sra. Díaz.** — Señor presidente: simplemente quiero reforzar la postura expresada por mi compañero y pedir autorización para insertar mi discurso.

De todos modos, quiero manifestar nuestro apoyo a este proyecto enviado por el Ejecutivo,

que declara de interés público la producción, distribución y comercialización de pasta celulosa y papel para diario.

Queremos reafirmar, una vez más, que somos partidarios de un Estado presente, un Estado fuerte, un Estado que regule la actividad productiva y privada, y que garantice derechos democráticos. No somos partidarios de un Estado bobo, ausente o impune, como hemos vivido en otras épocas, cuando, a través de la tortura, la represión, la violación, la desaparición y la muerte, se llevaron adelante fuertes negociados de los que participaron grandes corporaciones económicas, que se transformaron en cómplices de ese Estado de terror y que se convirtieron en formadores y transmisores, durante muchos años, de un discurso único.

Así que, dicho esto, celebramos que estemos discutiendo este tema y lo vamos a acompañar.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el senador Vera.

**Sr. Vera.** – Lo mío es muy breve. La verdad es que, después de anotarme, nos anoticiamos del deseo de que seamos menos oradores. De todos modos, voy a expresar algo muy sencillo; tal como decimos los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas.

La miembro informante del partido del gobierno, cuando hizo la exposición fundamental sobre la propuesta del Ejecutivo, dijo que la señora presidenta había tomado en cuenta lo que ya se venía anunciando en algunos periódicos –entre ellos, *La Nación*– acerca de que quien manejaba el papel manejaba la información.

Si esto es así como creo, es decir, que influye en gran medida –no es lo mismo manejar el papel que manejar la producción–, se pueden hacer otras cosas para que el papel esté disponible en el mercado para todos los medios.

Si el gobierno piensa esto, es muy sencillo concluir que no queremos que el gobierno maneje el papel. Y si la señora presidenta sabe que es así, si esta ley implica que el gobierno va a poder manejar el papel para diarios, no hay duda, entonces, de que ella sabe también que va a manejar la información. Y aspiramos a que ni este gobierno ni ningún otro pueda manejar la información. No me voy a explayar más sobre los efectos que tendría para la sociedad

argentina el hecho de que únicamente quedara la voz oficial.

Tal como se ha dicho acá, esos medios de los que se habla tanto han sido amigos de este gobierno y de otros. Ésta es un poco la historia de ciertos medios de comunicación importantes. Si esto es así, la verdad es que no hay mucho que debatir.

Hemos leído el proyecto del primer artículo al último y sabemos que, en definitiva, otorga instrumentos al gobierno –a éste o al que venga– para presionar, para influir en cuanto a la posibilidad de que un medio o un diario pueda estar en la calle o no. Y en cuanto a las prácticas de este gobierno, basta con mirar de qué modo distribuye la pauta publicitaria y de qué modo se enoja cuando algún medio de comunicación escrito, televisivo o radial disiente, para imaginar que podrá seguir reaccionando mal contra los medios de comunicación.

Reitero: el gobierno es consciente de las potestades que le va a dar esta norma. No me refiero a lo positivo que pudiera haber. Como siempre, una ley que pueda favorecer en demasía y de manera impropia a un gobierno tiene alguna expresión que justifica su impulso. Se podrá decir por parte del gobierno que es para que haya papel a precios igualitarios y suficientes, pero la verdad es que, si ése es el objetivo, no puede de ninguna manera sostener que para lograrlo necesita un instrumento como este proyecto, que va a dar lugar a éste o a otros gobiernos a influir en demasía sobre lo que se pueda opinar o no.

Dios libre a los argentinos si sigue esta constante que hace que cada vez sea más difícil disentir con las políticas del gobierno. Así se consolidará un modelo de dependencia absoluta, casi monárquico, pues si no hay posibilidad de disentir –ya lo estamos sufriendo–, ¿qué podrá pasar si se hace mal uso de esta norma?

Por lo tanto, a confesión de parte relevo de prueba. No hay mucho que explicar ni mucha academia que lucir acá para darse cuenta de que esta iniciativa es innecesaria y que nos somete a un riesgo mayor de silencio de todas las opiniones disidentes.

Sin duda, se infiere de nuestras expresiones que no estamos de acuerdo con el proyecto de ley y que nos parece innecesario y solamente

un instrumento para dominar mucho más a la sociedad.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.

**Sr. Cabanchik.** – Veinte tipos corriendo alrededor de una pelota en medio de unas manifestaciones de gritos y violencia incomprensible...

**Sr. Fernández.** – Fútbol...

**Sr. Cabanchik.** – Esto es el fútbol según Borges. Es fútbol para todos también, senador. *(Risas.)*

**Sr. Fernández.** – Se olvidó de los arqueros.

**Sr. Cabanchik.** – Dije veinte; eliminé los arqueros. Borges no sabía ni eso, porque dijo veintidós. Pero lo adapté para mejorarlo.

Ésta es la forma en que Borges describía un partido de fútbol. De alguna manera, podríamos decir que era una descripción objetiva, que intentaba, sacando algunos recursos retóricos, ser literal. Incluso, uno podría hacerla más literal todavía, pero voy a ahorrarnos ese ejercicio ahora, ya que cada uno puede imaginarlo fácilmente.

El fútbol habría desaparecido. En una descripción objetiva de los hechos de un partido de fútbol habría de todo menos fútbol. Es decir que esa mirada ingenua absolutamente, por decirlo así, por la cual cualquier descripción de un hecho –o una al menos– puede ser transparente para que ese hecho hable por sí mismo, es imposible. Porque aun cuando queramos ser literales, estrictamente fieles a los hechos, podríamos correr el riesgo, incluso, de perder la información.

¿Qué es más informativo para alguien que lee un suplemento deportivo? ¿Uno como el de *Clarín* o uno como el que pensaba Borges? Evidentemente, quienes gustamos del fútbol podemos leer con satisfacción quizás el que todavía hoy es el mejor suplemento deportivo: el de *Clarín*.

Parece que el fútbol, que desata tantas pasiones y, a veces, muchos comportamientos muy negativos de violencia y de ceguera, es al menos pacificado por la prensa. Porque si hay algo poco controvertible son los suplementos deportivos. Es una pena que la vida no se limite al fútbol, en ese caso, si fuéramos a juzgar la pacificación que la prensa logra en ello. O en todo caso, los compromisos implicados en un suplemento deportivo deben estar tan armonizados entre sí que no surge el escándalo.

Podemos estar a favor o en contra del puntaje de un jugador o de otro, o de cómo se comentó un arbitraje. Sabemos que hay intereses creados, que los empresarios inflan jugadores para venderlos más caros y que todo eso tiene una red de complicidades también con los periodistas. Todo eso funciona como parte de la realidad de cualquier suplemento deportivo. Sin embargo, no hay una controversia muy grande.

Ahora bien, cuando pasamos del suplemento deportivo a otros, ya empiezan los problemas. Por ejemplo, el de espectáculos y el de cultura –ése es el menos objetivo de todos–. Y llegamos a las informaciones políticas. Pensar que las descripciones de los hechos políticos puedan ser transparentes, como no logra ser incluso la de Borges con el fútbol, es también una ilusión.

Con esta introducción un tanto dispersa y juguetona que estoy haciendo, quiero señalar que no estamos discutiendo –desde luego– la cuestión de la información. Me parece que eso es importante tenerlo en cuenta.

No es que me esté queriendo arrogar un derecho, pero me parece objetivo decir que trabajé mucho al menos por la ley de acceso a la información pública en este Senado. Por supuesto que en esto colaboró toda la Cámara y logramos una sanción en general unificada. Hubo unanimidad en general y, en particular, nos dividimos, pero la sanción fue aprobada con bastante diferencia a favor.

Lamentablemente, el proyecto todavía está en la Cámara de Diputados. Espero que no pierda estado parlamentario, porque soy un convencido de que necesitamos una ley de libre acceso a la información pública para el Estado nacional que perfeccione el decreto que había emitido el ex presidente Kirchner en esa dirección, pero sólo para el Poder Ejecutivo.

En un Congreso que incluía un número bastante apropiado para convertir en ley el proyecto de libre acceso a la información pública, se perdió la oportunidad. A pesar de que muchos de los sectores incluidos en el paraguas de la llamada oposición estaban teóricamente interesados en que eso se convirtiera en ley, no fue así porque la Cámara de Diputados no dio la otra sanción necesaria. Así que ni hablar de que tengo compromiso total con el libre acceso a la información pública y, por supuesto, con la libertad de expresión, que la creo conectada.

Pero mi primer punto es, entonces, no confundir la información con la expresión. La libertad de expresión debe ser respetada a rajatabla, porque es una libertad relacionada con la vida. Cualquier lesión a la libertad de expresión es una lesión a la vida, individual y colectiva. También en ese sentido tengo un compromiso absoluto.

Ahora bien, cuando hablamos de libertad de expresión, no nos referimos a la verdad en la información. Y yo creo que ésta es una de las premisas que está condicionando este debate.

Lamentablemente, estas discusiones se hacen en poco tiempo y en forma masiva. En este sentido, en el Congreso, estamos acostumbrados a estos impulsos por los cuales el Poder Ejecutivo nacional nos envía una gran cantidad de leyes y nos fuerza a emitir dictámenes en poco tiempo, sin poder corregir ni una coma como Cámara revisora. Es decir que hay muchos vicios en todo este procedimiento y ésta no es una excepción.

Entonces, digo que fácilmente se arman dos equipos: el pro y el contra. Porque los matices requieren tiempo. En efecto, los matices, para poder abrirse camino, requieren tiempo, requieren maduración, requieren diálogo. Y en este contexto, es muy difícil; por eso es que estamos en el contexto del pro y el contra y se arman los dos equipos: Independiente y cualquiera que esté delante, por ejemplo, Racing –River y Boca no voy a decir–; un equipo a favor y otro en contra.

Ahora bien, los dos equipos están presuponiendo algo que hemos perdido hace mucho: ingenuidad. Yo descubrí qué era leer un diario con *Clarín*, porque mi viejo compraba ese diario en casa; por lo tanto, ése era el periódico que yo tenía. Y es una experiencia que queda; es una costumbre. Aunque después se agregan otras más: la necesidad que tenemos los senadores de estar un poco mejor informados hace que tengamos que leer muchos diarios y muchas fuentes.

El niño o el joven aquel, obviamente, perdió su mirada ingenua según la cual lo que estaba publicado en el diario era verdad. Ahora, en algún sentido, eso nos queda; la letra de molde se impone como si fuera el vehículo de la verdad. No es vista por el lector o no es recibida por él como una construcción parcial de una perspectiva sobre los hechos. Ella pretende ser la transparencia de una verdad de los hechos mismos; o

no lo pretende, pero ése es el efecto que genera en el lector. “Lo leí en el diario”; eso puede ser, muchas veces, dicho como fundamento de la convicción con la que uno sostiene algo. Éste es un lado del asunto. Pero esa ingenuidad no la podemos pretender.

No le puedo adjudicar esa ingenuidad ni a *Clarín*, ni a ningún defensor de la causa *Clarín* –por decirlo de alguna manera–, ni al gobierno. Ninguno de los dos es ingenuo en esta batalla. Ésta es una batalla sin esa ingenua mirada de niño. Ninguno de los dos, ni el pro ni el contra de este proyecto de ley, y en esta batalla, puede pretender que le creamos. Más allá de sus intenciones, que pueden ser las mejores, éste es un hecho estructural. En efecto, el hecho estructural es que el mundo no habla por sí, sino que nosotros hablamos del mundo. Nosotros nos hacemos figuras de los hechos, representaciones de los hechos; los hechos no hablan por sí mismos; y esto es así en un diario, en un libro, en una sesión del Senado.

Tampoco yo pretendo que lo que estoy diciendo sea la verdad de los hechos. Además, ¿cuáles serían esos hechos? Los hechos políticos. Tampoco puede haber la verdad de los hechos políticos. Y eso es la democracia. Porque, ¿qué es la democracia si no la asunción de que ninguna de las partes de la totalidad, que no puede ser representada igualmente, tiene, en todo caso, una perspectiva enriquecedora sobre los hechos, pero nunca esa parte puede ser la totalidad sobre la que tiene esa perspectiva? Por eso la democracia es el mejor sistema de gobierno. Porque asume que esa ingenuidad está perdida, que los hechos no hablan por sí y nadie puede hablar con una palabra absoluta sobre los hechos.

Entonces, no están de un lado la defensa de la expresión verdadera de los hechos y, del otro, un gobierno. Ésa sería la presunción pro *Clarín*. La segunda presunción sería: del lado de los otros, un gobierno que intenta apropiarse del recurso para poder, ahora sí, finalmente, imponerles a todos los argentinos su relato. Por lo tanto, en esa partición, debido a que la premisa es común a ambos bandos –unos son los malos y otros los buenos, pudiendo invertir esto perfectamente–, el gobierno estaría para defender el acceso igualitario al recurso, para que todos hablemos y escribamos con libertad lo que se



nos antoja sin que eso comprometa, amenace o condicione de ninguna manera el ejercicio del poder constitucional que representan los tres poderes del Estado; en cambio, los otros estarían para mentir: *Clarín* miente, *Clarín* miente, *Clarín* miente.

Para poder realmente trascender la discusión, abandonemos la premisa. No están de un lado —cualquiera sea éste— los defensores del bien y, del otro, los defensores del mal. Basta con recorrer las distintas jurisdicciones de nuestro país para encontrar que hay una proximidad muy importante entre la prensa y los poderes de los gobernadores. Ojo, puede haber aquí colegas que tengan alguna experiencia al respecto por ser propietarios de diarios y haber sido gobernadores, o por tener algún tipo de proximidad entre el periódico dominante en su provincia y el poder político de la misma.

¿Es una casualidad? Yo creo que no. Entiendo que una de las cosas que busca quien tiene el poder a su cargo es no tener incomodidades que puedan perturbar el ejercicio de ese poder en la dirección, convicción u orientación que le haya dado. Así que todos queremos una prensa amiga. Todos queremos que hablen bien de nosotros mismos. Todos, incluso, queremos aparecer en la prensa; pero aparecer bien, no de cualquier manera; aunque algunos, también, de cualquier manera, ¿por qué no?; también hay de éstos.

En este sentido, qué se hace en un *country*. Se edita la revista y, para que todos los “countrytas” se sientan bien, se pone una fotito de cada uno por vez, ya sea en la fiesta de cumpleaños o donde sea. Verse en la prensa escrita, ver sus fotos, ver su nombre, es un efecto narcisista que, entre otras cosas —dicho sea de paso—, le hace mal a la política. Pero aparte de eso, tenemos el hecho de la letra de molde, la magia de la letra de molde, de la foto. Entonces, tenemos que desmitificar; tenemos que romper con las mitologías que están detrás de este debate.

Yo no veo en esta iniciativa que estamos discutiendo un instrumento que, bien usado, vaya a llevar a la restricción del uso de la imprenta para la libertad de expresión de nadie. Esto no surge del texto; surgiría del mal uso de la ley. Ahora bien, si yo me pongo a considerar el posible mal uso que se podría hacer de la norma, evidentemente, lo voy a encontrar. Esta ley se

puede usar mal. Tal vez, toda ley se puede usar mal; algunas más difícilmente y otras de manera más fácil. Ayer discutíamos algo parecido y los pétreos argumentos del senador Fuentes hicieron un gran esfuerzo por convencernos de que no puede o no va a haber un mal uso del artículo 3º de la norma que votamos al final del día.

Entonces, esta norma se puede usar mal. Pero también se puede usar bien; y eso va a depender de muchas instancias, entre otras cosas, de la Comisión Bicameral que vamos a conformar aquí, en el Congreso Nacional. Allí, los representantes del pueblo van a poder monitorear todo este proceso; además, va a haber una comisión asesora integrada por muchos actores relevantes. De todos modos, me parece que, igualmente, hay cosas que de por sí la iniciativa puede llegar a remediar; y en ese sentido, bien usada, la norma puede tener una buena consecuencia.

Así, se puede remediar una situación que es extraña. En efecto, es extraño que el 49 por ciento de la empresa proveedora de papel, que es el insumo básico de todos los diarios de la Argentina, sea, a su vez, el principal diario de la Argentina. Es decir, el estar de los dos lados del mostrador —dicho esto por muchos que en su momento padecieron esa situación— trajo perjuicio en la Argentina. Felizmente, parece que hoy no lo trae; y eso también hay que decirlo.

De 2009 a 2011 he estado estudiando la evolución de la compra de papel nacional e importado y la variación de los precios. Por ejemplo, en 2009, *Clarín* importó, de acuerdo con lo que tengo aquí, 118 toneladas de papel; y en 2011, 18.073 toneladas. Con esto, *Clarín* está resguardándose por temores que tal vez son legítimos, pues es legítimo que una empresa defienda sus intereses y su posición. Ahora bien, esta posición es dominante en el mercado; y está muy bien. Pero, entonces, si hablamos del artículo 32, tendríamos que referirnos también al artículo 42, que previene de los usos monopólicos para todos los bienes; inclusive, el papel.

Por lo tanto, si bien es adecuado y esperable que una empresa defienda sus intereses, también es cierto que si tiene una posición dominante, más allá de los intereses que defienda —y que es lógico que lo haga—, éstos deban estar tutelados, monitoreados, intervenidos y ser reflexionados por toda la comunidad y el gobierno nacional.

Para decirlo puntualmente y cerrar este capítulo –porque tengo un par de cosas más para desarrollar–, me parece que la discusión se ha desviado de entrada. Hablamos como si, una vez sancionada esta norma, en la Argentina se fuera a perder la libertad de expresión.

Normativamente hablando, se ha abusado del término “inconstitucional”. Lo escuchaba al Momo Venegas, quien manifestó que es inconstitucional lo que se votó ayer, debido a alguna interpretación bastante indirecta del articulado de la ley y de la Constitución. Pero no se pueden hacer esas aseveraciones. Para probar la inconstitucionalidad de un artículo, hay que mostrar el corpus normativo en relación al cual, objetivamente, lo que se vota es inconstitucional; es decir, una contradicción, una inconsistencia que se encuentre en el texto o en sus consecuencias deductivas.

El artículo 32 prohíbe la restricción del acceso a la libertad de imprenta. *Restringere* es un verbo latino que no genera ningún esfuerzo para ser traducido y quiere decir: restringir, reducir. Pero el artículo 7º de esta iniciativa dice: “Propender a la producción nacional, la competencia, la no discriminación, el libre acceso, la asignación eficiente de recursos...”.

Ahora bien, yo tengo que discutir la iniciativa tal cual está escrita y, también, debo considerar las consecuencias presumibles de la norma aplicada con corrección. Es decir, no puedo presumir intenciones malas ni buenas. No tengo por qué hacerlo como legislador, sino que tengo que ver el texto y sus consecuencias directas, no presuntas. Entonces, en eso no veo ninguna inconstitucionalidad relativa al artículo 32. Acá no se restringe la libertad de imprenta.

Por otro lado, otro tema un poco más delicado –ya mencionado por los senadores preopinantes– tiene que ver con el artículo 13 de la Corte Interamericana. Éste es un asunto más delicado, porque declara que hay amenaza para la libertad de expresión cuando se realizan controles abusivos directos o indirectos sobre la misma. Entonces, es debatible e interpretable si en esta iniciativa tenemos controles abusivos.

No obstante, no voy a poner las manos en el fuego por que eso no pase, ya que en este momento todavía tenemos más de un millón de libros retenidos en la Aduana –y tengo mu-

chos amigos libreros, autores y compradores que se resienten de esta situación–, porque el secretario de Comercio ha dispuesto que, en las condiciones en las que se los ha importado, ellos no ingresarán.

Así que este tema me preocupa.

Pero también veo que en la actualidad se importa papel a arancel cero y no tengo por qué presumir que eso cambiará. De todos modos, existen controles trimestrales propuestos en la norma sobre la importación –además de un monitoreo constante de todo el proceso, desde la madera en adelante–, y aunque a ello lo veo un poco exagerado e, incluso, no sé hasta qué punto es tan urgente el debate –no alcanza mi deducción de la situación política actual para entenderlo–, no quiero presumir segundas intenciones. Simplemente, me limito a decir que este proyecto no es inconstitucional y, eventualmente, no implica por sí ninguna restricción a la importación.

Hoy en día, eso funciona plenamente y hay arancel cero para el papel importado desde Chile, ya que este país es una de las principales fuentes de la importación de papel para los diarios; y el arancel es cero porque Chile es un asociado del Mercosur. Entonces, ¿cómo habría de cambiar eso? ¿Cómo el gobierno nacional habría de decir: “Vos no importás y vos sí”? No imagino esa arbitrariedad. Pero, además, no me la imagino como consecuencia de esta norma.

Y si bien puedo imaginar y concebir que se produzcan arbitrariedades –puede ser que hayan ocurrido en estos años y que sigan sucediendo–, no veo que ello obedezca a alguna ley.

No sé qué norma se está utilizando para no dejar entrar la importación de los libros a los que antes me referí. Creo que no hay ninguna norma específica que lo esté ordenando así o posibilitando en forma directa. Por lo tanto, ¿por qué motivo tenemos que pensar que se requiere de esta norma para que se produzcan estas arbitrariedades? En verdad, se podrían producir en cualquier momento. Así como los libros no están entrando, podrían no estar entrando las bobinas de papel para tal o cual diario.

Asimismo, acá se compensa, a través de una fórmula, cuánto tiempo se requiere, porque aún no hay producción. Se dan tres años para la inversión de la empresa a fin de que pueda

satisfacer el mercado interno. Es obvio que, mientras tanto —y me gusta mucho el dictamen de minoría que presentó el radicalismo en ese sentido—, el arancel cero está garantizado. Debe estarlo después también. Obviamente, de lo contrario, se desabastecerá a los diarios de la Argentina. ¿Y por qué el gobierno nacional querría desabastecer a los diarios de la Argentina para que haya menos producción? Y si lo quiere para uno en particular, le va a costar mucho trabajo justificar esa discriminación: “vos no y estos sí”.

Por este motivo, considero que se ha inflado el discurso con muchos temores y fantasmas. Y me parece que esa no debe ser la discusión que estábamos dando o la que se ha dado en los medios de comunicación, la que, de alguna manera, manifiesta: ¿qué otra cosa se puede decir que una tapa en blanco y el artículo 32 para indicar que se está incumpliendo? Este fue un efecto bien logrado gráficamente por la última edición dominical de *Clarín*.

Ahora bien, alguna vez, nuestros diarios, todos los diarios, deberían poner en la tapa al artículo 14 bis, para indicar que el trabajo digno en la Argentina le está vedado a muchos millones de argentinos. Pero nunca vi tapas con este artículo.

Entonces, no debemos dramatizar tanto esta discusión. Si es cierto que hoy la libertad de expresión corre por muchísimos carriles que no son el papel, reitero, estamos dramatizando de más. También es cierto que no estamos discutiendo censura previa, porque eso sí significa restringir la libertad de expresión, aplastarla. Si votamos esta norma, ¿estamos quintándole el papel de diario a alguien? Creo que, felizmente, tampoco estamos haciendo eso.

Asimismo, entiendo que hay una posición de privilegio en el mercado de papel en la Argentina que está en riesgo; y que está bien que lo esté. Porque tenemos que generar una situación de igualdad en su acceso. Y eso me parece sano para la Argentina. ¿Por qué no ver en esta iniciativa la oportunidad de trascender una situación de hecho perjudicial de tantos años? Ahora bien, es cierto que actualmente esa situación no está dando los problemas que dio en el pasado.

Pero —repito, y me parece que esto es central como conclusión; al menos, es lo que me interesa que quede como resumen— los que votemos

afirmativamente esta norma no podemos estar diciendo “los que votan afirmativamente esta iniciativa favorecen la censura previa, condenan la libertad de expresión, restringen la circulación de la palabra”, ni tampoco que “los que están a favor de la ley están en contra de un medio determinado”. Tampoco, los que están en contra de la ley que, legítimamente, pueden preguntar: ¿es éste el mejor medio para la igualación del acceso al papel? Y, tal vez no. ¿Por qué no un medio más liviano, un medio menos amenazante? ¿Por qué no incluir un artículo de arancel cero de continuo? Son cosas que yo hubiera hecho, pero la gente no me votó a mí con el 54 por ciento el 23 de octubre de este año para gobernar la Argentina; la votó a Cristina Fernández de Kirchner, a un equipo de gobierno, a una continuidad que, entre otras cosas, incluye esta letra, este proyecto de ley.

Me parece que, entonces, poner a nuestro proyecto ideal en frente no es el mejor camino. Creo que el mejor camino es desestimar los prejuicios que arman un debate ficticio.

Muchas veces, en la Argentina, se han dado ese tipo de debates ficticios. La senadora Estenssoro habló, justamente, de las telefónicas. En ese entonces, 2003, se decía que si no se aumentaba el valor de la tarifa, Telefónica y Telecom se iban de la Argentina. Sin embargo, no se aumentó por años —y en algunos de esos años, creo que no tuvieron el subsidio que después les dieron— y ellas no se fueron de la Argentina.

Pareciera que muchas veces se cae el mundo, viene la catástrofe; y eso está en el debate. Pero una vez que pasa el debate, pasó la catástrofe y no pasó nada. No tengo por qué pensar que este va a ser un caso diferente. Pongamos las cosas en su lugar. No se trata de inconstitucionalidad; no se trata de ir contra la libertad de expresión, ni siquiera en el medio indirecto de uno de sus instrumentos principales, que es el papel para imprenta. Creo que no es eso lo que discutimos. Se trata de la regulación de un mercado que tiene a una empresa con una posición dominante y que, por supuesto, ella no es cualquiera. Hay un debate y una lucha de poder. Pero ya lo dije: el niño que leyó por primera vez el diario, que descubrió leer el diario con *Clarín*, ya no está acá del todo. Ojalá podamos tener —como dice Machado— “...esta segunda inocencia, que da en no creer en nada”. Ojalá que tengamos una

segunda inocencia. No sé si para no creer; tal vez, para volver a creer, pero sabiendo que, muchas veces, las cosas no son lo que parecen. No vamos a recuperar la primera mirada, que hace que creamos a rajatabla todo lo que figura en el diario. Ya no.

Entonces, ninguna de esas fuentes de información es la transparencia absoluta: un lado la verdad, el otro lado la falsedad; un lado el bien, el otro lado el mal. Si en la Argentina queremos superar los debates que nos tienen presos en todos los órdenes, no los reproduzcamos en este debate. Acá no se puede ser ni defensor del gobierno ni defensor de *Clarín*. ¿Cómo hacemos para no ser ninguna de las dos cosas? Discutamos la iniciativa, veamos el proyecto sin prejuicios, sin condicionamientos y, al observarlo así, creo que podemos coincidir –no digo que esto sea la verdad sino que es, simplemente, mi aporte a la construcción colectiva de la misma– en que acá no hay inconstitucionalidad. Y esto quiero destacarlo, porque nunca votaría una norma que me merezca la tacha de inconstitucional. De hecho, me pareció inconstitucional incorporar ayer en la ley de ganancias la cuestión de la delegación de la facultad a la Presidencia; y por eso no voté ese artículo.

¿Inconstitucionalidad? No; ¿restringir la libertad de expresión? No. Acá se trata de igualar. También se trata de controlar. ¿Es abusivo el control? En el papel, en la letra, no es abusivo. En el espíritu, no lo sé. En las consecuencias, lo veremos. Vamos a ser partícipes del seguimiento de la aplicación de este marco regulatorio dentro de la Comisión Bicameral. Tenemos una comisión asesora que también dejará su huella y su responsabilidad en todo el proceso, a pesar de que sus dictámenes no sean vinculantes. Entonces, no hagamos de cada debate en la Argentina una lucha de vida o muerte entre bandos que no son, ni siquiera River y Boca; ni siquiera las tribunas de la cancha. Si bien no tendremos el arte de Borges para describir graciosamente cómo es la realidad política argentina, hagámosla más amable entre todos.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el senador Artaza.

**Sr. Artaza.** – Señor presidente: voy a tomar un poco el espíritu del senador Cabanchik, aunque en algunas cuestiones coincidimos y en otras no. Hay una frase de Borges que dice

que el argentino individualmente no es inferior a nadie, pero colectivamente no existe.

Quizás pueda ser apropiada esta afirmación, porque hoy siento que estamos perdiendo objetivamente una oportunidad de discutir, de incorporar y no devaluar este Senado por la premura del gobierno por tener una victoria política.

Creo que hay un cambio de paradigma. La Unión Cívica Radical, partido antimonopólico y antioligopólico, que sabe estar del lado de los desposeídos, de los más débiles y en contra de cualquier corporación, ha echado mano a estos principios y presentado un excelente y brillante dictamen en minoría, que lo ha expuesto muy bien nuestro miembro informante. Entonces, creo que no podemos perder hoy la oportunidad de valorar al Senado, dejando de incorporar los aportes que hace el radicalismo a través de este dictamen, porque creo que es una gran oportunidad que no podemos dejarla pasar, quizás, por esta premura del gobierno.

Lamentablemente, tenemos que hablar del día después. Y así estamos viendo expresiones realmente de un valor importantísimo para la democracia, para la libertad de prensa, para la libertad de expresión, para la regulación de las actividades que debemos controlar desde el Poder Legislativo. Creo que el debate es apasionante. Y es una lástima que no podamos materializar y plasmar en el proyecto que trae el gobierno el dictamen de la Unión Cívica Radical.

Subjetivamente, tengo que decirles que si pienso en lo que estamos tratando de regular o modificar, quizá diga una exageración, pero hoy estamos en la era de la tecnología; estamos en la era digital; estamos en la era en la cual la primavera árabe la hicieron con las redes sociales y no con el papel de diario. No es que quiera subestimar esta cuestión, pero estamos legislando, quizá, para un futuro como para crear lamparitas incandescentes. No quiero subestimar esta cuestión, pero tenemos que pensar en el futuro y en el día después.

Creo que, quizás, el afán del gobierno de tener una posición hegemónica –una estrategia, hegemónica– le hace equivocar el camino, tal como ha dicho nuestro miembro informante. No obstante, tengo que destacar que tenemos la democracia.



Por algunas actitudes que estamos viendo del gobierno —y no quiero otra vez ser redundante en la enumeración de hechos que avanzan hacia una estrategia dominante—, suponemos que este hará un mal uso de esta norma. Pero no me olvido que dejamos esta iniciativa en manos de un gobierno democrático; no estamos hablando con una dictadura. Si bien he visto —y me preocupan— actitudes de intolerancia de parte de algunos sectores del gobierno, sé que estamos hablando con un gobierno democrático, elegido legítimamente por el pueblo argentino.

Nuestro partido tiene en este dictamen brillante que hemos expuesto varias coincidencias antimonopólicas, porque debemos volver a levantar nuestras banderas en contra de las corporaciones. En este sentido, la Unión Cívica Radical siempre va a estar defendiendo la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de imprenta y otros derechos constitucionales, porque esos son nuestros principios.

Como bien ha dicho el senador Cabanchik, y porque los radicales somos parte del artículo 14 bis de la Constitución, nos hubiera gustado tener alguna vez una tapa que enunciara los derechos constitucionales de esta norma. También me hubiera gustado, cuando peleé casi en soledad con ahorristas y ancianos en la calle en la defensa un derecho, tener una página de los grandes diarios argentinos que enunciara el artículo 17 de la Constitución Nacional, que establece que la propiedad en la Argentina es inviolable. La verdad es que me hubiera gustado tener una página de los grandes diarios argentinos.

Independientemente de lo que acabo de mencionar, voy a poner todo mi empeño en defender la libertad de expresión y en respetar los derechos constitucionales; y lo vamos a hacer con este dictamen brillante que ha presentado la Unión Cívica Radical en esta ocasión.

Yo siento que, quizás, perdemos una gran oportunidad. Decía Napoleón que, a veces, el vencedor se ve vencido por la victoria. El gobierno tiene que ser muy prudente al momento de utilizar el instrumento que va a recibir. En el mundo, ningún Estado que quiera avanzar sobre la libertad de prensa o sobre la libertad de expresión —derechos que debemos garantizar los gobiernos democráticos y populares— tiene perspectiva alguna.

Aparte de la prensa —y esto quizás sea la discusión de otro momento—, creo hay que regular la publicidad del Estado, porque no tiene actualmente legislación.

**Sr. Presidente.** — Senador, podría ir redondeando, por favor.

**Sr. Artaza.** — Cómo no.

La publicidad del Estado no tiene hoy legislación. Como vemos, en las provincias argentinas o en la Nación es discrecional la forma en la cual se maneja la publicidad pública.

Nosotros siempre vamos a estar en contra de cualquier corporación monopólica, pero también nos van a encontrar, como ha dicho nuestro miembro informante, para defender los derechos de la prensa.

Espero que el gobierno no haga mal uso de este proyecto. Alguna vez yo hice un espectáculo —y como artista lo tengo que nombrar— que se llamaba *Los locos mandan*. Yo espero que esto no nos ocurra a los argentinos y que seamos los cuerdos los que podamos regular el desarrollo de los argentinos. Lo digo, también, como representante de una provincia que tiene 500 mil hectáreas de forestación, con lo cual nuestro desafío y el del gobierno será también ver cómo vamos a cuidar el ambiente cuando se necesite utilizar la celulosa, como dice en ese proyecto que hoy va a ser aprobado.

Finalmente, recogeré también otra frase de Serrat: ojalá, Dios quiera que el mundo no esté dominado por esos locos con carnet. A veces, tenemos esta posibilidad de regular ciertas actividades. Espero que trabajemos en pos del desarrollo y para la paz de los argentinos.

Lamento que se pierda la oportunidad de aprovechar los aportes explicitados materialmente dentro del dictamen de la Unión Cívica Radical. Pero tengo esperanzas, porque felizmente tenemos democracia para cambiar lo que sea necesario en el futuro.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el senador Pérez Alsina.

**Sr. Pérez Alsina.** — Señor presidente: como presidente de mi bloque, aclaro que no voy a utilizar los veinte minutos o media hora que tengo sino que en siete minutos voy a fundamentar un pedido de abstención.

Cuando vamos a dictar una norma —coincido con algunos senadores preopinantes; de hecho,

ayer escuchaba con atención el análisis jurídico que hizo el senador Fuentes—, debemos tener en cuenta la normativa jurídica en sí misma y no prejuzgar cómo se la va a utilizar. Creo que así era su resumen. Porque si no, sería imposible legislar. Y una norma, obviamente, se inserta en una realidad para cambiarla, para reafirmarla o para dar garantías sobre algunos aspectos.

¿Cual es el hecho que quiere atacar esta norma? El hecho que quiere atacar esta norma, a mi entender, después de analizarla detenidamente, creo que es loable y consiste en frenar la posibilidad de un uso monopólico. Nosotros no tenemos que analizar si hoy hay o no monopolio; si existe la posibilidad de realizarlo, una norma tiene que cambiarlo. Obviamente que en la producción y distribución de papel, hoy hay una posición dominante, como varios senadores lo han expresado; entonces, debemos tratar de hacer algo para que no se utilice esta enorme posibilidad que viola artículos constitucionales.

En ese sentido, la realidad del papel es de antigua data y, de alguna manera, el Estado siempre tuvo que intervenir; bien o mal, pero tuvo que intervenir. No nos olvidemos que ya en 1969, el gobierno dictatorial de Onganía creó un fondo para el desarrollo de la producción de papel y celulosa, porque nadie podía hacer una fábrica de papel. Impuso un arancel del 10 por ciento para que con esos fondos después se hiciera una fábrica.

En gobiernos posteriores, el Estado siempre tuvo que intervenir y se llegó a esta realidad, que sería largo analizarla y no quiero hacer abuso del tiempo. Entonces, nos tenemos que preguntar por qué siempre tuvo que estar el Estado en este tema. Y en realidad, era porque en ningún momento la actividad privada en sí misma la podía realizar o quería llevarla adelante.

Si alguien analiza el negocio del papel prensa—no me refiero a la empresa, sino a cualquier negocio del papel prensa—, se dará cuenta de que, hoy día, es muy caro, enormemente caro—he hecho consultas al respecto—; no es en sí mismo rentable y tiene que tener muy buen control ambiental, porque es un negocio que puede llegar a crear problemas medioambientales. Entonces, el Estado siempre tiene que estar presente en este tema.

Ahora bien, ¿cuál es el núcleo de esta iniciativa? Si se declara o no de interés público

la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa. A tenor de la realidad que estamos analizando, creo que sí debe declararse como servicio público, porque es la única manera de garantizar hoy, y el día de mañana, que este insumo llegue a los diarios en forma clara y sin precios o actitudes monopólicas.

Discrepo con respecto a que esto ataca el artículo 32; sinceramente, en ningún momento ataca a esta norma. Y no nos olvidemos—haciendo una pequeña reseña histórica— de que el artículo 32 se incorpora recién en 1860. La Constitución del 53 no lo incorpora. En verdad, para ser breves, lo anexa por un problema entre Urquiza y Mitre. Podemos hacer distintos análisis históricos, pero se incorporó como consecuencia de un problema entre ellos dos.

Entonces, se incorpora ese artículo que de ninguna manera hablaba de lo que es el tema de la impresión en sí misma, por más que diga “libertad de imprenta”, ya que cuando se hablaba de libertad de imprenta en esa época, se hacía referencia a la libertad de expresión y a la manera de difundir las ideas. Es decir que no creo que aquí esté en juego el artículo 32.

Aparte, hagamos también el análisis de la realidad. ¿Hay problemas hoy en la Argentina, hubo hace poco o hay posibilidades de que en el futuro alguien no pueda expresar sus ideas sin censura previa? Sinceramente, creo que no. Existen una infinidad de medios, de canales, de radios, de televisiones, etcétera, y una cultura de la sociedad que no llegarían a permitir esto. Ya no hay violación para expresión de ideas sin censura previa.

Ahora bien, cuando hablamos de servicio público, no tenemos que olvidar que, como cualquier jurista lo dice, es un concepto muy amplio que tiene una evolución permanente. De hecho, la mayoría de los tratadistas de derecho administrativo hablan de un concepto que le llaman *in fieri*, en permanente hacer, en permanente *facere*. Está permanentemente dando una amplitud en sus conceptos. Y ¿a qué apunta? A que tiene como finalidad que el Estado asegure la cobertura de ciertos servicios y medios que son importantes para la comunidad. Y obviamente que un papel para diario, si bien no tiene la importancia que tenía hace no mucho, es un servicio importantísimo para que todos los periódicos de un país puedan asegurarse ese

insumo. Entonces, en ese sentido, creo que la ley es importante.

Ahora bien, elaboramos una norma para frenar la posición monopólica. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero esta misma iniciativa también tiene que hacer de cerrojo para que cualquier funcionario, presente o futuro, no tenga un poder absoluto en cuanto a la regulación del papel. Y ahí es donde, para mí, el proyecto tiene una omisión absolutamente fundamental, que ya algunos senadores han mencionado. La única manera de que esta norma se cumpla y nos asegure a toda la comunidad es que se fije, por garantía legal, el arancel cero de importación como una de las herramientas para que, el día de mañana, ningún medio tenga problema con la única empresa que hoy existe; y no va a ser fácil que exista otra, por más que haya escuchado que esto tendría que ser facilitado.

Reitero, la única manera de asegurar el cumplimiento de la norma es que ningún funcionario tenga la posibilidad o la llave de subir ese arancel o bloquear la importación, de manera de impedir el acceso al papel a cualquier comprador o a cualquier editorial. Esa es una llave muy importante. Si bien estoy de acuerdo con todos los principios, creo que esta última circunstancia que señalé inhibe, por lo menos a mi entender, la aprobación del proyecto; de la misma manera que creo que la situación actual no se puede seguir sosteniendo.

Por otro lado, también estoy en desacuerdo con la posibilidad de la injerencia a través de las disposiciones transitorias en un mecanismo donde se pueda arrinconar al capital privado haciendo una licuación del mismo. Ustedes conocen las explicaciones y no vale la pena detallarlas ahora.

Señor presidente, por estas razones, voy a solicitar la abstención pertinente.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Fernández.

**Sr. Fernández.** – Señor presidente: estamos hablando de un tema que nos importa y mucho. Una empresa que empezó allá por 1971, con algunos empresarios privados sin muchas posibilidades de desarrollo, cambia de manos en 1975, con el objetivo de eyectar la potencia que debía tener para proveer un producto tan importante como el papel de diario. Todos conocemos lo

que sucede con posterioridad, porque al principio se dudaba pero después, los expedientes judiciales hablaron por sí mismos, y hoy nos encontramos con una composición de capital en donde AGEA, empresa que pertenece a *Clarín*, tiene el 37 por ciento; Cimeco, que pertenece a *Clarín* tiene el 12 por ciento; *La Nación* tiene el 22,49 y el Estado nacional, el 27,46. Es decir, el 98,95 por ciento de la totalidad del capital.

El consumo anual nacional de pasta de papel es de 250 mil toneladas; 58 por ciento de esta demanda es cubierta por la producción de Papel Prensa, que llega a 145 mil toneladas anuales. Del total producido por Papel Prensa, *Clarín* y *La Nación* utilizan el 71 por ciento para cubrir sus necesidades. El 29 por ciento restante se distribuye entre 168 medios que deben pagar un precio 15 por ciento mayor, a importar para abastecerse. El 16 por ciento de la demanda se importó y podría haber sido abastecido por Papel Prensa.

Señor presidente: ¿qué es lo que pretende nuestro proyecto? Yo no soy naif y voy a decir las cosas por su nombre, porque la verdad es que, con todo el respeto que me merecen todos los señores senadores, en algunos casos, siento que la cosa se toma como si fuese algo absolutamente superficial o una pelea entre el gobierno y la empresa. Y yo estoy hablando de una empresa donde una parte es del Estado argentino y que en diez años, mientras cualquier empresa ganó entre el 300 y el 400 por ciento, ésta perdió medio punto. Y eso se lo están robando a 27,46 por ciento de los argentinos. Pretendemos declarar de interés público nacional la producción de papel de diario y regular la producción, ya que la concentración económica tiene consecuencias serias en la sociedad. Por eso, es imperioso que este tema sea contenido y ordenado por un Estado promotor y participativo.

Se castiga al consumidor final, se aumenta el precio por medio de manejos discrecionales—ahora voy a dar un ejemplo— y se abusa con la posición dominante. Hace un tiempo, a mediados de mayo de este año, los síndicos del Estado de Papel Prensa, el doctor Reposo y el doctor Tarelli, denunciaron la venta extraordinaria de papel a *Clarín* y a *La Nación* en una situación muy particular. Estas compraron papel en julio, conociendo que el insumo aumentaba el 1° de agosto y en octubre. ¿Quiénes hicieron las com-

pras? AGEA, que es *Clarín*, y *La Nación*, y ello ocasionó un enorme perjuicio a esta empresa, a la empresa que nos pertenece a los argentinos.

La producción anual promedio –para que nos entendamos– es de, más o menos, 13 mil toneladas y el volumen promedio es de unas 10.700 toneladas. Eso nos está mostrando que tenemos un exceso de producción mensual de, aproximadamente, unas 2.500 toneladas. Sin embargo, en el registro, en julio, hubo 5.500 toneladas de más. Las ventas de julio fueron de 22.800 toneladas, es decir, un 214 por ciento más que el promedio de cualquier mes, y las ventas de septiembre fueron de 16.700 toneladas, o sea, un 157 por ciento más que las 10.700 toneladas que acabo de comentar, que era la venta promedio de todos los meses.

Los volúmenes extraordinarios para julio y septiembre de 2010 fueron de 39.500 toneladas, produciéndose aproximadamente 25 mil toneladas en julio; las otras hubo que tomarlas, prácticamente, del 90 por ciento del stock, a fin de poder cumplir. ¿De dónde sale esto? Aparece el representante judicial y manifiesta: “Yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente, porque se presentaron unas empresas que quieren comprar mucho papel en este momento”.

Así surge ese tema. ¿Saben cuánto perdió por costo la empresa? Perdió 4 millones de pesos, por el aumento de los costos variables y por haber nivelado el precio de venta respecto del incremento de los costos. ¿Cuánto perdió de cobrar? Perdió 5 millones de pesos. Es una genialidad, ¿no? Porque lo que nosotros estamos viendo en este caso es que esta información importante del representante judicial está asociada con el pensamiento del presidente de Papel Prensa. Una empresa ofreció hacer una importantísima compra, avalaba este latrocinio al que sometían a una parte del capital que le pertenece a todos los argentinos. No son unos santos. Están haciendo esto desde el primer momento en que se hicieron de esa empresa.

Durante 2010, el 33,46 por ciento de las compras anuales de *Clarín* y el 41,12 de *La Nación* se dieron en los meses de julio y septiembre. Repito: el 33,46 de *Clarín* y el 41,12 de *La Nación* se hicieron en julio y septiembre. Es decir, la mayor parte del paquete se lo compró antes de que se produjera el aumento. En el caso del primer aumento, lo conocían del presupuesto del

año anterior, y en el caso del aumento de octubre, lo conocían desde treinta días antes, con lo cual sabían claramente lo que estaba pasando para poder quedarse con esa ventaja de la cual una parte nos pertenece a todos los argentinos.

Tienen otros beneficios, señor presidente, porque aparte de los beneficios del propio convenio que generaron ellos para refinanciación de sus créditos podemos mencionar la compra del diario reciclado. Durante el año 2010 Papel Prensa le compró a *Clarín* 11.592 toneladas de papel de diario reciclado a 900 pesos la tonelada. Este volumen representa el 7,7 por ciento de la producción total de la empresa y el equivalente al 13,8 por ciento de la demanda insatisfecha de clientes no relacionados en el año 2010.

Es imperioso que se conozca. No nos pongamos las anteojeras. Vean lo que está pasando desde hace muchos años.

¿Qué importa quiénes fueron los directores si no lo vieron en el momento? Porque uno de los directores que mencionó el senador Sanz, que sabe que le tengo un enorme respeto personal, a mí no me merece ninguna garantía; me parece que tenía puesta la camiseta del otro lado, con lo cual no me merece ninguna garantía.

Tampoco me gusta –y me hubiese gustado que estuviera el senador Sanz para decírselo– que haga de Macaya Márquez del peronismo. Dice Fernando de Sabater en *Ética para Amador* “Ocupate de ti mismo socapuyo que más te vale”. No te metas con el peronismo. Déjalo que el peronismo sabe defenderse solo. Ya arreglará sus despelotes de la mejor manera.

Hay empresas que han mostrado beneplácito por esto, y por alguna razón lo están haciendo: *Ámbito Financiero*, *El Independiente*, *Grupo 23*, *Página/12*, *Diario El Atlántico*, *BAE*, *El Tribuno*, *Crónica*, *Diario Popular*, *Grupo 1*, entre tantos. Lo han planteado. Entonces, no demonicemos los artículos 40 y 41. Lo que dice el artículo 40 es que todos tienen que tener acceso al papel. ¿De qué libertad de expresión estamos hablando?

El artículo 32 habla de otra cosa. Lo dijo la senadora Estenssoro. Es la primera cosa en la que coincido en 160 años con la senadora Estenssoro. (*Risas.*) No está en la Constitución de



1853; es cierto que aparece en 1860 por pedido de la provincia de Buenos Aires.

Pero estamos hablando a 160 años de diferencia. En aquel momento lo que se pretendía decir era que todos le garantizáramos los elementos a la mano para poder cumplir, no le quitaron la posibilidad de expresarse. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Yendo hacia ese punto: que usted acceda al papel que quiere al mismo costo que todos. Esto es lo que nosotros tenemos que estar viendo. Entonces, no seamos *naif*. No es un chiste ni una pelea de poder. Estamos hablando de alguien que se está quedando con la nuestra, señor presidente, con la de todos los argentinos.

Entonces, en este concepto nosotros queremos hablar de todos, porque ellos manejan el stock a su antojo. Cuando hicieron esta compra no les bastó con llevarse toda la diferencia del aumento; se llevaron el 90 por ciento del stock.

**Sr. Presidente.** – Le pido que vaya redondeando, por favor.

**Sr. Fernández.** – Ya redondeo, señor presidente. Deme un segundito, nada más.

**Sr. Presidente.** – Cómo no.

**Sr. Fernández.** – Lo que nosotros buscamos es igualdad de oportunidades para todas las editoriales.

El papel importado es caro y son más caros los pasivos que hay que contraer para poder traerlo. Y hay que estar inscriptos. No solamente tiene que estar inscripto el importador –que es lo que le decía al senador Romero hoy– sino también el que le compra al importador como si fuese importador; una ridiculez, un sinsentido en el que nunca ha reparado ninguno de los gobiernos.

Lo que dice el artículo 41 con letra clara... A ver si nos entendemos. Vayamos al punto óptimo de productividad. Ahí tenemos que llegar para tratar de abastecer el mercado interno, y si no nos da el cuero para eso, señores, hay que poner plata, armar un plan de inversiones de 3 años y cumplir, para que en 3 años podamos tener la ampliación de la capacidad instalada que garantice que todos aquellos que necesitan papel de diario lo tengan producido por los argentinos y al mismo costo para todos, y les garanticemos, en la medida que la capacidad instalada lo permita, también la posibilidad de la exportación. ¿Por qué no?

No coincido con el senador Pérez Alsina cuando dice que es difícil que haya otras empresas. Si las condiciones y las reglas de juego son claras, ¿por qué no puede haber? El artículo 3° es muy claro cuando hace referencia a cualquier empresa que fabrique papel de pasta de celulosa. Entonces, no estamos hablando de nenes de pecho. Estamos hablando de gente que se quedó con una empresa de mala manera, por lo que dice el expediente judicial. No han parado de hacer desaguisados todos los años, y cada vez que pudieron hacer algo siempre fue para el beneficio de su bolsillo, nunca para beneficio de los otros diarios. A *Crónica* la mataron de esa manera, señor presidente. No le vendían papel y, como no tenía forma de importarlo, la obligaron a hacer un diario así de chiquitito mientras que ellos sacaban 750 suplementos.

La realidad es que terminamos confundiendo una cosa con la otra.

A mí me importa un comino *Clarín*. Yo fui lector toda la vida de *Clarín*, pero cuando nos ponemos a hablar criteriosamente de lo que representa en términos de la relación con la sociedad de los argentinos vemos que no representa precisamente la posibilidad de que todos se expresen como quieren y cada vez que pueden maltratarlo lo hacen. Por lo menos conmigo lo hicieron; yo tengo el lomo hinchado de los golpes de ellos. No me voy a callar, señor presidente. La verdad es que siento que he entrado en la política para decir las cosas como las siento y no he llegado para callarme la boca. Creo que estas cosas son así.

No es verdad lo que se dijo sobre el artículo 32. No tiene nada que ver. Y no hay en esto un componente de revancha de ninguna característica. Las reglas de juego son claras: hay papel para todos, para el diario más chiquitito y para el diario más grande, desde Ushuaia a La Quiaca; para absolutamente todos, piensen como piensen, y al mismo precio. Es la única capacidad que tendremos en términos de garantía de que se refleje claramente la libertad de expresión, porque si usted tiene el papel después la letra no se la tiene que mostrar a nadie, como sucedía en otras épocas en las que había que llevárselas al general que estaba de turno en la Casa de Gobierno para que este dijera lo que se publicaba y no se publicaba. Y había algo peor, que era quedarse con la empresa para no publicar nada

malo en contra de aquellos que usurpaban el poder de todos los argentinos.

Esto es lo que yo pretendo decir, señor presidente; no es *naif* sino que es bien claro lo que estamos discutiendo. Estamos defendiendo la propuesta de defensa de la libertad de expresión de los argentinos.

No hay derecho humano más importante que el derecho a la vida y a la libertad de expresión, y este es el que no está expresado cada vez que nos decían que a los presidentes se los volteaba con cinco tapas de *Clarín*.

El poder de los argentinos, el real, lo tuvieron siempre ellos, no lo tuvimos nosotros. Ellos no van a elecciones. Presionaron todas las veces que pudieron. Hoy tenemos oportunidad de dar una discusión de otras características. No me interesa ir contra la empresa; voy contra el derecho de la parte que le corresponde al Estado para defender lo que le corresponde: esas ganancias que nos quitaron, y esto ya está denunciado en la Comisión Nacional de Valores.

Vamos a recuperar la parte que nos corresponde y, por otra parte, al declararlo de interés público y en las condiciones que acabo de mencionar, les garantizaremos a todos los medios: del centro, de izquierda, de derecha y al que piense como se le ocurra, que va a tener un buen papel a un buen precio en condiciones de stock y que va a poder poner en él lo que se le antoje, porque la libertad de los argentinos no está en negocio para nadie, ni en manos de Magnetto ni en manos de nadie.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Cano.

**Sr. Cano.** – Voy a tratar de ser breve, en virtud de que el senador Sanz dejó claramente expresada la posición de la Unión Cívica Radical. Solamente quiero hacer algunas reflexiones con respecto a lo que aquí se dijo.

En primer lugar, he escuchado a distintos sectores de la oposición que plantean como línea argumental a la hora de apoyar iniciativas que vienen del oficialismo el tema del 54 por ciento, y lo digo con el mayor de los respetos que le tengo al senador Cabanchik.

La verdad es que obviamente ese 54 por ciento votó una opción, y debo reconocer que la iniciativa que hoy estamos tratando no surge de ahora sino que el gobierno la viene militando

inclusivo desde mucho antes del proceso electoral. Pero, en realidad, esa línea argumental –y esto hablando en términos futbolísticos– me recuerda algo que decía Borges: a mí siempre me tocó estar del lugar de la hinchada, y también dentro de la cancha en algún momento en mi provincia. En la política a mí me gusta referenciarme mucho más en el rol de hinchada, porque todos sabemos que los jugadores siempre están abiertos al libro de pases. Recuerdo que en mi provincia en el año 2003 arrancamos cinco legisladores que habíamos sido votados por la gente, no por el oficialismo. Porque es la gente, la sociedad, la que nos pone en el rol que debemos jugar, y si la gente nos vota como una alternativa de oposición, ese es el rol que debemos jugar, porque también vota al oficialismo para que gobierne.

En ese momento algunos de mis colegas legisladores electos por el radicalismo me decían que la verdad era que la elección de Alperovich había sido impresionante, porque había sacado más del 74 por ciento de los votos, y que había que apoyar; y, bueno, al poco tiempo con ese argumento quedé jugando solo.

Después uno tuvo su premio, porque la sociedad reivindica eso, y en lugar de los 14.000 votos que saqué en ese momento al poco tiempo sacamos 120.000 y estoy ocupando una banca, después de más de 40 años, representando a la provincia de Tucumán.

Así que, cuidado con el discurso del 54 por ciento, y lo digo desde la autoridad moral que tengo, tanto en mi provincia, donde he apoyado iniciativas del oficialismo, como cuando he sido presidente de la Comisión de Salud –en 2009–, cuando la oposición teníamos mayoría, recuerdo con la senadora Fellner como vicepresidenta, y hemos sacado el ciento por ciento de las normas por unanimidad muchas de esas iniciativas venían del Poder Ejecutivo. Así se concibe la política, cada uno asumiendo su rol. Pero no creo que sea este el caso.

Le había pedido una interrupción a la senadora Fellner, que no me concedió. Pero después, por una cuestión de género –por curiosidad–, me llamó y me preguntó qué le iba a decir. (*Risas*)

Le manifesté que ella había puesto como ejemplo al diario *Ámbito Financiero*, y que había expresado que nadie podría sospechar que ese periódico fuera kirchnerista. Entonces, le

dije que mi pregunta era qué diarios eran kirchneristas, porque busco algún parámetro, alguna medida que tenga que ver con la distribución de la pauta oficial, el cual no es un tema menor. Cuando se lee que hay medios que reciben 36 millones, 34 millones, 24 millones, 12 millones o 10 millones –y podríamos referirnos también a los canales de televisión–, verdaderamente, no encuentro respuestas a cuáles son los parámetros vinculados con la distribución de la pauta oficial.

Esto se relaciona con una cuestión que, en el ejercicio del poder, se denomina “discrecionalidad”. En cuanto a la discrecionalidad, es muy delgada la línea o el límite entre manejar los recursos que son de todos los argentinos de manera que no corresponde.

Considero que el oficialismo argumenta desde la convicción. Cuando todavía no había asumido como senador nacional, escuchaba las posiciones de mi partido y las del oficialismo respecto de la Ley de Medios. Finalmente, cuando se sancionó la norma, me decía “a lo mejor, cuando ocupe mi banca de senador, deberemos rectificarnos –porque en política hay que saber rectificarse cuando uno se equivoca– pues, a partir de la sanción de la Ley de Medios, tendremos los medios democratizados y acceso a las radios y demás medios de comunicación”. Al poco tiempo de la entrada en vigencia de la norma, me preparaba todas las mañanas en Tucumán porque consideraba que a partir de ese momento empezarían a llamar de las radios, comenzaríamos a salir en los medios de prensa y demás. Y la verdad es que no ocurrió nada de eso. Si la ley buscaba, justamente, la democratización y que todos pudiéramos opinar, por lo menos en los ámbitos que yo conozco, eso no ocurrió. Soy honesto pues, de lo contrario, estaría diciendo una verdad a medias.

Hay una radio en Tucumán que me hace muchas notas y con cuyos periodistas o locutores varias veces discrepo. Me hacía notas antes de la sanción de la Ley de Medios, y me las sigue haciendo ahora; me refiero a Radio Nacional. No sé si le estoy haciendo un favor diciendo esto (*risas.*), pero en ese medio tenemos absoluta libertad para expresarnos, al igual que en otros que, inclusive, reciben la pauta oficial a nivel nacional. Sin embargo, considero que la

Ley de Medios, en general, no cumplió con la línea argumental que planteaba el oficialismo.

Por lo tanto, la discrecionalidad en el manejo de los recursos del Estado –que no son pocos– para premiar a algunos medios y castigar a otros –una situación que continúa– es una actitud que no se condice con lo que aquí se manifiesta, en el sentido de privilegiar o de garantizar la absoluta libertad para todos los medios de prensa.

Todos tenemos algo que decir, tal como se lo expresé a la senadora Fellner. Por ejemplo, el viernes de la semana pasada se realizó, en la sede del Comité Nacional del radicalismo, la elección de autoridades. Prácticamente se eligió por unanimidad al actual presidente del Comité Nacional. Comenzó a las cuatro y media de la tarde y hubo incidentes, forcejeos, que duraron apenas tres o cuatro minutos, en el acceso al Comité Nacional. Como no teníamos señal dentro de la sede donde se estaba votando, cuando salgo, a las 20, tenía varios mensajes de texto de mi familia y de algunos amigos de Tucumán a través de los cuales me preguntaban si había habido heridos, qué estaba pasando, hasta cuándo nos íbamos a pelear, etcétera. Verdaderamente, en ese momento no entendí los mensajes. Pero al sentarme en un café cercano al Comité Nacional me di cuenta de lo que sucedía: había un medio que, sistemáticamente –cada tres o cuatro minutos–, mostraba como “imagen del día” la pelea o los incidentes durante la elección en el Comité Nacional. Pero no reflejaba para nada lo que efectivamente había ocurrido.

Esa situación no puede hacer que uno modifique su posición, que es garantizar la libertad de prensa. En ese sentido, me parece que el senador Fernández pone a *La Nación* y a *Clarín* en el mismo ámbito que el gobierno, cuando manifiesta que a ellos no los votan. Naturalmente que no los van a votar, porque cumplen un rol distinto. Y bien dijo el senador Juez que, a pesar de que el gobierno considera a algunos medios opositores, obtuvo el 54 por ciento.

Por lo tanto, desde la posición del radicalismo, cuando uno ve la manera como se distribuye la pauta oficial y uno ve cómo se aplica la Ley de Medios, observa los resultados que se obtuvieron y analiza actitudes como la de la AFIP, que inhibió bienes del diario *La Nación* a pesar de estar vigente una medida cautelar de la Corte –me parece que esos abogados han incurrido en

estafa procesal—, queda absolutamente en claro que el gobierno, respecto de estos dos medios de prensa, asumió el tema como una cuestión absolutamente personal.

En consecuencia, para no ubicarse en medio de estas dos situaciones, el radicalismo —como bien dijo el miembro informante— tiene una posición totalmente superadora a la del oficialismo.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador Fuentes.

**Sr. Fuentes.** — Señor presidente: no me referiré a la exhaustiva fundamentación que se ha hecho del proyecto presentado por el oficialismo ni a la descripción contundente de las arbitrariedades que se han cometido a lo largo del tiempo en esa posición dominante.

Trataré de hacer un ejercicio de entendimiento de qué estamos discutiendo hoy aquí. No será la primera vez que se crea que se está discutiendo la preeminencia de un artículo sobre otro, o que se están debatiendo valores abstractos o una vocación perversa, encuadrada en la intolerancia y en la venganza.

Este cuerpo ha sancionado entre ayer y hoy una serie de leyes en pleno ejercicio de los derechos constitucionales, acompañado por una voluntad popular mayoritaria. Sin embargo, observamos en los artículos de algunos diarios, en esos comentarios de “plumíferos” serviciales en esos poderes concentrados que lo hemos hecho sobre la base del odio, la venganza y el resentimiento, y no de la coherencia de nuestros discursos y, fundamentalmente, de nuestras conductas.

El senador Sanz puso el dedo en la llaga. Porque esta es una cuestión que atraviesa transversalmente la totalidad de la vida política. Es fácil decir vayan, confronten, peleen, desmantelamos esa concentración monopólica que el beneficio es para toda la clase política, pero “pijoteemos” el acompañamiento para ver si sacamos dos renglones más o media hora más de televisión, y traigamos un proyecto, sobre el final de esta cuestión, que ya lleva mucho tiempo en discusión.

Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la principal expresión de la libertad y de la representación, que es la capacidad que tienen los partidos políticos de imponer,

autónomamente, una agenda en la discusión. Es decir que, en función del mandato popular —de lo que representamos—, la agenda que traemos al debate es la que la gente nos pidió y la que expresa sus necesidades. ¿Qué sucede con esa agenda autónoma? Que determinados grupos de poder pretenden imponer la agenda, y subordinan los partidos a esa agenda.

No hay cortes tajantes en esta historia. ¿Qué es la dictadura? ¿Alguien cree que la dictadura es un acto de maldad o que, de golpe, ciertos tiranos se juntan y conspiran? No. La dictadura es la expresión de las concentraciones de poder y de los intereses concretos, a través de la cual la voluntad popular y los derechos populares deben ser abrogados. Eso es la dictadura. La expresión de ese poder *manu militari* es la dictadura. Y cuando esa dictadura se torna ineficiente para poder controlar la democracia, porque de esto se trata, de tutelar a la democracia, los partidos deben expresar esa agenda de necesidades del pueblo, pero los sectores concentrados y dominantes las condicionan a través de los golpes, de la corrección militar. Pero cuando eso se agota, por el propio deterioro, ¿dónde viene la cuestión?, ¿cómo se expresan esos poderes? En el chantaje y en la extorsión: los Magnetto, los titulares de los diarios *Clarín* y *La Nación*.

Voy dar un solo ejemplo que tiene que ver con una cuestión que cualquier sociedad civilizada acepta con absoluta normalidad. Imagínense ustedes discutir en Francia el rol de De Gaulle en la resistencia, si hay resistencia o no, etcétera, la sola idea de generar un instituto que tenga una visión distinta a la visión hegemónica de la academia liberal impuesta a la Argentina y que es bronce pétreo, tal como diría el señor senador preopinante, pétreamente impuesta, sobre todo por la tribuna de la academia que es el diario *La Nación*. Eso es motivo de cualquier alarido o agravio.

Ni siquiera tenemos el derecho de ver la historia en función de la propia interpretación de nuestros intereses. ¿O es que acaso hacemos historia en un compendio de verdades científicas? ¿Qué es la historia? Es buscar sobre nuestros antecedentes y pasado aquello que nos motiva a seguir viviendo y a seguir construyendo. ¿Qué es una nación? Fundamentalmente, es un conjunto de ideas que da vinculación continua de padre a hijo. Una nación es un objetivo, es



más que un pueblo, es más que un territorio. Y es fundamental para una nación tener claridad sobre su historia y acompañarla de la manera que quiera; ése es el derecho que reivindicamos.

¿Qué estamos discutiendo acá? Estamos discutiendo si la clase política argentina está a la altura del mandato popular e impone una agenda autónoma, a diferencia de esos medios que sí son perversos, de esos medios que sí odian y desprecian, particularmente a nosotros. Por eso somos las bestias negras de la política; somos los viejos que no hemos podido madurar y que seguimos siendo imberbes. Ésa es la acusación que nos hacen. Yo prefiero seguir siendo imberbe y no claudicar ante ese miserable esquema que nos plantean.

Hoy la clase política argentina tiene que demostrar que tiene coraje. Porque esto es algo transversal donde todos estamos enredados. ¿Quién no quiere tener el favor del multimedios? ¿Quién no quiere ser brillante, como decía el señor senador Cabanchik, y tener menciones continuas y permanentes? El que no figura en televisión no existe.

El día que acá hagamos un estudio serio sobre el auge de determinadas formas de criminalidad en la Argentina vamos a ver cuánto incide la repetición continua de esos episodios generados por movileros y televisores. Estamos en un momento donde cualquier libertad, cualquier concepto, cede ante el apabullante uso de imágenes y de medios. Esto es lo que pretendemos.

Este tema no es algo que llega acá de forma aislada. Primero se trató la Ley de Medios y ahora estamos tratando la posibilidad de garantizar abierta, democrática y consensuadamente la distribución de papel para que los argentinos puedan leer lo que se les “cante” y no lo que se les imponga.

Por estos motivos, vamos a acompañar este proyecto de ley.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra la señora senadora Morandini.

**Sra. Morandini.** – Señor presidente: como creo en la honestidad de intenciones, quiero aportar a este debate sin descalificaciones para ver de qué estamos hablando, como dijo tantas veces la senadora que hizo de miembro informante. Pero como ella me mencionó al presentar el proyecto de ley, ahora me veo obligada a

hablar de una manera en que no lo quería hacer, o sea, personalizando el debate.

En ese sentido, señora senadora, le debo decir que yo no he llegado acá por un aviso de Clasificados de *Clarín*, sino que he llegado gracias a la credibilidad ganada como periodista independiente, lo que me ha permitido que en mi provincia me deleguen confianza para representarlos. Por eso estoy sentada acá.

**Sr. Presidente.** – La señora senadora Fellner le solicita una interrupción.

**Sra. Morandini.** – No. Yo voy a hacer mi exposición y después la voy a escuchar con atención.

**Sra. Fellner.** – Está en una confusión, senadora. No me entendió.

**Sra. Morandini.** – Usted preguntó muchas veces, a lo largo de la presentación del proyecto, para que sepamos de qué estamos hablando. Y a mí me parece que hablamos de cosas diferentes, que es el problema más serio del diálogo posible. Una cosa es cuando se defienden valores y otra cosa es cuando se defienden intereses; una legítima defensa de intereses, porque no estoy poniendo en duda eso. Pero para que en el idioma político quiera decir para todos lo mismo es necesario que los valores quieran decir para todos lo mismo. Y ésta es la única forma de poder eludir este debate de Boca-River, como si hubiera dos elefantes peleándose, donde uno debe tomar partido por alguno de ellos. Entonces, yo quiero poner la discusión en términos de valores, aun a riesgo de parecer ingenua, lo que acá se ha mencionado con frecuencia; yo no soy ingenua pero sí reivindico la inocencia, porque a pesar de que aquí no está el filósofo Cabanchik, es el mejor concepto de la filósofa Arendt en el sentido de volver a empezar.

¿Por qué estamos hablando del papel prensa y no del papel celofán? Porque para hacer un regalo, para ese acto generoso de homenajear a otro, lo que porta como valor un regalo prescinde del papel. En cambio, el papel prensa porta un valor simbólico: el de la libertad. Porque el insumo de la prensa es la libertad, no el papel. Por eso hay tanta protección constitucional. Es a ese valor que se protege y, entonces, por eso hay que garantizar el papel. Precisamente, porque es el papel el que porta valor simbólico y cultural.

Entonces, voy a hacer al revés: en lugar de invocar todos los tratados, todos los artículos, todas las Constituciones, todo lo que defiende la libertad del decir, voy a preguntarles a todos los abogados que hay aquí, a los senadores, por qué se protege tanto la actividad del periodista. ¿Por qué el periodista es el único ciudadano que no está obligado a decir la fuente, a no revelar un delito? ¿Por qué el periodista es el único ciudadano que está protegido en esto que es no revelar la fuente? ¿Por qué además lo hemos protegido votando, cumpliendo con tratados internacionales, que se deroguen los delitos de calumnia y de injuria? Confío en que también este Parlamento podrá aprobar un proyecto de cláusula de conciencia.

Todas éstas son garantías constitucionales que no protegen a la persona del periodista. Se protege al periodista porque se supone que él cumple una función que está por encima de todas nuestras cabezas, que es el derecho de la sociedad a ser informada, algo que no aparece en este debate. No hablamos de lo que tenemos que garantizar: el derecho de la sociedad a ser informada. Hay muchos tratados que vienen protegiendo este tipo de garantías, desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, a través de su artículo 19. Seguramente, a aquellos que tienen interés en estos temas les gustará leer lo que fue la riqueza de aquel debate, cuando en el año 1948 de un lado Eleanor Roosevelt defendía el derecho a decir, que después quedó consagrado, y del otro lado lo que expresaba la Unión Soviética que era la interpretación de la libertad. A veces, me da una enorme tristeza constatar que 63 años después nosotros reproducimos un debate para pretender interpretar la libertad.

¿Por qué los artículos 14, 32 y 75 –inciso 22– de nuestra Constitución? ¿Por qué el artículo 4º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre? ¿Por qué el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Por qué el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966? ¿Por qué la declaración de Teherán del 68 en su artículo 5º? ¿Por qué la Convención Americana sobre Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, tan mencionada, en su artículo 13? ¿Por qué la Declaración de Chapultepec? ¿Por qué los artículos 1º, 2º, 5º y 7º? ¿Por qué

los principios de Johannesburgo? ¿Por qué seguimos con tantos principios en estas declaraciones más recientes en el tiempo para llegar a la Declaración de Lima y a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de diciembre de 2000? ¿Por qué hay tanta necesidad de garantizar un derecho, como es el derecho a la libertad de expresión?

Y si en el primer caso se garantiza el derecho, en el caso de la figura del periodista, el derecho a la sociedad a ser informada es vital. Toda esta normativa ha sido consecuencia de la gran tragedia que significaron en el siglo XX el nazismo y el stalinismo. Esto fue así por la intervención del Estado, al que se le tiene miedo, porque fue el Estado el que siempre cayó en la tentación de interferir y de establecer la censura, que es el primer acto que cometen los totalitarismos de cualquier color.

De modo que todos los tratados defienden al Estado, pero de sí mismo; para que no caiga en la tentación de interferir y para que garantice lo que tiene que garantizar. El Estado es el único que puede garantizar, porque es el único que puede violar los derechos humanos. En consecuencia, estamos hablando de cosas diferentes.

Yo escuché aquí que se habló de intereses, y me produce tristeza que a veintiocho años del advenimiento de la democracia no tengamos un valor compartido. Aquí se han hecho una gran cantidad de confesiones. No quiero entrar en la chicana barata. Comprendo que hay que ir a los diarios y fortalecer los argumentos leyendo los diarios. He ido a leer las versiones taquigráficas. Lo hice totalmente despojada, porque desde que estoy sentada honrando esta banca, quiero entender y aprender de mis pares. Y miro y aprendo mucho leyendo las versiones taquigráficas. Por eso, leí la versión taquigráfica del tratamiento en este recinto del debate de la llamada Ley de Bienes Culturales. Tengo un montón de cosas que se dijeron en dicho debate. Las voy a despersonalizar, porque no tengo interés en mencionar quiénes dijeron las cosas que tengo aquí. Pero me llama la atención, ¿cómo se pudo defender en ese momento algo y, casi ocho o nueve años después, con la misma pasión sostener lo opuesto?

En este Senado, una de las poquísimas voces que se opusieron a esa Ley de Bienes Culturales –seguramente, se va a reconocer aquí quién lo

dijo— sostuvo: “Creo que esta norma que vamos a sancionar [la de bienes culturales, claro] está impulsada por un grupo económico dueño de medios de comunicación que se convertirá en un privilegio más para dicho grupo monopolístico, que tendrá el poder de tener una zona de reserva económica y presionará, comprará y controlará a los pequeños medios del interior del país, como ya lo hizo. Ésas son las voces que tenemos que dejar que sigan escuchándose, para defender la pluralidad”.

¿Es función de este Senado armar y desarmar la normativa cada diez años? ¿No sería mucho más saludable para nuestro país, para nosotros y, sobre todo, para la ciudadanía que nos delega la confianza para que estemos aquí sentados que los principios que consagran todos los tratados y la Constitución estén representados en sólo uno?

Si la libertad de decir no es un derecho que suene igual para todos, entonces tendrá razón la señora senadora por Jujuy: estamos en problemas. ¿Y sabe por qué, señor presidente, no suena para todos igual? Porque hay muchísimos equívocos. Desgraciadamente, hay pereza intelectual y holgazanería. Porque suena muy bonito hablar, como en una rima, sobre la libertad de prensa o de empresa. Pero se confunde conceptualmente lo que significa la libertad de empresa y, también, que a la empresa periodística —porque produce precisamente ese valor simbólico cultural— no se la puede tratar de la misma forma que a otras.

Nadie está obligado a fabricar vasos, vestidos, mesas o sillas. En cambio, a las empresas periodísticas se las protege constitucionalmente porque producen un bien cultural y gestionan de manera privada un valor universal. Éste es el problema. Aquí radica la tensión, que es una tensión que no hemos descubierto los argentinos, sino que se procesa en todo el mundo. Es más, en el mundo moderno se está debatiendo cuál es la relación de los medios con la democracia. Por supuesto, hay enojo con las corporaciones que han crecido y que no se han autorregulado. Porque como toda la normativa dice que nadie puede ser censurado previamente porque se le podrá demandar una responsabilidad ulterior, nunca hablamos de lo que hay que hablar, o sea, de exigir responsabilidad a los medios.

Yo no tengo que probar en qué lugar estuve. No me gusta el periodismo que hacemos. Pero

no por eso voy a caer en la tentación de invalidar esta idea fundamental para el sistema democrático. Porque si no hay libertad de decir, no hay sistema democrático.

Aquí se mencionó también a Amartya Sen, un aclamadísimo Premio Nobel, quien dijo que la democracia no se define sólo por las elecciones. Es decir, no sólo define a la democracia que se elija cada dos años a distintos representantes; lo que mide la solidez de un sistema democrático es la discusión pública. Y quienes median en esa discusión son los medios.

No deseo abundar aquí en todos los elementos que tengo para demostrar por qué este proyecto de ley que estamos considerando es inconstitucional. No está aquí el senador que se refirió al artículo 32 de nuestra Constitución, pero considero que se pone en riesgo la libertad de expresión con todo lo que termino de argumentar, porque el Estado nacional, en lugar de ser garante, toma parte. Y en lugar de ser el árbitro, toma posición. De modo que esto es lo que amenaza: la concepción de un Estado que confunde prensa con propaganda.

Ésta es otra discusión conceptual; porque tal como discutimos ayer con relación al terrorismo, lo que mal se nombra, mal se obra. Si creo que lo que hace la prensa es propaganda, voy a caer también en la tentación de tener medios que sean públicos como propaganda de gobierno.

Me produce una tristeza enorme esta situación. Soy una persona que no tiene ningún mérito, porque me he beneficiado de vivir el periodismo en libertad. Gracias a la libertad ajena, a la libertad de los españoles cuando nosotros estrenábamos dictadura, se me permitió a mí, como a tantos otros, denunciar lo que pasaba en nuestro país. Gracias a la libertad ajena pudimos reconstruir el mecanismo macabro del terrorismo de Estado.

Lloro, me conmuevo, cada vez que leo la carta que escribió Walsh a la dictadura un año después. Y la primera palabra que Walsh escribió en esa carta es “censura”. Por eso nos erizamos con cualquier intención y por eso se dice en los tratados: indirecto. En consecuencia, hay que proteger al Estado de sí mismo. Pertenezco a esa tradición. En España, todos estos medios que tienen un enorme prestigio internacional surgieron con la democracia. Cuando ingresé a trabajar allí, me pidieron compromiso con

la democracia. Ojalá los medios en mi país tengan compromiso con la democracia. Es lo que ambiciono. Y ambiciono también que los periodistas no tengan esta idea perversa de creer que porque trabajan para un medio están obligados a ponerse la camiseta. La camiseta es de otro orden.

Esto me hace acordar... Me interrumpo por los gestos que veo que se hacen del otro lado. Mejor, así bajo un poco la vehemencia. Esto, en parte, me hace pensar en un santo que hay en una de las iglesias de Mar del Plata, que recuerdo que, en mi rebeldía, me indignó muchísimo, porque al santo se le pone una moneda y da la bendición. Me pareció terrible que la bendición esté apoyada en quién paga o en quién da la moneda. Eso revela la pobrísima idea que se tiene de la libertad. Y cuando no se aprecia la libertad, ya sabemos que se termina actuando como esclavos.

De modo que voy a pedir permiso para insertar mi discurso, porque demuestro en cada uno de los artículos que esta es una ley que no viene a garantizar este valor supremo...

**Sr. Presidente.** – Senadora Morandini, la senadora Bongiorno le solicita una interrupción.

**Sra. Morandini.** – No. Voy a terminar y, después...

**Sr. Presidente.** – La senadora Fellner también, y la senadora Alperovich.

**Sra. Morandini.** – No. Voy a terminar, para que quede claro qué quiero decir.

**Sr. Mayans.** – Queremos saber quién es el santo.

**Sra. Morandini.** – Si se confunde a la prensa con la propaganda, se utiliza el canal público como un instrumento de gobierno, no se garantiza el acceso a la información pública, se cancela la mediación de la prensa en defensa de que el gobierno es el que hace la comunicación. Tengo que reconocer que, desde el primer momento, este gobierno dijo que iba a hacer comunicación directa. Es la mejor confesión de que no cree en la mediación: saco a los medios, porque yo voy a comunicar. Y eso ya está confesando cuál es la concepción que se tiene con relación a los medios y con relación al Estado.

Me impresiona mucho también en estos debates la ciudadanía, que es el gran convidado de piedra, que es el que debe controlar a los me-

dios. Ojalá pudiéramos utilizar los medios públicos, no para que se nos descalifique, porque ustedes tienen razón, hay libertad de decir en nuestro país, pero hay miedo de opinar. ¿Quién tiene ganas de opinar para verse ridiculizado, burlado, ofendido, en todos los canales y en todos los diarios, que cada vez son más los que están mantenidos por la pauta oficial.

**Sr. Fernández.** – ¡No!

–Varios señores senadores hablan a la vez.

**Sra. Morandini.** – A veces, escucho la otra gran confusión. El Estado tiene la fuerza pública.

Los medios privados no la tienen. Si se confunde prensa con propaganda, si se confunde empresa con prensa, entonces todo lo que se haga será consecuencia de esa concepción y, ahí, sí, tiene razón la senadora por Jujuy en el sentido de que estamos hablando de cosas diferentes. (*Aplausos.*)

**Sr. Mayans.** – Queremos saber el nombre del santo.

**Sr. Presidente.** – Senadora Fellner, senadora Bongiorno y senadora Alperovich.

**Sra. Fellner.** – Gracias, señor presidente.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

**Sr. Presidente.** – Bueno, entonces le vamos a dar la palabra al senador Rodríguez Saá.

**Sra. Fellner.** – Pero he sido aludida, señor presidente. Perdóneme, pero he sido aludida un montón de veces. He atendido con respeto. Tengo la palabra, en este momento.

**Sr. Presidente.** – No. Senadora Fellner, está fuera de orden. Si alguien le permite una interrupción, usted puede hacer uso de la palabra. Tenemos una lista de oradores consensuada.

Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá. Por favor, comience.

**Sra. Fellner.** – ¿Me permite una interrupción, senador?

**Sr. Presidente.** – Senador Rodríguez Saá, le solicitan una interrupción.

**Sr. Rodríguez Saá.** – Muy bien. Le pido que sea breve.

**Sra. Fellner.** – Seré muy breve, senador. La verdad es que quiero contestar una serie de cosas. Pero me ha dejado tranquila la senadora, a la cual le tengo el mayor de los respetos. Ella



lee las versiones taquigráficas. Entonces, va a leer que cuando hablé de *La Voz del Interior* simplemente me referí a ella porque es una persona de Córdoba y conoce perfectamente, porque proviene de los medios—ella es periodista y todos lo sabemos—, cuál es la situación de *La Voz del Interior* con respecto a *Clarín* y *La Nación*. Simplemente eso. Y, como ella dice que lee las versiones taquigráficas—y estoy segura de que así lo hace—, me quedo tranquila.

**Sr. Presidente.** — Continúa en el uso de la palabra el senador Rodríguez Saá.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Voy a procurar hablar sin pasiones y sin traer al recinto cuestiones personales.

—Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta provisional del Honorable Senado, senadora Beatriz Rojkes de Alperovich.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Nosotros somos víctimas del más grande ninguneo de la prensa.

—Exhibe una tablet con un gráfico comparativo.

**Sr. Rodríguez Saá.** — No tengo ninguna obligación de defender a *Clarín* ni a *La Nación*. Ésta es la presencia de la prensa en la elección del 14 de agosto: Duhalde, Cristina, Alfonsín, Binner, Carrió, Altamira, la candidata del partido de Pino Solanas y Alberto, del partido al que pertenezco, con 3,5.

Lo que voy a decir está exento de favoritismos por parte de la prensa. Cuando tratamos la Ley de Medios, uno de los planteos más fuertes que realicé fue el de la violación del artículo 32 de la Constitución. Este artículo, como bien se ha dicho hoy acá, fue una imposición de la provincia de Buenos Aires para reincorporarse. Se había formado la Confederación Argentina y Buenos Aires estaba afuera; se incorporó en la reforma de 1860.

Aunque han pasado muchos años, el valor enorme que tiene esta presencia responde a que, entre los miembros informantes que justificaron esta prohibición única en el mundo a nivel constitucional —la Constitución prohíbe que el Estado federal se meta en los temas de la imprenta, restrinja o legisle de cualquier forma sobre el tema de la imprenta; y se está refiriendo, por supuesto, a la imprenta en el sentido amplio de la libertad de expresión—, se

encontraban nada más y nada menos que Mitre, Vélez Sarsfield, Mármol, Obligado y Sarmiento. La calidad, el talento, el patriotismo de los que se expresaron en esa convención constituyente tiene una enorme importancia.

Cité también en aquella oportunidad el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que el senador Romero ya había leído, y yo, en esa oportunidad, lo volví a leer. Hice alusión a que el paso siguiente —cuando habla de que se debe evitar el monopolio, tanto público, privado, como estatal— era Papel Prensa. Pensé que iba a pasar una semana, o diez días, y fue un poco más. Pero estamos tratando el mismo tema.

La otra parte que queda para violar es el artículo 32 —o considerarlo como un adorno por haber transcurrido ciento cincuenta años— de la Constitución, que nos prohíbe legislar sobre este tema. Y, como dijo Romero —lo voy a citar, porque me pareció muy bien—, la mejor forma de proteger la libertad de prensa es no legislar sobre ella, es dejarla, simple y llanamente.

Una preocupación enorme he visto hoy por detallar las atrocidades que se han hecho en Papel Prensa en los últimos años. Ahora bien, el monopolio privado bien que ejerció antes, con Papel Prensa, el control de los medios chicos del interior; controló, compró, se apoderó, creció, tuvo canales de televisión y se transformó en un tremendo monopolio que se basó en Papel Prensa, de origen espurio, según una denuncia que formuló el gobierno nacional. Pero esto no justifica que pasemos a otra forma de actuar.

Éste es un problema de una empresa privada monopólica a la que comparto que hay que aplicar la ley de monopolio.

En este momento justamente no existe ningún problema con el papel. El importado puesto en el diario cuesta, pesos más o pesos menos, de acuerdo al momento, lo mismo que el de Papel Prensa. La diferencia es que Papel Prensa durante 20 años vendió a *Clarín* y a *La Nación* a pagar en 48 meses, por ejemplo. Y los pequeños diarios del interior, con un cupo reducido, teníamos que pagar el papel contado y por anticipado, lo cual es muy diferente.

Pero eso ya se hizo. El atropello ya se hizo.

Y el senador Fernández reconoció, refiriéndose a una de las alusiones que había hecho el

senador Sanz, que uno de los representantes del gobierno al que pertenece era parte de *Clarín*. Si pusieron un representante, aparte de *Clarín*, en Papel Prensa, fue responsabilidad de quienes lo hicieron, no nuestra.

Nosotros no venimos a defender a *Clarín*, ni a *La Nación*, ni a los accionistas de Papel Prensa. Venimos a plantear que esta ley viola el artículo 32 de la Constitución, porque reglamenta formas del ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de imprenta. Ahora habrá que volver a inscribirse, pedir los cupos y, en forma anticipada, pasar un formulario; todos mecanismos que, como se contó, pueden ser usados –o no– para hacer controles. Y eso es lo que la ley trata de evitar.

¿Por qué pusieron en la provincia de Buenos Aires este artículo? Porque lo que quedaba a la provincia de Buenos Aires, incorporándose a la Confederación Argentina, era el ejercicio de la libertad de expresión para poder protestar, decir, pensar, criticar, proponer, etcétera.

**Sr. Fernández.** – No se incorpora a la Confederación. Las dos forman la Nación.

**Sr. Rodríguez Saá.** – Nosotros pensamos que es tan malo el monopolio privado como el estatal. Creemos que es muy noble y estamos de acuerdo con que se garantice a la pluralidad de medios el acceso al papel, que hoy está garantizado.

Tomé conocimiento hace unas horas, cuando lo mencionó el senador Sanz, del despacho de la Unión Cívica Radical. Nos sacaron de la Comisión de Medios, no podemos hacer un dictamen en minoría. El senador Sanz dijo que era el único dictamen. Y sí, va a ser siempre el único si –lamentablemente para nosotros– no podemos estar en las comisiones.

Pero debo reconocer que es un muy buen trabajo. Personalmente lo acompaño. No lo hemos tratado en el interbloqueo y no puedo hablar en su nombre, pero me parece que es una muy buena solución que tiene el mismo objetivo que persiguen, pero sin violentar la libertad de expresión, sin poner condiciones. Dice que el Estado debe garantizar estas cosas.

Por último y para cerrar, creo que la libertad tenemos que protegerla. Es peligroso que quede en manos de un funcionario, cualquiera sea él, de cualquier gobierno –no me estoy refiriendo a

ninguno de este gobierno ni a este gobierno en particular–, la decisión de proveer o no de papel de diario a los periódicos para que expresen sus ideas. Facilitar o no facilitar.

En este momento está absolutamente en el mercado, se ha logrado un equilibrio por las razones que también se han expresado. Hoy el papel de diario se utiliza menos; hay fábricas en el mundo que han cerrado, entonces los precios son accesibles.

En consecuencia, nos parece que pasa lo que sucedía ayer. ¿Cómo una buena ley podía llevar a las protestas callejeras? Es porque se estaban mezclando dos temas. Acá hay una pelea entre quienes eran amigos y se pelearon –porque Magnetto cenaba en Olivos y ayudó a llegar al primer gobierno...–

**Sr. Menem.** – Perdón: ¿en qué época?

**Sr. Rodríguez Saá.** – Perdón, tiene razón, senador Menem. Estoy hablando de los gobiernos del doctor Néstor Kirchner y de la señora Cristina Fernández de Kirchner. Perdón, no sé si en el de la señora Fernández de Kirchner; en el de Néstor Kirchner.

Estamos hablando de la época de Fernández como jefe de Gabinete. El otro, no el senador; Alberto Fernández. (*Risas.*)

**Sr. Fernández.** – El bueno vino después. (*Risas.*)

**Sr. Rodríguez Saá.** – La calificación del otro corre por su cuenta.

En consecuencia, me parece que en ese debate, esa pelea, todos hemos tratado de separarnos. Acá se trata de votar por la libertad. Nosotros vamos a votar en forma negativa el proyecto porque consideramos que se afecta la libertad. Y estamos dispuestos a sancionar las normas que se crean necesarias para garantizar toda la libertad de expresión.

Por otra parte, espero que en la empresa Papel Prensa, como en Aerolíneas Argentinas, se cuide cada peso de los argentinos, porque es muy preocupante que se gasten algunos millones en Papel Prensa, que está mal, y 2.800 millones o 3.000 millones en Aerolíneas, cuando ni siquiera hemos podido tener informes claros de cómo son los gastos, que son muchísimos y enormes.

No nos metemos en la pelea que tienen con el señor Magnetto. Por lo menos a mí no me comprende, ni a ninguno de los integrantes de

nuestro bloque. Sí defendemos la libertad de prensa, la libertad de expresión y el libre acceso de todos los medios –de los más pequeños con más razón– al insumo del papel, imprescindible para poder ejercer la libertad.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Naidenoff.

**Sr. Petcoff Naidenoff.** – Señora presidenta: creo que estamos tratando un proyecto que nos da la oportunidad de debatir en el día de hoy uno de los temas más importantes que hacen al Estado de derecho y fundamentalmente a la libertad, entendida ésta en el sentido amplio como precondition de la libertad de expresión y de la libertad de prensa.

La función primordial de la democracia es asegurar la libertad de los individuos, principalmente resguardarla de la prepotencia del Estado. Es un requisito básico no solamente para garantizar la discusión pública, sino también para que los ciudadanos ejerzan y defiendan sus derechos políticos fundamentales. Esto quiere decir que la democracia descansa en la libertad. Y en cuanto al tema que se trata, nos sobran razones para entender que la libertad de prensa es uno de los pilares fundamentales de la propia democracia, del Estado democrático.

Entrando al proyecto en consideración, quiero decir que, de sus propias fundamentaciones, se desprende claramente que la base de sustentación –independientemente de tratar de lograr el acceso igualitario de este insumo por parte de todos los medios gráficos del país– pasa por la erradicación del monopolio privado. Concretamente, el mensaje expresa que la palabra impresa es un mecanismo de debate, de interacción y diálogo; un lugar de encuentro con otros ciudadanos. Por lo tanto, es un espacio que no puede ser cercenado, manipulado o monopolizado.

Podemos compartir que no es bueno que un insumo de estas características se encuentre absolutamente concentrado. ¡Cómo no! Lo compartimos. El inconveniente se da en que los buenos oficios que se desprenden de la fundamentación nada tienen que ver con el fin último que contiene el propio proyecto de ley, fundamentalmente porque vamos camino del monopolio privado a un monopolio estatal en el manejo del insumo del papel. Para eso, quiero analizar específicamente un solo artículo; quiero

referirme a un artículo porque la referencia a las cuestiones federales del artículo 32 de la Constitución Nacional ya fue expuesta por el miembro informante y por otros señores senadores.

Primero, quiero remarcar que la declaración de interés público de una actividad, tal como lo establece el proyecto en su artículo 1º, importa el sometimiento a un régimen particular regido por el derecho público. Ahora bien, el sometimiento a un régimen particular en el marco del derecho público no priva de la tutela constitucional. Esto implica que si nosotros creamos una legislación enmarcada en el derecho público, necesariamente debe encuadrarse en los parámetros de los principios, derechos y garantías que establece la Constitución Nacional.

Si nosotros leemos con detenimiento este artículo 41, ¿qué es lo que observamos? Que no se satisfacen tales extremos; que ponen en duda los extremos o los pilares constitucionales que debemos supuestamente sustentar. ¿Qué dice este artículo?: “Cuando los fondos necesarios para las inversiones previstas en el artículo anterior sean provistos en forma más que proporcional por el Estado nacional respecto de otros socios –es decir, cuando para garantizar el acceso igualitario al papel, el Estado nacional decida avanzar con el aporte de fondos respecto de los otros socios–, los derechos políticos adicionales emergentes de dichos aportes de capital serán ejercidos por la Comisión Federal Asesora creada por el artículo 12 de la presente ley”.

Primera cuestión: algunos se preguntarán por qué hago referencia a estas cosas. Hago referencia a estas cosas porque estamos tratando la declaración de interés público del papel que se referencia con Papel Prensa. Y Papel Prensa es una sociedad anónima que se rige en nuestro derecho por la ley 19.550, esto es, la Ley de Sociedades Comerciales. A poco que se evidencia este precepto, nos damos cuenta de que esto es un acto arbitrario por discriminación, porque sustrae a la empresa del régimen común de la Ley de Sociedades Comerciales y la somete a un esquema absolutamente diferenciado de capitalización, el que redundará, en definitiva, en la nulificación de los derechos políticos del resto de los accionistas. Esto lo hace –reitero– bajo el pretexto de calificar de interés público la fabricación, la distribución y la comercialización de la pasta celulosa y papel para diarios.

Debe quedar en claro que en este contexto de la ley 19.550, para modificar el estado accionario se necesita indefectiblemente el consentimiento de los propios accionistas en el marco de la asamblea, que es la que rige la vida y el destino de toda sociedad comercial. Que quede claro: ¿qué es lo que queda en evidencia con esto? El gobierno utiliza la figura del interés público como un mecanismo para traspasar al dominio público patrimonio particular en omisión a las previsiones contempladas por la única figura prevista a tales fines y efectos, que es la expropiación. Uno puede estar de acuerdo con la expropiación o no, pero el mecanismo de apropiación de patrimonio particular en manos del Estado es la expropiación.

Algunos se preguntarán qué tiene que ver el interés público con que el Estado termine manejando monopólicamente y apoderándose de la propia empresa, de Papel Prensa. Es simple, esto se desprende del segundo párrafo del artículo 41. Miren lo que dice este artículo: “Sin perjuicio de lo anterior, los derechos patrimoniales emergentes de los citados aportes forman parte de la participación accionaria del Estado nacional en Papel Prensa S. A. [cuando el Estado decide aportar e incrementar el paquete accionario], que se ve acrecentada eventualmente mediante este mecanismo”. Es decir, a medida que el Estado invierte, genera un mecanismo de acrecentamiento del paquete accionario en desmedro de los accionistas minoritarios. Entonces, éste es un novedoso mecanismo del gobierno para ampliar sus redes de poder e influencia.

Cuando se discutía Aerolíneas Argentinas, nos quedamos a mitad de camino: con una expropiación, sin balances; con un Estado que se está haciendo cargo de un grupo privado, pero la cosa está en el aire. Sin embargo, esto es algo absolutamente novedoso que implementa el gobierno y que, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, constituye un mensaje preocupante no solamente para Papel Prensa sino también para todas las sociedades donde el Estado es accionista. Creo que el Estado es accionista en cuarenta y dos empresas. ¿Qué nos permite este mecanismo? Con esta participación accionaria, este mecanismo nos permite que estos derechos patrimoniales se traspasen al dominio público evitando –reitero– la propia expropiación.

Decía la miembro informante del oficialismo que quien controla el papel de diario es el que controla la información. Por eso, nosotros pensamos, en esta materia, “ni monopolio estatal ni monopolio privado”. En esta materia, fundamentalmente, libertad, impulso, participación del Estado, competitividad, freno a la importación, arancel cero –si es posible–, acceso para todos pero con nuevas reglas de juego.

¿Por qué hay que evitar los monopolios? Por lo que dice el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el sentido de que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos. Por otro lado, fíjense lo perverso del proyecto, porque no solamente vamos camino al monopolio del Estado en cuanto a un insumo estratégico sino que además este proyecto no prohíbe la fijación de aranceles, tasas o restricciones sobre la importación de papel.

Si al monopolio estatal le sumamos la discrecionalidad en la fijación de cuotas y aranceles de importación, que estará en la actualidad en manos de funcionarios como Guillermo Moreno, la capacidad de presión que tendrá el gobierno sobre los medios gráficos –que dependen de las decisiones discrecionales y del favoritismo– será completamente riesgosa para la libertad de prensa. Nosotros tenemos otra mirada, como les decíamos. Si pretendemos defender la libertad de prensa, el camino es la erradicación de los monopolios.

Al hablar de Papel Prensa y de los accionistas, tenemos que hacer referencia a *La Nación* y a *Clarín*. A ese grupo se lo ha calificado como los coordinadores de la oposición. Así se ha dicho en el día de ayer: que fueron los coordinadores de la campaña de la propia oposición. Si a este grupo que coordinó la campaña le fue tan mal –porque hay que ver los resultados de la oposición–, ¿por qué el gobierno insiste en esta línea? ¿Por qué vamos camino al monopolio del Estado? ¿Por qué vamos en ese camino cuando se vulneran cláusulas constitucionales que, seguramente, será el tribunal supremo el que tendrá que resolverlas?

Yo tengo una mirada al respecto. Creo que para analizar por qué el gobierno avanza sin miramientos con respecto a Papel Prensa, tenemos



que detenernos a contextualizar el modelo de poder que hoy impera en la Argentina. Éste es un modelo que, históricamente, se ha sustentado en la confrontación; y para confrontar se necesitan enemigos. No hace mucho tiempo, le tocó el turno a la Iglesia; después, fue el campo; luego, los partidos políticos; después, vino el turno de la prensa, y ahora parece, por lo que estamos viendo, que les tocará a los gremios.

Pero si tenemos que analizar este contexto para un gobierno al que no le gusta la crítica, que descalifica, que confronta y que aspira fundamentalmente al debilitamiento del debate público para construir una sola voz, yo quiero recordar algunos manejos de este gobierno democrático con la prensa en la Argentina. Me parece que algunos temas son importantes para entender por qué motivo, a pesar de tantas inconsistencias, se avanza en esta línea.

Hay un informe de la libertad de expresión en la Argentina de 2006 que describió la situación de la libertad de expresión y de los medios de prensa en nuestro país. El informe es del Centro de Estudios Legales y Sociales. Este informe se refiere a las decisiones que provocaron los alejamientos de José Elíaschev y Víctor Hugo Morales de Radio Nacional y de Canal 7, respectivamente. Quedó una inexplicable sensación de arbitrariedad y falta de transparencia sobre las condiciones de la contratación y de los ceses; no se permitió que temas de tamaño profundidad fueran analizados como se debe.

En 2007, FOPEA indica que la presidenta califica de cuasi mafioso a caricaturista. Cristina Fernández de Kirchner calificó una caricatura de Hermenegildo Sábat como un mensaje cuasi mafioso. No voy a describir algunas cuestiones que tienen que ver con algunas provincias, sino que me voy a referir concretamente al gobierno nacional.

A continuación, levantan el programa de Nelson Castro. Su contrato con Radio Del Plata, propiedad del grupo Electroingeniería, terminaba a fines de 2009. Las razones fueron que *Los caminos* de Nelson Castro y Radio Del Plata tienen que ir por carriles separados. Asimismo, podemos hablar de carteles anónimos contra periodistas en la Ciudad de Buenos Aires; de arbitraria clausura de dos puestos de diarios en el Mercado Central de Buenos Aires; de ataques a periodistas en afiches callejeros en

Buenos Aires, a quienes se los intentó vincular con la última dictadura militar, y de bloqueos a las plantas impresoras de *Clarín* y de *La Nación*.

Sobre el mapa de la Red de Medios, el senador Cano ha hecho referencia a cómo se distribuye la publicidad oficial en la Argentina. Con relación a la editorial Perfil, podemos mencionar el incumplimiento del fallo de la Corte que ordena el cese inmediato de la política discriminatoria que se lleva a cabo contra la demandante, consistente en excluir de la pauta publicitaria oficial a las revistas *Fortuna* y *Noticias*.

Hay un fallo de la Corte que el gobierno no cumple. No estamos hablando del fallo del Superior Tribunal de alguna provincia, es la corte suprema. El gobierno omite cumplir un fallo de la Corte para no discriminar en la publicidad oficial.

Vamos a avanzar con algunos nuevos casos. En el día de la fecha, el juez federal tributario Carlos Folco dispuso la inhibición general de bienes del diario *La Nación*. El magistrado tomó la decisión a pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos, aunque admitió que el organismo nunca informó que existe un fallo de la Corte que le prohíbe exigirles a 23 medios periodísticos el pago de una supuesta deuda impositiva. Para que se tenga idea, la AFIP le reclama a *La Nación* y a otros 23 medios del país una deuda aproximada a los 500 millones de pesos en concepto de IVA. Pero como las empresas discuten la legitimidad de su reclamo, la Corte Suprema dictó en 2009 una medida cautelar que tiene vigencia hasta tanto se pronuncie sobre las cuestiones de fondo. Así, rige un Estado de derecho, y hasta tanto no se modifique esta cautelar, se la tiene que aplicar. Por lo menos, en un Estado de derecho como el que nosotros interpretamos.

Si queremos sumar nuevos casos, podemos mencionar lo ocurrido en Cablevisión, cuando se llevó a cabo un allanamiento con el acompañamiento de las fuerzas de Gendarmería, un caso inédito. ¿Queremos relacionarlo con otros casos? Oportunamente, el allanamiento de 200 inspectores de la AFIP en la sede del diario *Clarín*. Y hay que decir las cosas como son, porque ahora les toca a *Clarín* y a *La Nación*, pero, para nosotros, le toca a la libertad de prensa en la Argentina. Éstas son las cosas que nosotros defendemos.

—Ocupa la Presidencia del Honorable Senado el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

**Sr. Petcoff Naidenoff.** — Este gobierno estigmatiza a quien lo descalifica y se maneja de manera discrecional. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué demoniza a la prensa? Fundamentalmente, porque le molesta la crítica, le molesta el disenso; intenta imponer una sola voz.

Y cuando hablo de que “le molesta a la prensa” no me refiero a *Clarín* y a *La Nación*; hablo de la prensa como parte fundamental del sistema democrático, sin nombres ni apellidos. Y la prensa, señor presidente, debe ser libre. La prensa libre, nos guste o no, es un síntoma de un sistema democrático sano.

Claro que desde el ámbito político podemos no estar de acuerdo. Nos pueden gustar los contenidos, las expresiones de determinados periodistas o la tapa de un medio, o no; pero lo que no podemos es interferir en su derecho de expresarse o intentar silenciarlos por vías directas o indirectas.

Señor presidente: en materia de libertad de prensa, el Estado debe regular no para controlar sino para ampliar la brecha de la libertad. La prensa libre es la que critica, investiga y cuestiona. De lo contrario, no es prensa libre.

Este proyecto no establece un interés público sino un interés gubernamental de silenciamiento y de control informativo dentro de un modelo de poder que tiende a la construcción de una sola voz.

Para terminar, hace muchos años, aproximadamente unos sesenta, en un contexto de país absolutamente diferente, cuando mediante la ley 14.021 se dispuso la expropiación del diario *La Prensa*, Arturo Frondizi, quien actuaba como miembro informante de nuestra bancada, decía que ningún partido político —ni el peronismo, ni el radicalismo, ni el conservadurismo— puede identificarse como todo el pueblo, porque éste es el que debe resolver, en definitiva, el criterio a seguir en materia de gobierno. Si alguien debe decidir si *La Prensa* se leerá o no, no debe ser un Poder Ejecutivo totalitario ni un Congreso de tipo totalitario. Quien debe decidir es el mismo pueblo a través del examen de la orientación, de las informaciones y de los demás aspectos que ese diario refleja.

Frondizi también se preguntaba por qué nosotros defendemos la libertad de prensa. Lo hemos dicho y lo repetiremos cuantas veces haga falta: la defendemos porque no existe desarrollo posible de la democracia sin libertad de prensa. Nosotros defendemos la libertad de prensa porque creemos en la fuerza de la opinión pública y ésta se forma, también, a través de la opinión de los diarios independientes. Nosotros defendemos la libertad de prensa porque es uno de los contralores de la actividad de los funcionarios públicos y, sobre todas las cosas, porque la libertad de prensa es un freno para la inmoralidad en la política de un país.

Sesenta años después de pronunciado este discurso —en otro contexto, claro está—, hoy podemos volver a decir que el radicalismo no defiende a ningún grupo en particular sino que, en palabras de Frondizi, aceptamos el debate de ideas, que es lo democrático, y no admitimos la violencia para callar al contradictor, que es lo totalitario. Nosotros defendemos el derecho de todos los diarios y de todos los habitantes del país a decir su verdad, para que después el pueblo, democráticamente, juzgue cuál es la mejor verdad para el futuro de la República.

**Sr. Presidente.** — Muchas gracias senador.

Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

**Sr. Pichetto.** — Señor presidente: en primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a los senadores Parrilli, Labado, Riofrio, Cabral, Mansilla, Iturrez de Cappellini, Guastavino, Irrazabal, Aguirre, Corradi, Barrionuevo, Godoy, Corregido y Filmus, porque entendieron y comprendieron la necesidad de que pudiéramos acelerar el tratamiento de este tema. A ellos les hubiera gustado poder hablar en el recinto sobre este tema a fin de dar su opinión, pero muchos de ellos van a hacer la inserción de lo que iban a manifestar. Me importa mucho valorizar el gesto y, además, expresar que querían hablar sobre esta cuestión.

Quiero ser sincero, no quiero ser hiriente. He escuchado con mucha atención al orador preopinante, senador Naidenoff. Él expresa una idea vieja de este liberalismo, de la libertad de la República, que creo que, además, no es coherente ni coincidente con un partido y con la historia de un partido nacional como la Unión Cívica Radical. Es una idea más próxima al pensamiento Pro; al pensamiento conservador

de la Nación. Una libertad que solamente la pueden ejercer los poderosos. A él no le preocupa lo que pasaba antes: le preocupa lo que puede pasar en el futuro. Antes, el modelo monopólico concentraba la comercialización del papel. Esa concentración no le preocupaba, no le preocupa. No le preocupa, indudablemente, como tampoco le preocupó, en su momento, el debate de la Ley de Medios Audiovisuales.

Quiero sostener que esto forma parte de una política que la presidenta ha iniciado para democratizar los medios audiovisuales, primero, y la accesibilidad de papel para todos los medios del interior. Todos los que somos del interior sabemos de qué se trata. Durante mucho tiempo, el acceso al papel prensa y las limitaciones, el cupo que existía, el valor diferenciado sirvieron como una política no solamente para ahogar a los pequeños medios sino también—como lo fue la compra de los cables de televisión a través del fútbol— como un mecanismo de concentración. Porque muchos de estos medios que se oponían en el año 77 y en el 78, cuando se genera el modelo de Papel Prensa en una concentración de los dos grandes medios, en ese momento, protestaban. Tal el caso de *La Voz del Interior*. La senadora Morandini, de la provincia de Córdoba, tiene que recordar este hecho.

*La Voz del Interior* era un medio del interior; una expresión genuina de la provincia de Córdoba; de esa provincia mediterránea muy rica cultural e intelectualmente, que levantó de manera crítica la voz cuando se constituye esta empresa Papel Prensa de la mano del poder militar de ese tiempo—tampoco hay que olvidarlo— con el aporte durante diez años de todos los medios gráficos. Esto se traduce en una fuerte concentración. Después—fíjese la paradoja de este proceso de concentración mediática comunicacional, audiovisual y, también, de prensa gráfica—, *La Voz del Interior* termina siendo comprada, adquirida, por *Clarín*, el principal diario de la Argentina. Lo mismo ocurrió con un medio importante de la provincia de Mendoza, el principal medio gráfico de Mendoza: el diario *Los Andes*, diario de trayectoria también, con antigüedad, identidad y permanencia en esa provincia, que terminó siendo adquirido por *Clarín*.

Eso también ocurrió a lo largo y a lo ancho del país con los cables de televisión. En las localidades donde había un cable que no tenía

fútbol, ese cable perdía toda la audiencia. En el proceso de concentración audiovisual, esto permitió, también, la adquisición de casi todos los cables del interior del país.

Ésta fue una política. A esta política se le responde con la decisión, el coraje y la inteligencia del ex presidente y de la presidenta con una política de democratización de los medios audiovisuales que dimos en el debate de la Ley de Medios y con una política de accesibilidad, de igualdad, de equidad para todos los medios gráficos, con esta ley.

Lo que también quiero dejar son algunas clarificaciones que sirven para contestar lo que se ha publicado en estos últimos días respecto de que esta es una ley exprés; de que la hemos votado rápidamente. Esta ley tiene un año y ocho meses en el Parlamento argentino. Fue enviada por la presidenta allá por el mes de junio del año 2010. La oposición hizo uso correcto de su mayoría. Estaba en contra. No quiso habilitar este tratamiento. Hubo un debate importante en el ámbito de la Cámara de Diputados, con audiencias públicas; un debate que se viene dando, también, a nivel público. Y ahora, que hemos recuperado la mayoría—así funcionan las reglas del sistema democrático; nadie tiene que quejarse; yo no me quejo; simplemente, estoy haciendo una descripción de hechos y de acontecimientos que hemos vivido recientemente—, el oficialismo decide retomar estas leyes que estaban bloqueadas, que estaban paradas, y decide avanzar para el tratamiento y sancionarlas. Tratamiento exprés no hay ni lo ha habido. Todo el mundo sabe de qué se trata esto.

Yo quiero hacer un homenaje esta tarde a un hombre que ha fallecido, pero que fue alguien que predicó en el desierto. Tal vez, este debate no estaba maduro. Fue un periodista importante que construyó un medio económico financiero, que se llamó Julio Ramos. De hecho, creo que fue el primero que puso el acento en esta cuestión, en la comercialización del papel, en el monopolio, en lo que significaba la exclusión de mercado vía acciones de esta naturaleza. Estos hechos también fueron denunciados por periodistas de trayectoria. Jorge Lanata lo denunció en su momento y, también, Fontevecchia.

—Murmillos en las galerías.

**Sr. Pichetto.** – Hay mucho ruido arriba, presidente...

**Sr. Presidente.** – Por favor, silencio.

**Sr. Pichetto.** – ...y me pierdo. Quiero tratar de concluir rápidamente estas reflexiones.

Lo que quiero decir es que éste no es un debate nuevo en la Argentina. Éste es un tema que democratiza el principal insumo para la información gráfica. Del mismo modo lo hicimos en su momento con la Ley de Medios. Es una tarea de continuidad de este gobierno, que tiene como finalidad mayor democracia, mayor participación, mayor equidad, mayor accesibilidad para que todos los medios puedan publicar sus ideas. Por lo tanto, contradice también este concepto de que nosotros venimos a limitar la libertad de prensa, etcétera.

Éste es el fundamento principal. Nosotros vamos a votar positivamente esta ley, presidente. Por eso, ratifico la posición de la miembro informante y de los demás senadores, y le pido que ponga el proyecto a votación, en general y en particular, para que podamos votar en el recinto.

**Sr. Presidente.** – Se van a votar los pedidos de inserción.

–Se practica la votación.

**Sr. Presidente.** – Aprobados.<sup>1</sup>

Entendiendo que hay dos despachos: uno de mayoría y uno de minoría.

Vamos a proceder a una sola votación, en general y en particular, del despacho de la mayoría.

**Sr. Pérez Alsina.** – Pido autorización para abstenerme.

**Sr. Presidente.** – Está autorizado.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

**Sr. Secretario.** – Se registran 41 votos por la afirmativa, 26 por la negativa y una abstención.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.<sup>1</sup>

**Sr. Presidente.** – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.<sup>2</sup>

## 2

## ACUERDOS

**Sr. Pichetto.** – Antes de entrar en el último tema, solicito que incorporemos los pliegos de los ascensos militares para que les demos lectura y podamos someterlos a votación.

**Sr. Presidente.** – Ponemos en consideración del cuerpo la incorporación de los pliegos.

–Se practica la votación.

**Sr. Presidente.** – Aprobado.

Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario (Estrada).** – En primer término, vamos a dar lectura de los dictámenes de Comisión referidos a los ascensos del personal militar superior del Ejército.

El Senado de la Nación resuelve prestar su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2011, al personal militar superior del Ejército que a continuación se detalla: general de Brigada, don Carlos Ignacio Barchuk.

Coroneles del Cuerpo de Comando. Armas: don Alberto Alejandro Alfonso Ensínck, don José Luis Figueroa, don Marcelo Carlos Gutiérrez, don Gustavo Enrique Vázquez, don Alejandro Luis López.

Cuerpo profesional. Médicos: don Juan Carlos Adjigogovic.

Tenientes coroneles. Cuerpo de Comando. Armas: don Enrique Marcelo Manuel Pando, don Marcelo Adrián Calvo, don Miguel Ángel Juárez, don Néstor Raúl Sánchez, don Aníbal Luis Intini, don Antonio Andrés García, don Martín Lluch, don Mariano Néstor del Sagrado Corazón Castelli, don Pablo Martín Bruno Servat, don Marcelo Oscar Pollicino, don Gabriel Aníbal Camilli, don Rafael Víctor Guerrero, don Pablo Eugenio Chort, don Adalberto Enrique Zucherino, don Sergio Daniel Salazar, don Gabriel Adolfo Pietronave, don José Antonio Álvarez Escudero, don José María Antonio Ivaldi, don Sergio Ramón Forconi, don Horacio Alberto Sampietro, don Hugo Roberto Fernández, don Claudio Fabián Roldán, don Fernando José Isla, don Guillermo Eugenio Vergara, don Gustavo Walter Bianco, don José Carlos Ramón Bernasconi, don Luis María Garro, don Alejandro Gustavo Miguel, don Gustavo

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.

<sup>2</sup> Ver el Apéndice.



II  
ACTAS DE VOTACIÓN



*Senado de la Nación*

*Votación Nominal*

129º Período Legislativo - Extraordinario - 2º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN, POR EL CUAL SE DECLARA DE INTERÉS PÚBLICO LA FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PASTA CELULOSA Y DE PAPEL PARA DIARIOS

ORDEN DEL DÍA 852 Y ANEXO  
(CD-85/11)

VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: Dictamen de mayoría

Acta N°: 1	Fecha: 22-12-11	Hora: 18:31
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: BOUDOU, Amado	Desempate: NO	

Presentes Identificados:	68	Votos afirmativos:	41
Presentes No Identificados:	--	Votos Negativos:	26
Total Presentes:	68	Abstenciones:	1
Ausentes:	4		
Votos Afirmativos Necesarios:	35	<b>RESULTADO de la VOTACIÓN</b>	<b>AFIRMATIVA</b>



*Borsani*  
LUIS GUSTAVO BORSANI  
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO  
H. SENADO DE LA NACION



*Senado de la Nación*

### Votación Nominal

129° Periodo Legislativo - Extraordinario - 2° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN, POR EL CUAL SE DECLARA DE INTERÉS PÚBLICO LA FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PASTA CELULOSA Y DE PAPEL PARA DIARIOS

ORDEN DEL DÍA 852 Y ANEXO  
(CD-85/11)

#### VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: Dictamen de mayoría

Acta N°: 1

Fecha: 22-12-11

Hora: 18:31

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: BOUDOU, Amado

Desempeño: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUIRRE, Hilda Clelia	AFIRMATIVO	LABADO, María Ester	AFIRMATIVO
ARTAZA, Eugenio Justiniano	NEGATIVO	LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO
BARRIONUEVO, Walter Basilio	AFIRMATIVO	LEGUIZAMÓN, María Laura	AFIRMATIVO
BASUALDO, Roberto Gustavo	NEGATIVO	LINARES, Jaime	NEGATIVO
BERMEJO, Rolando Adolfo	AFIRMATIVO	LOPEZ, Osvaldo Ramón	AFIRMATIVO
BIANCALANI, Fabio Darío	AFIRMATIVO	LORES, Horacio	AFIRMATIVO
BLAS, Inés Imelda	AFIRMATIVO	LUNA, Mirtha María Teresita	AFIRMATIVO
BONGIORNO, María José	AFIRMATIVO	MANSILLA, Sergio Francisco	AFIRMATIVO
BORELLO, Marta Teresita	NEGATIVO	MARINO, Juan Carlos	NEGATIVO
CABANCHIK, Samuel Manuel	AFIRMATIVO	MARTINEZ, Alfredo Anselmo	NEGATIVO
CABRAL, Salvador	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Ángel	AFIRMATIVO
CANO, José Manuel	NEGATIVO	MEABE de MATHO, Josefina Angélica	AUSENTE
CASTILLO, Oscar Anibal	NEGATIVO	MENEM, Carlos Saúl	AFIRMATIVO
CIMADEVILLA, Mario Jorge	NEGATIVO	MONLLAU, Blanca María del Valle	NEGATIVO
COLAZO, Mario Jorge	AFIRMATIVO	MONTERO, Laura Gisela	NEGATIVO
CORRADI de BELTRÁN, Ana María	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Rubén	NEGATIVO
CORREGIDO, Elena Mercedes	AFIRMATIVO	MORANDINI, Norma Elena	NEGATIVO
DE LA ROSA, María Graciela	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita	NEGATIVO
DI PERNA, Graciela Agustina	NEGATIVO	NIKISCH, Roy Abelardo	NEGATIVO
DIAZ, María Rosa	AFIRMATIVO	PARRILLI, Nanci María Agustina	AFIRMATIVO
ESCUADERO, Sonia Margarita	NEGATIVO	PEREZ ALSINA, Juan Agustín	ABSTENCIÓN
ESTENSSORO, María Eugenia	NEGATIVO	PERSICO, Daniel Raúl	AFIRMATIVO
FELLNER, Liliana Beatriz	AFIRMATIVO	PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	NEGATIVO
FERNANDEZ, Anibal Domingo	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
FILMUS, Daniel Fernando	AFIRMATIVO	RACHED, Emilio Alberto	AUSENTE
FUENTES, Marcelo Jorge	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	NEGATIVO
GIMENEZ, Sandra Daniela	AFIRMATIVO	RIOFRIO, Marina Raquel	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	NEGATIVO	RODRIGUEZ SAA, Adolfo	NEGATIVO
GODOY, Ruperto Eduardo	AFIRMATIVO	ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.	AFIRMATIVO
GONZALEZ, Pablo Gerardo	AFIRMATIVO	ROLDAN, José María	AFIRMATIVO
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel	AFIRMATIVO	ROMERO, Juan Carlos	NEGATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	RUIZ DÍAZ, Elsa Beatriz	AFIRMATIVO
HIGONET, María de los Angeles	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	NEGATIVO
IRRAZABAL, Juan Manuel	AFIRMATIVO	VERA, Arturo	NEGATIVO
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa	AFIRMATIVO	VERANI, Pablo	AUSENTE
JUEZ, Luis Alfredo	NEGATIVO	VERNA, Carlos Alberto	AUSENTE

### III INSERCIONES

Las inserciones remitidas por los señores senadores a la Dirección General de Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:

1

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA  
ITURREZ DE CAPELLINI

**Fabricación, comercialización y distribución  
de pasta celulosa y de papel de diarios**

**(O.D.-852/11)**

Señor presidente:

Quiero referirme brevemente, adelantando mi voto positivo, a este proyecto de ley, y lo hago teniendo en cuenta tres puntos que me parecen esenciales y son:

*1. La importancia de la libertad de prensa:*

Ya en los albores de nuestra existencia como Nación libre se atribuyó a la prensa un papel político y social de superlativa importancia. Al respecto, basta con recordar el reglamento y el decreto de libertad de imprenta. Piezas jurídicas éstas, de carácter proto-constitucional, dictadas –ambas– en 1811; la primera, por la Junta Grande y la segunda, por el Primer Triunvirato.

Los sucesivos gobiernos intentaron garantizar la libertad de prensa. Principio éste que, a la luz de las consideraciones precedentes, se presenta ya no sólo como un derecho subjetivo fundamental (derivado directamente de la libertad de pensamiento y de expresión), sino también como una de las claves institucionales de la “arquitectura” político-jurídica de la República, a cuyo servicio –desde luego– se encuentra.

*2. La “tensión” entre libertad de prensa y libertad de empresa de prensa:*

Tal como es sabido, la Constitución Nacional alumbrada en 1853/1860 se hizo eco fidedigno de las elevadas ponderaciones que los gobiernos y las asambleas constituyentes precedentes habían tributado a la prensa gráfica. No en vano la nueva norma fundamental consagró la libertad respectiva, en los artículos 14 y 32 de su articulado, entre los demás declaraciones, derechos y garantías.

Por razones de orden ideológico, los constituyentes que protagonizaron aquellas históricas jornadas estaban poseídos por un profundo temor a la censura proveniente del gobierno. Temor éste que, más allá de su inspiración liberal y producto de las circunstancias históricas “autóctonas”, se traducía en una particular reticencia hacia el gobierno federal. He aquí, en definitiva, la explicación del artículo 32, tal como fuera incorporado al plexo constitucional en 1860.

Sin embargo, el paso del tiempo y el rumbo adoptado por los acontecimientos pusieron de manifiesto que las amenazas a la libertad de prensa (así como también

a otras libertades) no necesariamente tenían un origen estatal, gubernamental o político, sino que también podían proceder del sector privado. Quedó planteado, de este modo, la tensión entre libertad de prensa y libertad de empresa de prensa, parafraseándolo al doctor Néstor Pedro Sagüés.

Este conflicto se produce, básicamente, con la desorbitación de la libertad de empresa de prensa y el consecuente ejercicio de la misma en forma abusiva, irregular, desordenada y disfuncional. En otras palabras, cuando la libertad de empresa de prensa (que no es ni más ni menos que un derecho subjetivo de raigambre constitucional y contenido netamente económico) desconoce la superioridad y prevalencia axiológica y normativa de la libertad de prensa, a cuyo servicio debiera encontrarse. Desconocimiento éste que importa la abrogación fáctica de la libertad en cuestión y, con ella, el derribamiento de un pilar fundamental de la organización institucional de nuestra comunidad nacional, que amenaza con descalabrar la República.

Frente a tan preocupante panorama, menester resulta que el Estado intervenga, a fin de volver las cosas a su quicio normal, resguardando así el lugar que toca a cada libertad en el contexto de nuestra organización político-jurídica republicana. De las observaciones precedentes surge con claridad que, en modo alguno debe quedar la libertad de prensa sometida pura y exclusivamente a la “lógica” del “mercado”, esto es: a la dinámica propia de la libre empresa de prensa.

El especialísimo valor que reviste la libertad de prensa, en tanto derecho subjetivo fundamental; así como su extraordinaria relevancia en el diseño institucional de la República, en tanto pieza basal de la misma; compelen al Estado nacional a proveer todo lo que resulte conducente –en cada contexto histórico– al efectivo y eficaz aseguramiento de la libertad en cuestión.

*3. Las empresas de prensa como servicio público*

A la luz de lo expuesto precedentemente, surge con meridiana claridad que todas las actividades económicas que se encuentran vinculadas con la prensa se encuentran atravesadas por diversos intereses públicos de máxima importancia. Dicho esto mismo con otras palabras, el interés público se encuentra profunda e inextirpablemente imbricado en las aludidas empresas.

Atento a ello, cabe categorizar a las actividades económicas de marras como servicio público. Cabe recordar aquí la observación que formulara el doctor Arturo Enrique Sampay en el seno de la Convención Constituyente de 1949, según la cual el servicio público debía ser definido a partir de la presencia de intereses

públicos comprometidos de manera directa en la actividad económico-empresarial de que se trate. Criterio éste de tipo material y, desde luego, realista; el cual, si bien desde una perspectiva eminentemente “privatista” (y, por tanto, diametralmente opuesto, en este aspecto, a la de nuestra Constitución de 1949), también ha sido sostenido por la doctrina estadounidense de las “empresas de utilidad pública”, justificando así la intervención estatal, al menos a los efectos regulatorios de sus respectivas actividades.

#### *Por último*

La iniciativa legal que aquí nos ocupa responde al temperamento recién exployado. Apunta de manera directa y explícita a preservar de manera efectiva la plena vigencia de la libertad de prensa estableciendo, con tan loable finalidad, los límites correspondientes a la libertad de empresa de prensa.

Sin perjuicio de ello, cabe destacar —a fin de conjurar los temores que ciertos discursos “tremendistas” han provocado— que este último derecho (relativo a la empresa) no se ve agraviado por el proyecto de ley en tratamiento. La propuesta de marras se limita a restituirlo a su quicio natural, evitando que su “hipertrofia” conspire contra la libertad de prensa (la cual, como ya ha sido advertido, amén de tratarse de un derecho subjetivo cualitativamente superior, constituye una pieza “clave” del “andamiaje” republicano de nuestro país).

Por lo demás, hay que señalar que el presente proyecto de ley se encuentra completamente “impregnado” de “espíritu democrático”. ¿Qué otra cosa cabría colegir, acaso, del modo en que programa la integración de la comisión bicameral contemplada en el artículo 2º? Idéntico interrogante se puede plantear en relación a la integración de la Comisión Federal Asesora, prevista en el artículo 12. Se trata, sin lugar a dudas, de un proyecto de profunda inspiración democrática, que constituye un “marco regulatorio participativo”, como, de hecho, señala expresamente el artículo 3º.

Todo ello, en definitiva, en aras de garantizar efectivamente la libertad de prensa; entendiendo, en consonancia con nuestros ilustres antecesores, que la misma constituye un derecho fundamental, uno de los pilares de la República y un vehículo indispensable para la elevación cultural y cívica de los ciudadanos.

#### 2

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA  
CORRADI DE BELTRÁN

#### **Fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel de diarios (O.D.-852/11)**

Señor presidente:

Voy a acompañar la aprobación de este proyecto porque considero que el mismo contribuye y asegura

la democratización en el acceso de papel prensa para todos los diarios del país. Comenzamos a sostener nuestra defensa a la libertad de expresión votando a favor de la Ley de Medios hace un tiempo y que lamentablemente en algunas provincias aún no se está aplicando por medidas judiciales que impiden la vigencia de la misma.

Hoy les toca a los medios gráficos y es nuestra tarea contribuir para que la legislación que impulsamos asegure la competitividad y no los monopolios. Las leyes antimonopólicas prohíben y sancionan actos o conductas de personas físicas o legales que limiten, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, así como el acceso al mercado.

En nuestro país sólo unos pocos acceden a los insumos de papel necesarios y adquirirlos por importación resulta inconveniente y más costoso. Esta situación produce desigualdades.

El gobierno nacional ha definido para la Argentina un modelo de inclusión y cada una de las políticas generadas desde el Poder Ejecutivo nacional nos muestra un Estado presente en la sociedad, en el mercado, regulando cada actividad que merece corregir asimetrías.

El presente marco regulatorio participativo tiene como objetivo esencial asegurar para la industria nacional la fabricación, comercialización y distribución regular y confiable de pasta celulosa para papel de diario y de papel para diarios.

Con la declaración de interés público de la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa para papel de diario y de papel para diarios, todos los diarios tendrán la posibilidad de tratamiento igualitario, garantizando que la igualdad en la Argentina sea una realidad concreta, en la cual todos los medios tengan las mismas posibilidades de comunicar libremente en todo el país.

El proyecto elevado tiene como finalidad tutelar los derechos a la información, a la instrucción, a la libre expresión y al trabajo, todo ello en un marco de trato equitativo y digno, y tiene como objetivo esencial asegurar para la industria nacional la fabricación, comercialización y distribución regular y confiable de pasta celulosa y de papel para diarios.

Esta iniciativa se da en el marco de un profundo proceso de democratización de la expresión, que incluye en este aspecto no sólo a los medios audiovisuales, sino también la palabra impresa y el derecho a la información y la construcción de ciudadanía.

Porque considero la defensa a la libertad de expresión como un derecho constitucional, a pesar de que en mi provincia quienes integramos mi partido y la que suscribe estamos vedados o proscritos en los medios de difusión, voy a acompañar el presente proyecto, con la convicción de que es un verdadero aporte a la democratización de los medios de comunicación.



SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA  
ROJKÉS DE ALPEROVICH

**Fabricación, comercialización y distribución  
de pasta celulosa y de papel de diarios**

(O.D.-852/11)

La necesidad de regular la actividad concerniente a la fabricación, comercialización y distribución de la pasta celulosa y de papel para diarios se presenta como válida respuesta no sólo a las necesidades de la sociedad en un momento dado, sino que se exhibe asimismo en correlato con diversas normas de la Constitución Nacional.

Es así que como legisladores tenemos la obligación de remover los impedimentos en el pleno ejercicio de las libertades públicas que se presentan en los tiempos que corren y que se traducen en lesiones de carácter constitucional.

Todos los que estamos en el Senado de la Nación hemos asistido y sufrido en primera persona el silenciamiento en tiempos de dictaduras, todos sabemos de qué hablamos cuando decimos libertad de expresión, derecho a informar y a ser informados, ocultamiento de información, porque junto a la desaparición de personas también desaparecía toda información sobre los hechos.

El marco en que se legisla esta actividad es la tutela de la libre competencia, la no discriminación, el libre acceso a ella y, en respuesta a otras necesidades básicas de la Nación, como son propender a la producción nacional, la asignación eficiente de los recursos y la preservación del medio ambiente.

La discriminación, como resultante del ejercicio de la actividad en un ámbito monopolístico u oligopólico se visualiza cuando, como sucede en la actualidad, uno de los principales escollos que tiene el periodismo independiente para desarrollarse en nuestro país lo constituye la actividad llevada a cabo por la empresa Papel Prensa S.A.

Esta compañía monopolística, que es controlada por el Grupo Clarín y el diario *La Nación*, busca ahogar a aquellos diarios que no forman parte de la corporación mediante continuos aumentos en el precio del papel.

Como no existe otra empresa que produzca este insumo en el país, la única alternativa que tienen los medios independientes es comprar papel en Chile, pero el precio allí está dolarizado y es hasta un 40 % mayor de lo que cotiza en el mercado argentino.

Este esquema que habilita a dos empresas a controlar la producción de papel, que ellas mismas consumen, fue diseñada a sangre y fuego por la última dictadura militar, que buscaba apoyo periodístico para tapar los crímenes de lesa humanidad que se estaban cometiendo.

Quienes ahora hablan de discurso único y de controlar la circulación de ideas saben lo que esto significa.

Hace poco la presidenta de la Nación decía en referencia a este tema:

“Que a confesión de parte, relevo de pruebas, *Clarín* piensa que quien controla Papel Prensa controla la palabra impresa. Quiero en esto coincidir con *Clarín*, claro, quien controla Papel Prensa controla la palabra impresa.

”¿Por qué? Porque Papel Prensa Sociedad Anónima es la única empresa que produce en el país pasta celulosa para fabricar papel de diario, fabrica el papel de diario, lo distribuye y lo comercializa en lo que se conoce en términos económicos y jurídicos como una empresa monopolística integrada verticalmente.

”¿Por qué? Porque va desde la materia prima hasta el insumo básico, pero no solamente produce ese insumo básico sino que además determina a quién le vende, cuánto le vende y a qué precio le vende. Por eso coincido con *Clarín* en que quien controla Papel Prensa controla la palabra impresa en la República Argentina.”

En realidad, los que hoy hablan de que la intención de la actual gestión es la de apropiarse del papel prensa para acallar voces, son los mismos que no dejaron participar a otras voces, aquellos que hoy se desgarran las vestiduras en nombre de la libertad de prensa, son los mismos que cuando todos los derechos humanos fueron brutalmente asaltados en la Argentina, fueron cómplices de quienes la asaltaron... fueron cómplices de los que acallaron voces bajo el imperio del odio y el miedo. Pero como se presenta la discriminación a la que se encuentran sujetos los otros medios gráficos, los que no son controlados por el monopolio.

Por de pronto, el concepto de discriminación se visualiza claramente en un conocido fallo de la Corte Suprema, en el que se puntualizó que no sólo debe evitar el gobierno acciones intencional o exclusivamente orientadas a limitar el ejercicio de la libertad de prensa, sino también aquellas que llegan a idéntico resultado de manera indirecta.

Los actos indirectos son, en particular, aquellos que se valen de medios económicos para limitar la expresión de las ideas.

Por otro lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece, en su artículo 13, inciso 3, que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

Va de suyo que cuando el dueño de un medio gráfico es a la vez el dueño del insumo (papel para diarios) se produce una inaceptable ventaja respecto de los otros medios gráficos que, mediante esta norma, se procura impedir.

Tiene advertido asimismo el alto tribunal acerca de la influencia del factor económico en la prensa actual, ya que “los medios materiales y técnicos, las redes de información, la ampliación de la tirada, la difusión nacional y hasta internacional de algunos medios, la publicidad y propaganda, etc., han insertado a la prensa en el tejido de las complejas relaciones económicas en el que se encuentran las empresas contemporáneas” (*Fallos*, 320:1191, disidencia de los jueces Fayt, Petracchi y Bossert).

Todas las acusaciones y descalificaciones de autoritarismo y de discurso único quedaron finalmente vaciadas de contenido cuando se pudieron escuchar otras voces a través de los foros y audiencias públicas, consiguiendo perforar el grueso muro de la impunidad que protegió los intereses de los grupos monopólicos.

Es por ello que adelanto que votaré favorablemente el proyecto de ley tal como ha llegado de la Cámara de Diputados de la Nación.

4

#### SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA DÍAZ

##### **Fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel de diarios (O.D.-852/11)**

Como integrantes de Nuevo Encuentro queremos celebrar y expresar nuestro apoyo a esta iniciativa del Poder Ejecutivo, que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta de celulosa y papel para diario.

Queremos un Estado presente, fuerte, que regule la actividad privada y garantice derechos democráticos y no un Estado bobo, ausente o impune como sucedió el pasado cuando, a través del terror, la represión, la tortura, la violación, la desaparición y la muerte se fomentaron negocios concentrados que hasta ahora favorecieron a grandes corporaciones económicas, cómplices de ese Estado de terror y formadoras durante muchos años de un discurso único.

Este proyecto que hoy acompañamos, tal como lo fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es un avance más en la necesaria intervención estatal para garantizar derechos básicos de un sistema democrático, como la libertad de expresión, información y comunicación.

No es posible dejar librada la información a las leyes implacables de la economía. No se trata de una mercancía más sino de la garantía de un pueblo para poder pensarse, para poder elegir, para poder discernir y ser parte activa en la construcción de la historia.

En este sentido, es irreproachable la iniciativa de garantizar el “acceso sin discriminaciones al abastecimiento del papel”, insumo básico para los diarios, actores nodales en la formación de la opinión pública.

Desde el sector privado no se garantizaron hasta aquí ni la pluralidad de voces, ni la libre competencia, ni el acceso igualitario al papel, con lo cual se vio comprometido el ejercicio de la libertad de expresión en su aspecto más básico. Más bien, todo lo contrario, por medio del manejo arbitrario de cupos y costos del papel, dos jugadores lograron ahogar publicaciones que representaban una alternativa frente a un discurso cada vez más concentrado. Tampoco le corresponde al empresariado autorregularse, para eso existe un Estado presente que genera mecanismos legales como el propuesto, que representa una medida concreta a favor de la diversidad y del ejercicio de la libertad de expresión.

No es para desdeñar el propósito de lograr el autoabastecimiento en un insumo que funciona como soporte de un derecho esencial de la vida política, tal como se postula en este proyecto.

Es saludable también otro aspecto de la ley que impulsa la generación de mecanismos de participación para representantes de los diarios de cada una de las provincias, además de los periódicos de la ciudad de Buenos Aires, de los usuarios y los trabajadores. Esta medida implica la democratización y permite el acceso a información restringida hasta el momento. Además ubica en un mismo plano medios diversos que no serán discriminados por su envergadura económica, aunque sí se les exige periodicidad. En muchos casos, el papel “representa entre el 50 y el 70 por ciento de los costos” para los medios locales en las provincias, como lo señala el abogado especialista en derecho a la información Miguel Rodríguez Villafañe.

Por último, es para destacar la incorporación de parámetros de control ambiental en una industria que resulta agresiva hacia el entorno. La obligación de remediar o compensar daños ambientales es un incentivo primordial que permitirá fomentar métodos de producción más amigables con el ambiente.

5

#### SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA HIGONET

##### **Protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales (O.D.-920/11)**

Reconozco la importancia que reviste el tema para la Nación, por lo que no puedo dejar de expresarme al respecto. No obstante, en vista de la premura del tiempo y la larga lista de oradores, pido permiso para insertar en la versión taquigráfica el siguiente discurso.

Hoy estamos por sancionar una ley que pretende preservar nuestros recursos de todo el territorio nacional, proponiendo evitar el excesivo dominio sobre nuestras tierras rurales en manos de personas extranjeras no residentes.

Ahora bien, este abordaje integral de la problemática también responde a la necesidad de saldar una deuda histórica que tenemos con nuestros pueblos originarios, dado que si bien hay legislación que los protege –la propia Constitución Nacional, como también la ley que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras (26.160 y afines)–, aún se registran violentas situaciones de desalojo que incluso se han cobrado vidas.

Para concluir, creemos que este proyecto es un importante primer paso en términos de regular y limitar la concentración de tierras, pero de todos modos consideramos necesario extender la limitación a la concentración, más allá de la nacionalidad del propietario.

8

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR  
VERANI

**Fabricación, comercialización y distribución  
de pasta celulosa y de papel de diario  
(O.D.-852/11)**

Señor presidente:

Por el artículo 1º, el mercado de papel, es decir, su fabricación y venta, hasta la fecha desregulado, se convierte en ultrarregulado al declarárselo de “interés público”.

Cuál sería la consecuencia de tal cambio; que el gobierno quiere ejercer el control sobre el mismo, regulando su producción, con poder para intervenir las fábricas a la vez de tener la posibilidad de encarecer y trabar la importación del mismo y eligiendo quién puede comprarlo y quien no.

Los artículos 2º, 10 y 12 crean una comisión bicameral de seguimiento de la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel para diario; asignan la autoridad de aplicación al Ministerio de Economía y crean la Comisión Federal Asesora. Esos organismos ejercerán innumerables controles sobre la actual empresa privada y sobre futuras empresas que se dediquen a esa misma actividad, las cuales serán posibles de numerosas sanciones.

Los artículos 40 y 41 exigen a Papel Prensa “operar como mínimo a pleno de su capacidad operativa de la demanda interna de papel para diarios” y con la obligación de ejecutar un plan de inversiones cada tres años a efectos de poder satisfacer la totalidad de la demanda interna de papel para diarios.

De no ser así, debiera el Estado hacerse cargo del aporte de fondos para esas inversiones superando su porcentaje de participación en la misma (del 27,4%) tales aportes podrán aplicarse para acrecentar dicha participación accionaria.

El artículo 20 obliga a la publicación del precio único de referencia.

Sobre este proyecto se expidieron negativamente ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas), AEDBA (Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires), ARPA (Asociación de Radiodifusores Privados) y ATVC (Asociación Televisión por Cable). El presidente de ADEPA denunció que “el trámite en Diputados fue irregular, que otorga amplísimas facultades a Economía para aplicar sanciones” y aventuró que la distribución de papel funcionará igual que la publicidad oficial y habrá que pedirle papel a Moreno. El presidente de AEDBA afirmó: “Esto es una confiscación encubierta y el tema va a terminar en la Justicia”, entre otras cosas; entretanto el presidente de ARPA arriesgó que “la ley es legítima en lo formal pero no por los derechos que compromete severamente, que son los de propiedad y libertad de prensa, y por ello la única expectativa favorable será por lado de la Justicia”. Por último, el presidente de ATVC fue más allá: “Esto es la ley de medios bis. Se trata de un nuevo control a los medios de comunicación, ahora los escritos”.

Mi conclusión respecto a la iniciativa del Ejecutivo sobre Papel Prensa es que resulta claramente inconstitucional en virtud del artículo 32 de la Constitución Nacional, que establece que “el Congreso Federal no puede dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella jurisdicción federal”.

A mi entender estamos transgrediendo ese artículo desde los dos lugares: hay injerencia en la libertad de prensa y, al declarar a la actividad “de interés público”, se le está aplicando la jurisdicción federal, conclusión: estamos actuando, los legisladores de la Nación, de forma claramente inconstitucional.

Lo que está ocurriendo es que el gobierno, a través de sus diputados y senadores, ley mediante, genera una amplísima y rigurosa regulación para una empresa sola, Papel Prensa. La pregunta que cabe es: ¿por qué ahora?, ya, en extraordinarias debemos legislar para la única empresa que produce el papel para diarios, el que no escasea en el mercado local ni mundial, porque también existe la posibilidad de importarlo sin recargos ni aranceles e incluso a un costo menor al local. ¿Es urgente la regulación de la producción del papel o urgente la alineación de la prensa escrita bajo un solo discurso?

De manera tal que si ésta es la realidad de dicho insumo, objetivamente no existe ninguna razón comercial monopólica, ni de posición dominante, ni de especulación probada, que dé motivos al Estado a intervenir de forma tan compulsiva en el rubro que produce y provee el insumo principal de la prensa escrita. Y aquí es donde este insumo, materia prima de la prensa escrita, trasciende esa significación y se convierte en el insumo indispensable de la transmisión de las ideas, de todas las ideas, las del gobierno y las de los que no las compartimos. En el papel se plasman las ideas del que piensa igual al gobierno y del que piensa distinto. Con lo cual resulta un elemento esencial de la construcción democrática. De una democracia plural, en serio, que

defiende y respeta al adversario, que no convierte en enemigo instantáneo al que se atreve a expresar una idea diferente, la democracia que se reinventa en el pensamiento distinto y diverso y que rechaza por definición el discurso unilateral.

¿Que es entonces ese apuro y obsesión sino el presagio de un control sobre lo que se escribirá, más que sobre el mercado de papel? Si hay una ley aún no tratada y demorada en el Congreso, es la Ley de Adopción, éste es un instrumento que los niños de carne y hueso huérfanos o necesitados de hogares y muchas familias deseosas de tener hijos en adopción esperan y necesitan como una respuesta urgente; no me parece que tenga la misma urgencia una ley para regular el papel de diario.

Lo que más deseo es que esta conclusión sea un rotundo error del análisis que hice del tema; con sinceridad, espero que en uno o dos años pueda pedir disculpas por haber errado el análisis, no sólo será una cuestión de honestidad intelectual, será para mí un verdadero alivio republicano.

## 9

**SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA  
LABADO**

**Fabricación, comercialización y distribución  
de pasta celulosa y de papel de diario**

**(O.D.-852/11)**

Señor presidente:

El proyecto que estamos tratando tiene por objeto darles a los diarios del país un trato igualitario, igualdad que a partir de 2003 es una realidad concreta, y de esta manera poder comunicar libremente.

Señor presidente, además también se logra un precio uniforme para todos los medios gráficos, evitando el manipuleo de la materia prima básica para garantizar el derecho a la información de los argentinos.

Este proyecto es complemento de la Ley de Medios que permite la democratización de los medios y garantiza la libertad de informar y de informarse por parte de los ciudadanos.

Señor presidente, la miembro informante dio detalles precisos del proyecto y funda el porqué de su relevancia; es por ello que yo quisiera referirme a una cuestión más de fondo. En el día de ayer escuché tantas cosas al momento de darse tratamiento al proyecto de presupuesto, y sin ofender a nadie me preguntaba mientras escuchaba las exposiciones económicas de algunos senadores y de otros que dudaban del proyecto económico que lleva adelante nuestro proyecto, del Frente para la Victoria Santacruceña, ¿dónde estaban en 2001? Hoy muchos nos quieren decir qué hacer, recuerdo en 2003 cuando nadie creía que Néstor podía transformar la Argentina, que volviese a ser un país creíble, el tiempo ha demostrado, señor presidente, que las bases construidas por un pingüino resultaron firmes, sustentables ante cualquier tempestad y es por

ello, señor presidente, que esta ley es fundamental para permitir que el pueblo decida para leer, así como decide quién lo gobierna, decisión que nosotros hemos sabido respetar, por allá en 2009, cuando nos tocó ser minoría en ambas Cámaras, decisión que seguimos respetando ahora cuando nos brindó el apoyo para la profundización de este proyecto que conduce la compañía Cristina.

Señor presidente, reitero: el pueblo tiene que estar informado, creo que lo que pasó ayer fue falta de información, si no no entiendo cómo los trabajadores rurales se manifiestan en contra de sus reivindicaciones sociales; es fundamental defender los derechos de nuestro pueblo y para eso nos votaron; poder decidir qué ver, qué leer, también forma parte de la dignificación del pueblo, y por sobre todo se ejerce el verdadero derecho de vivir en democracia.

Señor presidente, muchos se hacen los distraídos y no hablan de cómo se quedaron con Papel Prensa; por suerte también volvió la justicia a la Argentina. Señor presidente, en este nuevo país la información es de todos y para todos, nosotros vinimos a hacernos cargo de lo que pasó en los 90, de lo que pasó en 2001, pero por sobre todo nos hacemos cargo del presente y del futuro, señor presidente, futuro consolidado con el trabajo y el esfuerzo de Néstor y con esta juventud que día a día crece en capacidad y conocimiento de saber que éste es el camino que nos llevará a vivir en la Argentina que todos merecemos y que además han asumido el compromiso de ser custodios de este proyecto que nos contiene a todos.

## 10

**SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR  
REUTEMANN**

**Protección al dominio nacional sobre  
la propiedad, posesión o tenencia de las tierras  
rurales**

**(O.D.-920/11)**

Señor presidente:

El agua, la tierra, la energía escasean en el mundo. Son bienes cada vez más preciados. En la agenda del siglo XXI las cuestiones ambientales y de posesión de los recursos vitales está en el centro de las preocupaciones mundiales. De la disponibilidad de esos bienes dependerá la soberanía alimentaria.

Comparto plenamente la visión de que la tierra es un recurso estratégico y de que las tierras estén preferentemente en manos de los argentinos; es una notoria cuestión de geopolítica, de respeto del acervo cultural y, en la medida en que se modere la concentración en su tenencia y dominio, también es una cuestión de equidad social.

La naturaleza ha sido pródiga con la Argentina en materia de recursos naturales.



se colocaban en otro tipo de inversiones hoy se destinen a la compra de tierras en distintos lugares.

Sabemos de las inversiones extranjeras en el Sur para la cría y comercialización de ganado ovino y en otras regiones para disponer del disfrute de paisajes. Al comprar la tierra, los capitales extranjeros excluyen de esa posibilidad a los demás habitantes de la República Argentina. De no aprobarse esta ley, los inversionistas extranjeros buscarán aumentar la apropiación de las mejores tierras del patrimonio argentino para, mediante la agricultura intensiva y la extracción de recursos naturales, producir ganancias y refugiarse de la crisis financiera.

La aprobación de una nueva ley que legisle la tenencia de tierras en la Argentina resulta impostergable. En nuestro país existen 22 millones de hectáreas extranjerizadas, la mayor parte de ellas en manos de la gran burguesía monopólica norteamericana y europea.

Esto resulta evidente cuando se analizan las zonas más codiciadas por estos inversores, las tierras de frontera, que a la vez son un tema de seguridad vinculado con la integridad territorial y que son las ubicadas en una franja de 150 kilómetros (abarcando la cordillera) y de 50 kilómetros desde las costas, que albergan la mayor concentración de recursos naturales estratégicos, tierras cultivables, minerales y agua dulce.

Contra este tipo de actividades y compras de tierras rurales se intenta sancionar este proyecto, que hoy se somete a consideración de los señores senadores.

Por último, cabe decir que la ley procura un proceso de emprolijamiento en la registración de las tierras. Los registros de la propiedad inmueble en la Argentina son provinciales, y presentan distintas características según las jurisdicciones. No hay una información centralizada. Nadie sabe a ciencia cierta hoy en la Argentina cuánta tierra está en manos de extranjeros, en qué lugares está localizada o quiénes son sus titulares.

Por ello, este proyecto contempla la creación de un registro nacional al cual tendrán que aportar sus informes los registros locales existentes. El Registro Nacional de Tierras Rurales, creado en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con integración del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, será la autoridad de aplicación de la ley. Entre las funciones de ese registro podemos citar las siguientes: reunir datos relativos a tierras rurales de titularidad o posesión extranjera en los términos de la ley, requerir de parte de las dependencias provinciales información para conformar el registro, expedir certificados de habilitación. Así, los escribanos que autoricen escrituras en las que operen transferencia de dominio o de derechos posesorios tendrán que requerir certificados a la autoridad de aplicación. De esta manera, se podrá determinar si la persona física o jurídica que va a comprar se halla dentro de los márgenes de la limitación establecida.

Por ello, este proyecto contempla la creación de un registro nacional al cual tendrán que aportar sus informes los registros locales existentes.

Como se puede apreciar, el proyecto viene a proteger a propietarios y productores agropecuarios argentinos para que se preserven la propiedad y tenencia de las tierras en manos de estos productores agropecuarios nacionales, posibilitando un desarrollo tecnológico propio que acreciente nuestra capacidad agroindustrial y nos proyecte como productores alimentarios.

Por ello adelanto, señor presidente, el voto afirmativo de mi parte a este proyecto de ley.

12

#### SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR PÉRSICO

#### **Fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel de diarios**

**(O.D.-852/11)**

Señor presidente:

Este proyecto contempla un régimen para resguardar la libertad de expresión en nuestro país, que es un derecho amparado por la Constitución Nacional. Además viene a saldar una situación muy inequitativa en la Argentina que existe desde hace más de tres décadas.

En la distribución del papel para diarios ha existido, y continúa en este momento, una inequidad absoluta. Por ello, el proyecto de ley en tratamiento busca alcanzar dos grandes objetivos: en primer lugar, el acceso igualitario a ese preciado bien, al insumo básico que necesitan los diarios para poder existir, como lo es el papel. En segundo término, a un precio único, que es absolutamente necesario para que no exista inequidad entre los grandes diarios y los pequeños periódicos que existen a lo largo y ancho de nuestro país.

Julio Ramos, de *Ámbito Financiero*; Jorge Fontevicchia, de *Editorial Perfil*, y Jorge Lanata, *Página 12* y *Crítica* de la Argentina, han denunciado en infinidad de oportunidades esta situación de inequidad y vulnerabilidad que tenían los diarios que no eran beneficiarios de la distribución del papel de producción nacional por parte de Papel Prensa S.A.

También los legisladores de la Nación se han cansado de escuchar sobre la situación que padecen los diarios en sus provincias y han asistido a la quiebra de muchos diarios históricos.

También hemos asistido a la presentación de denuncias sobre deslealtad comercial en lo que respecta a la entrega y precio de papel.

Es por ello que en agosto del año pasado la señora presidenta de la República envió el primer mensaje por el que se declaran de interés público la producción, comercialización y distribución de pasta celulosa para papel de diario. El objeto primordial del proyecto de la señora presidenta era garantizar la libertad de imprenta

de todos aquellos que necesitan contar con ese insumo para poder expresarse a través de un medio escrito.

En ese mismo mensaje, la señora presidenta de la Nación también anunció que en un plazo muy corto enviaría el marco regulatorio adjuntado a la primera iniciativa del Poder Ejecutivo.

En dicho mensaje, que fue recepcionado en su totalidad por el proyecto que hoy votamos, se declaran de interés público la producción, comercialización y distribución de la pasta de celulosa de papel para diarios. Además, se crea una comisión bicameral, formada por ocho senadores y ocho diputados.

En el marco regulatorio se define el objeto. Se establece la implementación progresiva de las mejores técnicas disponibles, considerando el factor de empleo y aplicando aquellas prácticas ambientales que aseguren la preservación y protección del ambiente.

También define el ámbito de aplicación, que es para todas las personas físicas o jurídicas con domicilio en la República Argentina, que sean fabricantes o distribuidoras de la pasta de celulosa para papel para diarios.

Se define quiénes son los fabricantes, distribuidores y comercializadores de papel, qué es la fabricación del papel para diario, quiénes son los compradores, quiénes son los sujetos.

Asimismo, se incorpora el concepto del impacto ambiental, previendo que si existe tal impacto debe llegar al alcance mínimo o nulo.

Se establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Las atribuciones de la autoridad de aplicación son: incentivar la eficiencia del sector y garantizar la producción nacional en la totalidad de las etapas de la actividad partiendo de la madera como insumo básico; progresar hacia una mejor operación de la industria de la pasta de celulosa de papel para diarios, garantizando la igualdad de oportunidades y el acceso sin discriminaciones al abastecimiento de papel; hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y disposiciones complementarias, en el ámbito de competencia; dictar las normas a las que deberán ajustarse los sujetos de esta ley en materia de normas y procedimientos técnicos; requerir a los actores del presente régimen la documentación respaldatoria e información que sea necesaria para verificar el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación. Asimismo, deberá realizar las inspecciones que sean necesarias a los mismos efectos y habilitará los registros pertinentes; promover ante los tribunales competentes las acciones pertinentes que tiendan a asegurar el cumplimiento de sus funciones y los fines de esta ley y su reglamentación. Aplicará las sanciones previstas en la presente ley y su reglamentación; ejercer las acciones de fiscalización que correspondan; promover y controlar la producción y uso sustentable de pasta celulosa y de papel para diarios; establecer las normas de calidad a las que debe ajustarse la producción de pasta celulosa y de papel para diarios; enumerar los requisitos y condi-

ciones necesarios para la habilitación de las plantas de producción de pasta celulosa y de papel para diarios; establecer los requisitos y criterios de selección para la presentación de los proyectos que tengan por objeto acogerse a los beneficios establecidos por la presente ley; realizar auditorías e inspecciones a las plantas habilitadas; realizar auditorías e inspecciones a los beneficiarios del régimen de promoción.

El proyecto crea una Comisión Federal Asesora de integración civil, compuesta por un representante de cada diario de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos representantes de las organizaciones representativas de usuarios y consumidores, tres representantes de los trabajadores, correspondiendo uno a los gráficos, uno a la prensa y uno a los vendedores de diarios y revistas. Durarán cuatro años en sus funciones, teniendo que rotarse.

La Comisión Federal Asesora también tiene sus funciones establecidas en este proyecto de ley, que además crea un registro que requerirá por supuesto de un tiempo determinado para ser habilitado y conformado.

Asimismo, el proyecto fija el precio único de contado. Los fabricantes, distribuidores y comercializadores de pasta celulosa para papel para diarios tendrán que publicar con conocimiento de las empresas compradoras —a través de este registro y de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Fabricación, Comercialización y Distribución de Pasta de Celulosa— el stock total disponible, la capacidad de producción máxima y la producción estimada de manera trimestral.

En cuanto al precio único de contado, hay una fórmula que lo determina y que acompaña este proyecto de ley. El stock mínimo es una tonelada de este producto y es para los que compran al contado. Los fabricantes podrán tener un precio diferenciado para quienes tengan plazos de pago.

El proyecto determina un régimen de venta y un régimen de inversiones. En este sentido, los fabricantes van a tener que establecer una proyección cada tres años y además podrán ser beneficiarios —a los efectos de esta financiación, de las inversiones previstas y exigidas en este proyecto de ley— para poder abastecer al mercado interno. Podrán acceder y contar con los beneficios promocionales que podrá ofrecer el Estado nacional en algún momento. Así que si no tienen dinero para invertir, podrán acudir al gobierno, aunque no creo que les falte.

Cabe mencionar que el proyecto crea un fondo fiduciario, y se prevé que a la única planta que hoy existe que produce pasta de celulosa para papel para diario, que es Papel Prensa Sociedad Anónima, se le va a exigir que opere como mínimo a pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna siempre y cuando ésta no supere la capacidad mínima de la empresa. Las cláusulas transitorias, que son dos artículos, tienen corto plazo, porque rigen hasta que se alcance el objetivo.

Cabe agregar que para poder lograr el acceso igualitario al papel este proyecto de ley prevé una fórmula,

que es la diferencia entre la demanda interna a través del registro de los compradores de papel para diarios y la capacidad de producción que tiene hoy la única fábrica de papel para diarios que existe, lo que da como resultante una fórmula que es la necesidad de la importación.

A partir de una resolución de la Secretaría de Comercio de este gobierno la importación del papel tiene arancel cero. Nosotros hemos venido contribuyendo con políticas de Estado para que esta situación mejore cada vez más. No hemos podido resolver el problema central, que es el monopolio de la fabricación de papel, con lo cual también continúan las inequidades, pero la tasa cero es a partir de este gobierno, de una resolución de la Secretaría de Comercio de la Nación.

Cuando los fondos necesarios para las inversiones previstas sean provistos en forma más que proporcional por el Estado nacional respecto de otros socios, los derechos políticos adicionales emergentes de dichos aportes de capital serán ejercidos por la Comisión Federal Asesora, es decir, por los diarios.

Por último, cabe decir que el hecho de que los diarios tengan que comprar papel a su máximo competidor porque fabrica el papel, genera una situación de inequidad absoluta y este Congreso tiene que saldarla. Hay que proteger a los diarios de la Argentina.

Nuestro país es un caso único en el mundo. No existe país en el mundo donde el dueño de la planta que produce papel sea el dueño del diario.

Todos los legisladores conocemos por lo menos un diario que ha sido víctima de esta situación, ya sea de nuestro pueblo, de nuestro municipio o de nuestra provincia. No creo que ningún partido político que defienda los valores de la democracia pueda dejar de acompañar este proyecto.

Por los motivos esgrimidos, señor presidente, adelanto mi voto favorable a este proyecto.

13

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR  
PÉRSICO

**Protección al dominio nacional  
sobre la propiedad, posesión o tenencia  
de las tierras rurales**

(O.D.-920/11)

Señor presidente:

El proyecto de ley que estamos considerando reviste una importancia fundamental, teniendo en cuenta que la tierra es un recurso natural escaso y no renovable, de significación estratégica para el desarrollo humano, social y económico, que en definitiva hace a la soberanía nacional.

Por ello, se impone la necesidad de dictar una legislación tuitiva, para evitar la consolidación de procesos nocivos e indeseados que, de ser librados a su propia

dinámica, podrían comprometer gravemente el desarrollo, la soberanía nacional y la titularidad del pueblo argentino sobre sus recursos estratégicos no renovables.

En este sentido, resulta oportuno señalar que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –FAO– viene trabajando y realizando desde hace algún tiempo negociaciones intergubernamentales para arribar a un documento denominado “Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”.

En mayo de 2010 se realizó en Brasilia una consulta regional en torno a la temática, y en esa ocasión se pudo arribar a ciertas conclusiones que describen de manera general ciertos caracteres que son aplicables a toda América Latina.

En dicho encuentro se parte de la premisa de que un gobierno débil en estos recursos dificulta el crecimiento económico y el uso sostenible del medio ambiente; en cambio, la administración responsable de la tenencia de la tierra y de otros recursos naturales puede ayudar a reducir el hambre y la pobreza y a potenciar el desarrollo social y económico.

Las conclusiones que arrojó el encuentro son las siguientes:

- La tierra, así como otros recursos productivos de capital, está sufriendo un alarmante proceso de concentración en la propiedad y su uso. Además, esto se ve agravado por la extranjerización de la tenencia legal en la mayoría de los países de América del Sur.
- Esta situación ha repercutido principalmente en el normal desarrollo de la agricultura familiar; en el continente ha provocado, por ejemplo, masivos procesos de migración desde el campo a las ciudades y pérdida de la forma de vida tradicional en el mundo rural.
- Por lo anterior, el Estado debe tener un rol más activo en el diseño, aplicación y control del cumplimiento de medidas tendientes a mejorar la gobernanza y administración de la tierra, teniendo un papel central en la regulación de compras y transferencias de tierras a empresas extranjeras. Todas estas políticas deben propender a la protección de la agricultura familiar y, por ende, a la soberanía alimentaria de cada país.

Asimismo, la FAO considera que la concentración es producto de la consolidación de complejos agroindustriales transnacionales que, en muchos casos, están más integrados al sistema agroalimentario mundial que a los mercados internos, y también por fenómenos de largas adquisiciones de tierras por fines puramente especulativos. Ambos fenómenos son retroalimentados por el alza de los precios internacionales de alimentos y materias primas.

En este escenario, en los últimos años se registra una recuperación de la capacidad en la mayoría de los Estados para la intervención y la regulación de los mercados y de la tenencia de la tierra, destinadas a desarrollar sistemas sostenibles de producción de uso y ocupación

de la tierra y que éstos sean capaces de garantizar la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación.

Nuestra Constitución Nacional contiene diversas cláusulas que sirven de sustento a la iniciativa que estamos abordando. Así, el artículo 75, inciso 19, establece que el Estado nacional, más concretamente el Congreso de la Nación, tiene el deber de “proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento”; y de “proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio...”.

Asimismo, y como bien se señala en los fundamentos del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo nacional, las decisiones nacionales sobre la titularidad, tenencia y uso de las tierras rurales se inscriben dentro del derecho a la libre determinación de los pueblos, así como también en su derecho a la independencia económica, y a la fijación de las formas de explotación y distribución de lo producido con sus riquezas y recursos naturales, tal como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional–.

Por su parte, el artículo 21 del Pacto de San José de Costa Rica establece: “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social...”.

Con respecto a la procedencia o pertinencia de dictar esta regulación, es importante dejar en claro que lo que hace esta norma es legislar con relación al dominio de inmuebles, facultad que es resorte exclusivo del Congreso Nacional.

En el campo de la legislación comparada, vale destacar que normas de este tipo, si bien pueden resultar novedosas en nuestro medio, existen en la mayoría de los países desarrollados y en aquellos que cuentan con una gran riqueza de recursos naturales. Como ejemplo se pueden mencionar: Brasil, Francia, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, entre otros.

En nuestro país se ha detectado durante los últimos años un fuerte proceso de adquisición de grandes extensiones de tierras rurales por parte de capitales extranjeros.

Como respuesta a dicho fenómeno, el Poder Ejecutivo nacional elaboró este valioso instrumento normativo para limitar ese proceso, y fue el primer proyecto remitido en el corriente año parlamentario. Se trata de un paso fundamental en pos de consolidar una política de Estado que preserve fuertemente la propiedad nacional de este recurso estratégico.

No solo se limita la cantidad de tierra en manos de extranjeros sino que además se limita la cantidad en manos de un mismo propietario. Ello así en el entendimiento de que estos procesos afectan gravemente la independencia económica y política de nuestra nación.

Esta iniciativa responde a un reclamo de larga data. La misma se inserta en un contexto de visión integral y estratégica del Estado, en la que se elaboran políticas públicas que no sólo respondan a situaciones coyunturales, sino que también tracen un horizonte a largo plazo, cuidando los recursos naturales vitales para nuestro porvenir.

Vale aclarar que esta protección del dominio nacional sobre los recursos naturales argentinos en modo alguno ha de ser entendida como una norma xenofóbica, prohibitiva o refractaria a las inversiones extranjeras responsables, siendo un modelo utilizado por numerosas legislaciones en el derecho comparado, asegurando que los recursos, vitales en el siglo XXI, sigan en la órbita del Estado nacional, sin que eso signifique desalentar la inversión extranjera.

Ello surge claramente de los fundamentos del proyecto y de su articulado, así como también de las palabras de nuestra presidenta en oportunidad de anunciar el envío del proyecto a la Cámara de Diputados de la Nación.

La norma en cuestión no sólo no resulta refractaria de inversiones extranjeras, sino que tampoco afecta derechos adquiridos.

Señor presidente, estoy plenamente convencida de la relevancia trascendental que reviste esta norma, mediante la cual se protege este recurso estratégico para todos los argentinos, para nosotros y para las generaciones futuras.

Por todo ello, acompaño con mi voto positivo la sanción del presente proyecto de ley.

14

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR  
IRRAZÁBAL

**Fabricación, comercialización y distribución  
de pasta celulosa y de papel de diarios  
(O.D.-852/11)**

Señor presidente:

Venimos a dar el debate del proyecto venido en revisión a esta Honorable Cámara para declarar de interés público la fabricación, comercialización y distribución de papel de diarios, convencidos de que la sanción de esta iniciativa constituirá un paso importante en la defensa del derecho a la comunicación de todos los habitantes del país.

El papel de diario es un insumo básico para la prensa escrita y este bloque del oficialismo entiende que las condiciones en que se desarrolla actualmente el mercado de papel de diario están lejos de garantizar el libre acceso y la no discriminación del grueso de los medios de prensa del país.

Como bien sabemos, la oferta de papel de diario en nuestro país está concentrada en una empresa, Papel Prensa S.A., bajo el control de las empresas



periodísticas que editan los dos principales matutinos del país, a las que la competencia acusa de autoabastecerse a precio preferencial e imponer, al resto de los medios gráficos, precios y condiciones discriminatorios. Proponemos atender este desequilibrio flagrante mediante una regulación específica, que asegurando entre otras cosas el acceso a precio igualitario, sienta las bases de una tutela efectiva de las libertades de imprenta, de expresión y de información, de raigambre constitucional y en concordancia con los tratados internacionales de derechos humanos.

Esta regulación, lejos de constituir una medida aislada, caprichosa o motivada por la persecución política, como arguyen con fundamentos poco serios sus destinatarios en primeras planas, se enmarca en la posición amplia y consistente que viene defendiendo la administración, de poner coto a la concentración económica de las últimas décadas, concentración que conspira contra los intereses de los consumidores y que ha reducido los espacios para el ejercicio efectivo de los derechos y garantías constitucionales.

En este sentido, la regulación del mercado de papel para diarios complementa la política legislativa establecida por este Congreso de la Nación para los servicios de comunicación audiovisual, fijando para la provisión de este insumo objetivos de origen nacional, competencia, no discriminación, libre acceso, asignación eficiente de recursos y preservación del medio ambiente.

Entendemos que el rol del Estado de una sociedad organizada democráticamente consiste en proveer al mayor y mejor desarrollo de todos sus integrantes. Apuntamos a un Estado dotado de un orden jurídico emanado de la representación popular, una administración burocrática capacitada y un ejercicio prudente y responsable del monopolio de la fuerza legítima, que no sea pasivo ante los desequilibrios, asimetrías y falta de transparencia de los mercados, que sea capaz de corregir las desviaciones que amenazan con hacer de buena parte de los derechos declarados en sus estatutos meras expresiones de deseo.

En la actualidad el esquema comunicacional argentino está signado por la concentración económica. Unos pocos grupos económicos controlan la mayor parte de los medios informativos: prensa gráfica, radiodifusión, televisión y demás canales de distribución masiva de contenidos. El riesgo que entraña esta configuración no es tanto su creciente capacidad de imponer agendas comunicacionales –cuya influencia efectiva en los tomadores de decisión y el público en general, como ha quedado evidenciado con los últimos resultados electorales, es, en el mejor de los casos, relativa– sino el ahogo del pluralismo de fuentes de información que conlleva.

La intención declarada y explicitada de esta norma es poner límite a los posibles abusos de posición dominante y con ello ampliar el espectro de diversidad,

democratización y federalización de la prensa escrita. La obligación de publicar la información relevante para el mercado y la fijación de un precio único de contado al que todos los consumidores puedan acceder al papel de diarios, brindan transparencia al mercado de papel de diario y protegen de las prácticas anticompetitivas, colusorias y predatorias que ha facilitado la aquiescencia de gobiernos notoriamente sensibles a la influencia de las corrientes principales de la opinión publicada.

Creemos que es necesario poner coto a este mecanismo autosatisfactorio de obstrucción de la competencia comercial, que con frecuencia se intenta legitimar mediante el uso irrestricto del dispositivo mediático, algo que es importante decirlo, no debe ni podría restringir de ninguna manera este régimen constitucional. Y no es que aspiremos a que los medios de comunicación gráficos lleguen a carecer de intereses comerciales, o de puntos de vista políticos o sociales en línea con aquellos, y que la defensa de sus propósitos no vaya a entrar en competencia con otros propósitos de otros orígenes comerciales, solamente que consideramos justo que el Estado vele para que no se produzcan avasallamientos de los derechos de todos los concurrentes en proveerse de los medios que necesitan para publicar sus propias ideas y puntos de vista, es decir hacer valer sus intereses en igualdad de condiciones jurídicas, todo ello en el entendimiento que el resultado de esta intervención será un “mercado de ideas” más vasto, variado y competitivo, o lo que es lo mismo, una prensa más libre y democrática.

El presidente norteamericano James Madison sostuvo alguna vez que “un gobierno popular sin información popular o sin los medios para adquirirla, no es sino el prólogo a una farsa o una tragedia, o tal vez ambos”. Que el esfuerzo republicano que lleva adelante esta administración, de enfrentarse a los intereses concentrados que acostumbran custodiar sus negocios desplegando amplios operativos de formación de la opinión pública, arribe en lograr una mayor capacidad del conjunto social para dotarse de más y mejor información para vivir en democracia, es el anhelo que motiva mi voto favorable a la propuesta bajo examen de esta Honorable Cámara.

15

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR  
BERMEJO

**Protección al dominio nacional sobre  
la propiedad, posesión o tenencia de las tierras  
rurales**

(O.D.-920/11)

Señor presidente:

Con respecto a este proyecto, quiero afirmar que pertenezco a un movimiento político donde la soberanía

política, la independencia económica y la justicia social son banderas fundacionales y fundamentales para el desarrollo de políticas públicas en cada gestión, ya sea nacional, provincial o municipal.

Partiendo de esta base filosófica y política, resalto la voluntad y férrea decisión de nuestra presidenta de la Nación, quien a través de este proyecto genera una clara política de Estado para reservar un recurso no renovable que es estratégico para los argentinos, en salvaguarda de la soberanía alimentaria del presente; pero fundamentalmente de las generaciones futuras.

Cuando en estos días, lo medios de comunicación de mi Provincia me solicitan alguna referencia de lo vivido hace diez años en nuestro país; lo primero que viene a mi memoria es que luego de esas nefastas jornadas de diciembre de 2001, cuando murieron compatriotas que reclamaban lo que les correspondía, todos tuvimos que soportar y padecer una grave crisis económica; y en medio de ella aparecieron numerosos inversores que vinieron por nuestras tierras... porque en esa época, el valor de ese recurso era de dos pesos.

Pasó una década, la Argentina cambió y se puso de pie con un liderazgo político importante; pero fundamentalmente con la voluntad de cambiar paradigmas y defender los intereses de la Nación.

Este proyecto tiene mucho que ver con eso, porque pone un freno necesario a aquellos capitales extranjeros que lo único que pretenden es adueñarse de nuestros recursos naturales, teniendo en cuenta la riqueza de nuestra tierra en todo el territorio nacional.

Celebro que hoy estemos debatiendo este tipo de leyes, porque no podemos permitir que la tierra de nuestros pueblos originarios, como también la de nuestros abuelos, quede en manos de inversores extranjeros. Esto no significa que a través de un instrumento legal levantamos un muro, ni que coartemos la posibilidad del ingreso de capitales al país. Por el contrario, estoy convencido que mediante esta ley, le damos una clara señal a quienes deseen invertir en la Argentina, ésta es que para traer capitales, lo deben hacer en industrias que nos permitan incorporar valor agregado a nuestra producción primaria.

Señor presidente, no quiero extenderme porque entiendo que hay muchos senadores que desean participar en este debate histórico, pero antes de finalizar quiero manifestar que el proyecto que tratamos no vulnera la autonomía de las provincias, por el contrario les genera un paraguas que las protege junto a los municipios del avance indiscriminado sobre nuestra tierra y nuestros alimentos.

Por lo expuesto, señor presidente, dejo constancia que acompañaré a mi bloque en el voto afirmativo del Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

16

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA  
PARRILLI

**Fabricación, comercialización y distribución  
de pasta celulosa y de papel de diarios  
(O.D.-852/11)**

Señor presidente:

En la distribución del papel prensa para diario ha existido durante más de 30 años una inequidad absoluta, y este proyecto con media sanción de Diputados tiene dos objetivos: el acceso igualitario al papel y a un precio único, para todos los diarios grandes, medianos y chicos que existen a lo largo y ancho de nuestro país. Elementos fundamentales para que los diarios puedan cumplir con su finalidad... informar en iguales condiciones.

Es un proyecto para resguardar la libertad de expresión en nuestro país, que es un derecho amparado por la Constitución Nacional, y saldrá una situación inequitativa existente en nuestro país, desde hace más de tres décadas.

Durante estas tres décadas hubo denuncias y reclamos para esta situación. Recordemos a Julio Ramos, de *Ámbito Financiero*, a Jorge Fontevecchia, de Editorial Perfil, y a Jorge Lanata tanto en *Página 12* y luego con el diario *Crítica* de la Argentina, quienes denunciaron en forma reiterada la inequidad, vulnerabilidad, opresión y disciplinamiento obligatorio que tenían los diarios que no eran beneficiarios de la distribución del papel de producción nacional por parte del Papel Prensa S.A.

Recordaremos las situaciones similares que vivieron los diarios de las provincias, de los pequeños pueblos y de los municipios, mucho de esos diarios directamente quebraron. Existieron y existen denuncias concretas sobre deslealtad comercial en la entrega de papel y/o en el precio del papel.

Este proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados, en agosto del 2012 para declarar de interés público la producción, comercialización y distribución de pasta celulosa para papel de diarios, quienes explicaron y fundamentaron su apoyo a esta declaración de interés público de la producción, comercialización y distribución de pasta celulosa para papel de diarios.

Todos tuvieron su oportunidad para opinar y de ser escuchados, pero... ningún diputado de la oposición –salvo alguna excepción– asistió a esos debates. Otros no quisieron venir, como los directivos de *Clarín* y *La Nación*, accionistas de la única fábrica de pasta de celulosa de papel para diarios.

Paralelamente a esas audiencias, y por orden de la señora presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, se realizaron audiencias públicas a lo largo y a lo ancho del país. El resultado de esas audiencias fue la construcción del marco normativo que forma

parte del dictamen de mayoría. No hay dudas, que fue un proceso democrático, plural, abierto y de construcción colectiva.

El año pasado, vale recordar se emitió un dictamen de mayoría de un proyecto presentado por la ex diputada Cecilia Merchan, del bloque Proyecto Sur. Dicho dictamen, que también declaraba de interés público la producción, comercialización y distribución de la pasta de celulosa para papel para diario y que en 90 % expresaba el espíritu del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, fue acompañado por el bloque oficialista. Por supuesto no llegó al recinto para su tratamiento y —como era de esperar—, perdió su estado parlamentario.

Además de todo lo señalado y para lo que cuestionan la falta de debate, cabe destacar que en la sesión llevada a cabo en la Cámara de Diputados el pasado 15 de diciembre, este proyecto se discutió durante 7 horas de las 17 horas que duro la sesión. Obteniendo la media sanción por 135 votos a favor, 92 en contra y 12 abstenciones.

Este proyecto, que hoy estamos debatiendo para su correspondiente sanción en la Cámara de Senadores, declara de interés público la producción, comercialización y distribución de la pasta de celulosa del papel para diarios. Además, crea una comisión bicameral, formada por ocho senadores y ocho diputados.

En su marco regulatorio establece la implementación progresiva de las mejores tecnológicas disponibles, considera el factor de empleo y obliga a aplicar prácticas de producción que aseguren la preservación y protección del ambiente. Así como también, prevé estudios anules para que reflejen así mejoras introducidas tanto en el proceso, como en el tratamiento de los residuos. (Artículo 8°.)

El ámbito de aplicación de esta iniciativa, será para todas las personas físicas o jurídicas con domicilio en la República Argentina, que sean fabricantes o distribuidores de la pasta de celulosa para papel para diarios, define, quienes son los fabricantes, distribuidores y comercializadores de papel, qué es la fabricación del papel para diario, quiénes son los compradores, quienes son los sujetos.

En los fundamentos de los principios generales se señala que “las actividades comprendidas en la presente ley serán ejercidas libremente, conforme su carácter de interés público, con arreglo a las disposiciones generales en ella previstas y las normas reglamentarias que de la misma se dicten. Dichas actividades deberán propender a la producción nacional, la competencia, la no discriminación, el libre acceso, la asignación eficiente de recursos y preservación del medio ambiente”.

La autoridad de aplicación es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, cuyas atribuciones serán: incentivar la eficiencia del sector y garantizar la producción nacional en todas sus etapas desde la madera como insumo básico; garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso sin discriminación al abastecimiento de papel; hacer cumplir la presente ley, su re-

glamentación y disposiciones complementarias; dictar las normas y procedimientos técnicos; requerir la documentación respaldatoria e información para verificar el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación; ejercer las acciones de fiscalización que correspondan; promover y controlar la producción y uso sustentable de pasta celulosa y de papel para diarios; establecer las normas de calidad en la producción; realizar auditorías e inspecciones a las plantas habilitadas y a los beneficiarios del régimen de promoción, entre otras.

Esta iniciativa además crea una Comisión Federal Asesora de integración civil, compuesta por un representante de cada diario de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos representantes de las organizaciones representativas de usuarios y consumidores, tres representantes de los trabajadores gráficos, la prensa y vendedores de diarios y revistas. Durará cuatro años en sus funciones y su integrantes tendrán voz y voto con independencia de su tamaño, volumen de producción y/o nivel de ventas.

El artículo 20, se refiere al precio único de contado, con una fórmula para calcular que está incluida en el proyecto. Los fabricantes, distribuidores y comercializadores de pasta celulosa para papel para diarios tendrán que publicar, para conocimiento de las empresas compradoras y el seguimiento de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Fabricación, Comercialización y Distribución de Pasta de Celulosa, el stock total disponible, la capacidad de producción máxima y la producción estimada de manera trimestral.

Existe un régimen de venta y de inversiones que los fabricantes deberán establecer una proyección cada tres años. Además, podrán ser beneficiarios y acceder de ser necesario a los beneficios promocionales que pueda ofrecer el Estado nacional.

A Papel Prensa Sociedad Anónima, por ser la única planta que existe y que produce pasta de celulosa para papel para diario en la Argentina, se le va a exigir que opere como mínimo a plena capacidad operativa o de la demanda interna siempre y cuando, ésta no supere la capacidad mínima de la empresa. Además, deberá presentar un plan de inversión a tres años tendiente a satisfacer la totalidad de la demanda interna.

Para poder lograr el acceso igualitario al papel de todos los diarios, este proyecto, de ley prevé una fórmula, que es la diferencia entre la demanda interna —a través del registro de los compradores de papel de diarios—, y la capacidad de producción que tiene hoy la única fábrica de papel Papel Prensa, que determinará el monto de papel que será necesario, importar o arancel cero.

Cuando los fondos provistos por el gobierno nacional sean superiores con respecto a los aportados por los socios privados (*La Nación* y *Clarín*), cabe señalar que los derechos políticos adicionales emergentes de dichos aportes de capital, serán ejercidos por la Comisión Federal Asesora, es decir, por los diarios. Estos lo dice claramente el artículo 41.

Hace tres décadas, los diarios argentinos deben comprar el papel a su máximo competidor porque es el dueño de la única fábrica de papel. Es un caso único en el mundo. No existe país en el mundo donde el dueño de la planta que produce papel sea el dueño del diario.

Esta situación de inequidad absoluta será saldada por este Congreso. Su objetivo es proteger a todos diarios de la Argentina. Grandes, medianos y pequeños. Esta ley cuidará resguardará y promocionará la libertad de expresión en el país.

17

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR  
BERMEJO

**Fabricación, comercialización y distribución  
de pasta celulosa y de papel de diarios**

(O.D.-852/11)

Señor presidente:

En lo que respecta a este tema, debemos partir de la base que nuestra Constitución Nacional, en su primera parte, capítulo primero que consagra Declaraciones, Derechos y Garantías, cuenta con artículos como el 14, que garantiza a “todos los habitantes de la nación el derecho de publicar sus ideas por la prensa, sin censura previa”; y el 32 que dice “el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta u establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Mientras que en el capítulo segundo, consagra nuevos derechos y Garantías, producto de la Reforma Constitucional de 1994. Allí en su artículo 42, expresa que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales...”, y continúa dicho artículo.

Traigo a colación estos artículos de nuestra Carta Magna, porque en los últimos días, vimos algunas primeras planas de medios gráficos de circulación nacional; quienes amparándose en su derecho, trataron de continuar privilegiando sus intereses particulares y monopolícos, por sobre los intereses del conjunto.

Durante este debate mucho se dijo sobre el nacimiento y funcionamiento de la única empresa nacional que se dedica a la producción, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel para diario. Volver sobre ello sería redundar en parte de la historia oscura que los argentinos debimos vivir desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983. Pero resulta que aún en democracia y hasta la actualidad, dicha empresa atentó contra la libertad de expresión y de imprenta, impidiendo que muchos medios de nuestro

país, a lo largo de más de tres décadas accedieran al papel, el insumo más importante para dar a conocer la realidad a sus lectores.

Hoy me llama la atención que desde diversas organizaciones que nuclean a medios periodísticos en el continente americano o Europa se diga que en la Argentina estamos legislando para amordazar a los periodistas y lo que es peor, se afirme que este Congreso Nacional intenta cercenar la libertad de prensa con una ley de censura encubierta.

Señor presidente, vengo de la provincia de Mendoza y allí hoy tenemos cuatro diarios. Hay un diario centenario, que nunca tuvo problemas para abastecerse de su insumo más importante y otros tres que fueron discriminados por la única empresa de capitales público-privados que tenemos en nuestro país en la provisión del papel, llegando hasta el punto de tener que importar ese insumo indispensable desde el hermano país de Chile, con los costos que eso significa, porque la única planta de fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel para diario no le vende, porque es de la competencia de aquellos socios del Estado argentino en dicha empresa.

Si hablamos de libertad de expresión, libertad de imprenta, mordazas a la prensa; cabe preguntarnos por qué a lo largo de estas décadas no hubo de parte de la empresa Papel Prensa un trato igualitario con medios gráficos que no pertenecen a su grupo económico, muchos de esos medios locales, regionales o provinciales desaparecieron porque no podían importar papel; pero resulta mucho más increíble por qué el Estado nacional, siendo socio en esta única empresa proveedora, nunca intervino para democratizar el acceso al papel de diario para todos los medios gráficos del país.

Un dato relevante que me llama la atención y nos hace únicos en el mundo a los argentinos, es que en nuestro país los dueños de la planta que produce papel para diarios son los dueños de algunos diarios.

Con este escenario planteado, estoy convencido que el Ejecutivo nacional debe corregir esa inequidad histórica y desde este Honorable Senado debemos otorgar el mejor instrumento legal para que todos los medios gráficos del país accedan al insumo necesario de forma igualitaria, sin discriminación alguna y a un precio accesible y único de contado, o simplemente diferenciado para quienes accedan a plazos de pago.

Hace tres días, leí en uno de los diarios de Mendoza que el CEO de un medio gráfico afirmaba: “Estamos en un estado de competencia desleal que ha servido para asfixiar competidores, en los últimos años hemos sido discriminados en la provisión por parte de Papel Prensa”.

Además, durante su última visita a San Rafael, Mendoza, el pasado viernes 16 de diciembre, la presidente Cristina Fernández de Kirchner dijo: “Quédense tranquilos que yo no pienso poner ningún diario” y aseveró que la norma que hoy tratamos en este Honorable Senado apunta a democratizar el acceso al papel de diario



“para que los pequeños empresarios tengan acceso a los insumos básicos”. Agregando que la “democratización” la debe “generar el Estado, porque fue el Estado el que creó la principal productora de papel de diarios de la Argentina con los recursos de todos los argentinos”.

Señor presidente, no deseo extenderme porque entiendo que mucho se dijo y se dirá en este debate y mis pares conocen lo que viven algunos medios gráficos en cada una de sus provincias, por esto adelanto que mi voto será de manera positiva, acompañando a mi bloque; convencido de que este proyecto que tiene sanción de Diputados y que será ley es la mejor herramienta para democratizar el acceso igualitario al papel de diario, al tiempo que incorpora la protección del ambiente en la producción y utilización de materias primas y crea una comisión bicameral para controlar la producción, comercialización y distribución de pasta de celulosa y papel para diarios en la Argentina.

18

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA  
CORRADI DE BELTRÁN

**Protección al dominio nacional sobre  
la propiedad, posesión o tenencia de las tierras  
rurales  
(O.D.-920/11)**

Señor presidente:

Veo con agrado la aprobación de la presente ley que propone limitar y regular la compra de tierras argentinas en manos de extranjeros. Considero que esta norma será el punto de partida para el debate y la toma de conciencia de la problemática de la tierra en nuestro país.

Hablar de la soberanía nacional y sus derivados: la soberanía territorial, la soberanía agroalimentaria, la defensa de nuestros recursos naturales (en especial el agua dulce), la distribución de la tierra y el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, entre otros, son algunos de los grandes temas pendientes o ha profundizar en el Poder Legislativo.

En Santiago de Estero, provincia a la que represento, existen serios problemas dominiales que han acarreado conflictos políticos y sociales llegando al extremo de la violencia armada y llevándose la vida de varios campesinos.

Sin más, hace apenas un mes, todos nos conmovimos con la noticia del asesinato del joven Cristian Ferreyra, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE VC), quien por resistirse a los desalojos de su tierra fue herido de bala y muerto posteriormente en el hospital. Hace apenas 3 días en Villa Matogue, al norte de la capital santiagueña, limitando con Salta, 2 campesinos, Ariel y Néstor Palacios, fueron heridos de gravedad debiendo ser hospitalizados en un nosocomio salteño para luego ser derivados al hospital de la ciudad de Salta.

Esto sucede porque las tierras de nuestra región, despreciadas durante mucho tiempo por su aridez y la ausencia de riquezas naturales, propias de la zona núcleo (concepto que aprendí con este dictamen), hoy son muy apetecidas por empresarios nacionales y extranjeros para el desmonte y la posterior cosecha de soja.

Los poseedores ancestrales de las tierras santiagueñas jamás pensaron que su terruño podía ser fruto de conflictos económicos y financieros al punto de tener que dar la vida por defender su hábitat y su medio de subsistencia. 500 años después de la conquista, los indígenas y los gauchos deben seguir defendiendo sus tierras en condiciones extremadamente desiguales.

Los empresarios que compran tierras fiscales ocupadas por lugareños desde décadas atrás, intentan desalojarlos tirando abajo sus casas, alambrando sus terrenos e intimidándolos a fuerza de armas y palos.

Por esta razón desde la década del 90 los campesinos santiagueños se han unido en diferentes organizaciones y movimientos con el fin de defenderse de la usurpación y el desalojo de su terruño.

Es mi intención agradecer la colaboración de la doctora Florencia Gómez Galizzi, quien desde las organizaciones nacionales de agricultura familiar y desde la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca del mismo nombre, viene acompañando la lucha campesino-indígena de Santiago del Estero y la consecuente legislación que deriva de las necesidades de esas comunidades.

Actualmente, la lucha campesina indígena por la regulación dominial de las tierras y por la implementación de la ley nacional 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras de las comunidades indígenas son el eje de la discusión y el centro de la problemática rural.

Por otra parte, como bien sabe la población, son los santiagueños los que más padecen de la explotación laboral y las condiciones de esclavitud propias del trabajo golondrina, pues es la provincia de mayor flujo migratorio a la hora de la estacionalidad de la cosecha.

Esto se debe a que la tecnificación de la producción del algodón, la desaparición del obraje como consecuencia de la indiscriminada tala de árboles y la inédita producción sojera que requiere un mínimo de mano de obra hacen que la gente decida migrar para conseguir un pasajero e ilusorio sustento económico. Pero en vez de trabajo encuentran explotación y sometimiento, como lo han demostrado diferentes artículos periodísticos al comienzo de este año y hace unos días con la cosecha de arándanos en la localidad de San Andrés de Giles a 100 km de Buenos Aires.

Apuntalar y fortalecer el desarrollo sustentable campesino es el camino para la independencia y la autonomía de la agricultura familiar argentina.

A raíz de la muerte de Cristian Ferreyra se hizo efectiva la presentación en la Cámara de Diputados de la

19

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA  
CORREGIDO

**Protección al dominio nacional sobre  
la propiedad, posesión o tenencia de las tierras  
rurales**

**(O.D.-920/11)**

Señor presidente:

El C.D.-90/11 que limita la propiedad extranjera sobre tierras rurales es un ejemplo de legislación soberana y estratégica tendiente a defender los intereses nacionales relacionados con un recurso natural no renovable y escaso (no para la Argentina, pero sí para muchos países) como es la tierra rural.

La defensa soberana que ejerce la norma puede verse no sólo en la limitación a la posesión, propiedad o tenencia de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras, sino también en el dominio nacional sobre lo producido por esas tierras, dado que es allí donde radica mayor valor de las mismas.

Por otro lado, entender la tierra y sus producidos como recursos estratégicos para el desarrollo del país, no hace más que profundizar el modelo de defensa de los intereses nacionales implementados a partir del 2003.

El proyecto de ley establece un límite a la propiedad de titularidad extranjera del 15 por ciento del total de tierras rurales del país, porcentaje que se hacen extensivo a los departamentos, municipio y provincias.

Por otra parte, los titulares de una misma nacionalidad no podrán acceder a más del 30 por ciento del total habilitado para su venta, y cada titular no podrá adquirir más de mil hectáreas en zona núcleo o su equivalente en otras regiones del país.

La norma también crea el Registro Nacional de Tierras Rurales y dispone la realización del relevamiento catastral dominial y de registro para determinar la propiedad y la posesión de dichas tierras. Este relevamiento es fundamental, ya que a la fecha no se conoce con exactitud el porcentaje de tierras rurales en manos de extranjeros.

Es de destacar el artículo 11 del proyecto que expresamente establece que “no se entenderá como inversión la adquisición de tierras rurales, por tratarse de un recurso natural no renovable que aporta el país receptor”.

Este artículo protege al país de futuras demandas ante el CIADI, ejerciendo aquí también un acto de defensa soberana al impedir la jurisdicción extranjera de arbitraje, es decir tribunales ad hoc o tribunales regidos por reglas específicas, en perjuicio de la intervención de sus propios tribunales naturales.

Finalmente, en respuesta a la caracterización que se ha hecho de esta norma “xenófoba” y anticonstitucional por “avanzar sobre la propiedad privada”, de ninguna manera pueden aceptarse estos argumentos.

El proyecto no prohíbe la propiedad de tierras rurales a los extranjeros, simplemente limita, y específicamente la regula, teniendo en cuenta los mejores intereses del país; y es justamente la atribución y el rol de este Congreso legislar, normar, regular, teniendo como objetivo la prosperidad de la Nación.

En este sentido vale recordar el artículo 75 de la Constitución Nacional que establece:

Inciso 18: proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienes de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, al colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras con estos fines y por concesiones temporales y privilegios y recompensas de estímulo. (Ésta es la llamada cláusula de la prosperidad.)

Inciso 19: proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento.

20

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA  
RIOFRIO

**Fabricación, comercialización y distribución  
de pasta celulosa y de papel de diarios**

**(O.D.-852/11)**

Señor presidente:

Quiero decirles que los que están preocupados por la restricción de la libertad de imprenta, que la libertad de imprenta está restringida hoy en la Argentina. No se imprime ni en cantidad, ni en contenido con libertad, y es por ello que, haciendo honor a la manda constitucional del artículo 42 avenimos con este proyecto de ley, proteger esos derechos.

Les quiero contar cuál es la situación de los diarios del interior (algo de lo que no se habla).

– Aporte inicial: desde la gestación de la empresa Papel Prensa S.A., por decreto ley 18.312 del año 1969, todo los diarios –incluidos lo más pequeños del interior– tuvieron que destinar el 10% del monto total que importaban para la conformación de un fondo común que permitirían en el futuro la fabricación nacional de este insumo. El aporte se realizó durante 10 años. Tiempo después la empresa quedó en manos de tres diarios de Buenos Aires y los del interior quedaron atados a los cupos que los primeros les asignaron discrecionalmente.

– Cupos discrecionales: cada diario del interior tiene un cupo de papel asignado por la empresa Papel Prensa S.A. que no obedece a la necesidad real del medio, su tirada o su capacidad de pago, sino a criterios que sólo se explican en la discrecionalidad del directorio. El cupo asignado a diarios del interior suele equivaler a un cuarto de la demanda real. El resto se puede suplir por dos vías. La primera es la importación –hoy en San Juan se imprime con papel de origen chileno– siempre y cuando la relación cambiaria y la cotización del papel prensa en el mercado internacional no esté muy por encima de los valores nacionales. La segunda alternativa es cultivar una relación política cercana con la conducción de Papel Prensa S.A. para obtener un “favor”.

– La compra de diarios del interior por parte de grupos mayoristas de Papel Prensa S.A. puso en desventaja a otros diarios de capitales locales, que se encontraron con un menor cupo del insumo, a precios superiores.

El artículo 42 de la Constitución Nacional en su primer párrafo dice: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”.

En el tema que nos ocupa no se está cumpliendo con esa manda constitucional porque los usuarios o compradores de papel para diarios no tienen libertad de elección y mucho menos de gozar de condiciones de trato equitativo y digno. Y los consumidores últimos, que son los ciudadanos en general, se ven también afectados no ya en lo económico sino en el derecho inalienable de acceso a la información veraz.

El ciudadano que recibe la información no es un mero receptor. Participa. El sentido de incluir el concepto de informado está orientado a reconocerlo como un agente activo en la relación informativa, en la que tiene derechos reconocidos desde la concepción del sujeto universal del derecho de la información. El derecho que le cabe es recibir informaciones y opiniones por cualquier medio y sin limitación de fronteras. Este punto es fundamental y está orientado al pleno reconocimiento del derecho al conocimiento y a la participación del individuo. El derecho al hecho o derecho al conocimiento de la noticia es aquel que le permitirá saber qué es lo que ocurre a su alrededor como forma imprescindible de permitir su participación en la comunidad.

Debe contar también el sujeto informado con las facultades suficientes para seleccionar los medios con los que se quiere informar. Lo que podría denominarse derecho al pluralismo informativo; es la garantía efectiva de la recepción de una información sana y participativa. La facultad de cualquier ciudadano de contar con pluralismo informativo es el objetivo de impedir la conformación de monopolios informativos, obligación que le cabe al Estado según el artículo 13, inciso 3, del Pacto de San José de Costa Rica.

El informado tiene también derecho a contar con información veraz.

Ser el único proveedor de la materia prima obviamente ha impuesto una suerte de condicionamiento de la opinión vertida por los medios de menor capacidad, sobre todo del interior.

Ese condicionamiento se ve también en la línea editorial, tema analizado intensamente en oportunidad del tratamiento de la Ley de Medios.

Para finalizar, señor presidente, quiero destacar que este proyecto de ley reposa sobre los siguientes pilares fundamentales:

- a) La declaración de interés público de la fabricación, comercialización y distribución de la pastas de celulosa y de papel para diarios.
- b) La propensión a la producción nacional.
- c) La competencia.
- d) La no discriminación.
- e) El libre acceso.
- f) La asignación eficiente de recursos.
- g) La preservación del medio ambiente.

Y es sabido que la declaración de interés público se presenta, por lo demás, como la columna vertebral que posibilita la estructuración de todo el régimen normativo en tratamiento.

Por las razones expuestas adelanto mi voto afirmativo al proyecto en tratamiento.

21

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA  
DE LA ROSA

**Protección al dominio nacional sobre  
la propiedad, posesión o tenencia de las tierras  
rurales  
(O.D.-920/11)**

Señor presidente:

*1. Fundamentos jurídicos*

Respecto de las principales normas que fundamentan el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo nacional debemos destacar las siguientes.

1) En materia de tratados internacionales:

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).

Artículo 21. Derecho a la propiedad privada.

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

Artículo 32. Correlación entre deberes y derechos.

2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.

CONGRESO NACIONAL  
CAMARA DE SENADORES  
SESIONES EXTRAORDINARIAS DE 2011  
ORDEN DEL DIA Nº 852

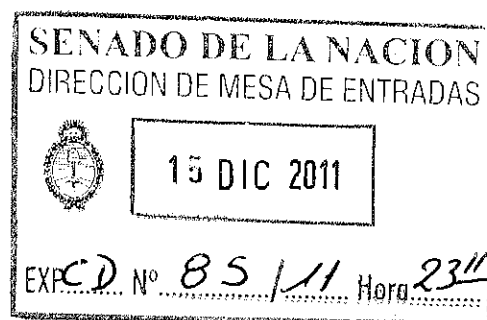
Impreso el día 15 de diciembre de 2011

SUMARIO

COMISION DE SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y  
LIBERTAD DE EXPRESION

Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por el que se declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diario. (CD-85/11)






DICTAMEN DE COMISION

Honorable Senado:


Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, ha considerado el proyecto de ley venido en revisión de la H. Cámara de Diputados (CD-85/11), por el cual se declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios; y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconsejan su aprobación.

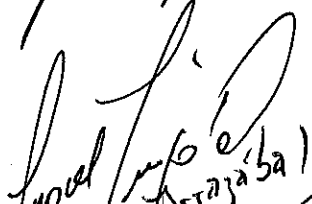
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del H. Senado, este Dictamen pasa directamente al Orden del Día.

SALA DE LA COMISION, 15 de DICIEMBRE DE 2011

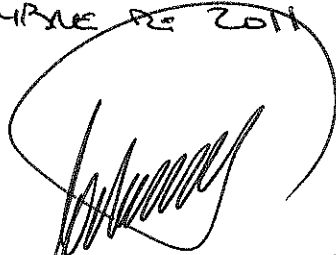
  
FUENTE

  
MARÍA DÍAZ

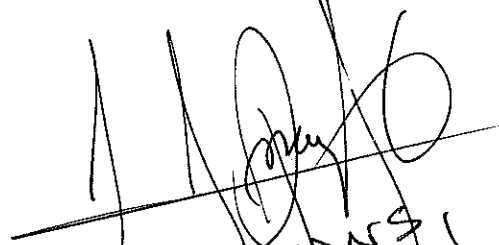
  
RUFFINO


  
TACHAZ

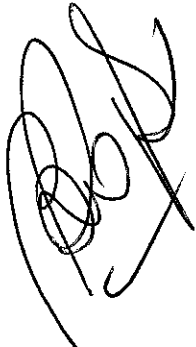
Dr. RICARDO PORTO  
SECRETARIO  
COMISION DE SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION  
Y LIBERTAD DE EXPRESION  
H. SENADO DE LA NACION

  
FELNER

ANÍBAL FELNER

  
CHAVANS

  
CORDOBA



PUELLES DE AURELIANO

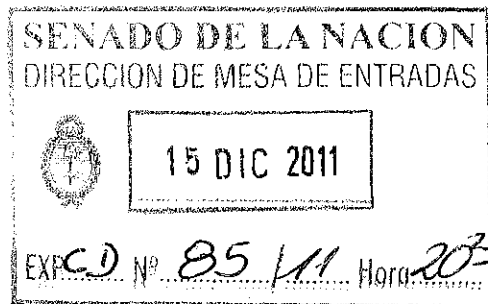


*H. Cámara de Diputados de la Nación*

*Presidencia*

024-PE-10, 31-PE-10, 6422-D-10,  
6751-D-10, 7381-D-10  
OD 10

Buenos Aires, 15 DIC 2011



Señor Presidente del H. Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, comunicándole que esta H. Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al H. Senado.

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

PAPEL DE PASTA CELULOSA PARA DIARIO.  
DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO.  
CONTROL PARLAMENTARIO Y MARCO REGULATORIO.

CAPÍTULO I

*Interés público*

Artículo 1º - Declárase de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios.

CAPÍTULO II

*Control parlamentario*

Art. 2º - Créase en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación, la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Fabricación, Comercialización y Distribución de Pasta Celulosa y de Papel para Diarios, que tendrá el carácter





*H. Cámara de Diputados de la Nación*

024-PE-10, 31-PE-10, 6422-D-10,  
6751-D-10, 7381-D-10

OD 10

2/.



de comisión permanente. La Comisión Bicameral ejercerá el control de la actividad mencionada en el artículo 1º de la presente ley.

La misma estará integrada por ocho (8) senadores y ocho (8) diputados, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras, a propuesta de los respectivos bloques parlamentarios, debiendo observarse estrictamente la proporción de la integración de los sectores políticos que estén representados en el seno de cada Cámara.

### CAPÍTULO III

#### *Marco regulatorio*

Art. 3º - *Objeto*. El presente marco regulatorio participativo tiene como objetivo esencial asegurar para la industria nacional la fabricación, comercialización y distribución regular y confiable de pasta celulosa para papel de diario y de papel para diarios, declarada de interés público, estableciendo la implementación progresiva de las mejores técnicas disponibles, considerando el factor de empleo y aplicando aquellas prácticas ambientales que aseguren la preservación y protección del ambiente con un desarrollo sustentable. A los efectos de esta norma se entenderá por "pasta celulosa" sólo aquella destinada a producir papel para diarios.

Art. 4º - *Ámbito de aplicación*. El presente marco regulatorio participativo para las industrias del papel para diarios es aplicable a las personas físicas o jurídicas con domicilio en la República Argentina que sean fabricantes, distribuidores y comercializadores de pasta celulosa y de papel para diarios y a los compradores de dichos productos.





*H. Cámara de Diputados de la Nación*

024-PE-10, 31-PE-10, 6422-D-10,  
6751-D-10, 7381-D-10

OD 10

3/.

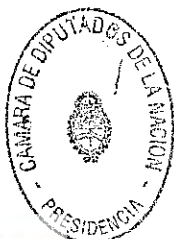


Art. 5º - *Definiciones.* A los efectos del presente se establecen las siguientes:

- a) *Fabricantes, distribuidores y comercializadores de pasta celulosa y papel para diarios:* personas físicas o jurídicas con domicilio en la Republica Argentina que realicen la actividad de fabricación, distribución y comercialización de pasta celulosa y papel para diarios y los compradores de dichos productos;
- b) *Fabricación de papel para diarios:* elaboración de papel para diarios a partir de pasta de celulosa obtenida de fibras naturales o materiales celulósicos reciclados, utilizando, en cualquier proporción, procesos mecánicos, químico-mecánicos, semi-químicos o químicos;
- c) *Compradores de papel para diarios:* toda persona física o jurídica con domicilio en la República Argentina que edite directamente o a través de terceros publicaciones de prensa escrita destinadas al mercado argentino y que se haya inscripto debidamente para ser considerado como tal, en el registro que a dicho fin se crea por el artículo 28 de la presente ley.

Art. 6º - *Sujetos.* A los efectos de este régimen, son sujetos los fabricantes de pasta celulosa y de papel para diarios y los comercializadores, distribuidores y compradores de dichos productos,

Art. 7º - *Principios generales.* Las actividades comprendidas en la presente ley serán ejercidas libremente, conforme su carácter de interés público, con arreglo a las disposiciones generales en ella previstas y las normas reglamentarias que de la misma se dicten. Dichas actividades deberán propender a la producción nacional, la competencia, la no discriminación, el







*H. Cámara de Diputados de la Nación*

024-PE-10, 31-PE-10, 6422-D-10,  
6751-D-10, 7381-D-10

OD 10

4/.



libre acceso, la asignación eficiente de recursos y la preservación del medio ambiente.

Art. 8º - *Impacto ambiental*. La actividad de producción de pasta celulosa y de papel para diarios se deberá desarrollar en un entorno y con tecnología que reduzca al mínimo la posibilidad de generar un impacto ambiental. Al respecto, se deberá dar cumplimiento a la normativa de protección ambiental vigente, especialmente en lo referente a los vuelcos y a las emisiones gaseosas.

Todas las empresas deberán realizar un estudio de impacto ambiental en el cual debe haber una descripción de los efectos esperados, así como propuestas de mejoras tecnológicas, a fin de minimizar dichos impactos. El referido estudio debe ser actualizado anualmente, reflejando las mejoras introducidas tanto en el proceso como en el tratamiento de los residuos.

Art. 9º - En caso de producirse alteraciones negativas sobre el medio ambiente, se deberá tener una clara política de reparación del daño ocasionado. Se tenderá como primera acción a la recomposición del ambiente dañado, con los medios tecnológicos que se disponga. En caso de no ser posible, se tenderá a generar un impacto positivo que compense los perjuicios ocasionados.

La evaluación de daños deberá ser permanente, teniendo la empresa obligación de informar a la autoridad de aplicación en caso que se incremente y proponer medidas para la reducción del mismo.

Art. 10.- *Autoridad de aplicación*. Será autoridad de aplicación el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas cuyas funciones serán, entre otras, las de controlar el cumplimiento del presente marco regulatorio.





*H. Cámara de Diputados de la Nación*

024-PE-10, 31-PE-10, 6422-D-10,  
6751-D-10, 7381-D-10

OD 10

5/.



Asimismo, tendrá a su cargo dictar las normas aclaratorias y complementarias, aprobar los planes de acción, e intervenir en todos los actos previstos en la normativa aplicable.

Art. 11.- *Atribuciones de la autoridad de aplicación.* Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, la autoridad de aplicación deberá:

- a) Incentivar la eficiencia del sector y garantizar la producción nacional en la totalidad de las etapas de la actividad partiendo de la madera como insumo básico;
- b) Propender a una mejor operación de la industria de la pasta celulosa y del papel para diarios, garantizando la igualdad de oportunidades y el acceso sin discriminaciones al abastecimiento de papel;
- c) Hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y disposiciones complementarias, en el ámbito de su competencia;
- d) Dictar las normas a las que deberán ajustarse los sujetos de esta ley en materia de normas y procedimientos técnicos;
- e) Requerir a los actores del presente régimen, la documentación respaldatoria e información que sea necesaria para verificar el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación. Asimismo, deberá realizar las inspecciones que sean necesarias a los mismos efectos y habilitará los registros pertinentes;
- f) Promover ante los tribunales competentes las acciones pertinentes que tiendan a asegurar el cumplimiento de sus funciones y los fines de esta ley y su reglamentación;
- g) Llevar el control de las exportaciones e importaciones de la pasta celulosa y del papel para diarios, a través del registro que se crea por el artículo 28 de la presente ley. Asimismo,

3



*[Firma manuscrita]*



*H. Cámara de Diputados de la Nación*

024-PE-10, 31-PE-10, 6422-D-10,

6751-D-10, 7381-D-10

OD 10

6/.



recomendar las medidas relativas al comercio exterior para el cumplimiento del presente régimen;

- h) Aplicar las sanciones previstas en la presente ley y su reglamentación;
- i) Ejercer las acciones de fiscalización que correspondan;
- j) Promover y controlar la producción y uso sustentable de pasta celulosa y de papel para diarios;
- k) Establecer las normas de calidad a las que deben ajustarse la producción de pasta celulosa y de papel para diarios;
- l) Establecer los requisitos y condiciones necesarios para la habilitación de las plantas de producción de pasta celulosa y de papel para diarios, resolver sobre su calificación y aprobación y certificar la fecha de su puesta en marcha;
- m) Establecer los requisitos y criterios de selección para la presentación de los proyectos que tengan por objeto acogerse a los beneficios establecidos por la presente ley, resolver sobre su aprobación y fijar su duración;
- n) Realizar auditorías e inspecciones a las plantas habilitadas para la producción de pasta celulosa y de papel para diarios a fin de controlar su correcto funcionamiento y su ajuste a la normativa vigente;
- o) Realizar auditorías e inspecciones a los beneficiarios del régimen de promoción establecido en esta ley, a fin de controlar su correcto funcionamiento, su ajuste a la normativa vigente y la permanencia de las condiciones establecidas para mantener los beneficios que se les hayan otorgado;
- p) Administrar los subsidios que existen actualmente así como los que eventualmente se otorguen;





*H. Cámara de Diputados de la Nación*

024-PE-10, 31-PE-10, 6422-D-10,  
6751-D-10, 7381-D-10

OD 10

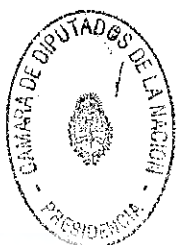
7/.



- q) Llevar actualizado el registro nacional que se crea por el artículo 28 de la presente ley, en particular respecto de los datos de los sujetos y de las plantas habilitadas para la producción de pasta celulosa y de papel para diarios, así como un detalle de aquellas a las que se les haya otorgado beneficios promocionales establecidos en los regímenes preexistentes y en el presente;
- r) Firmar convenios de cooperación con distintos organismos públicos, privados, mixtos y organizaciones no gubernamentales, nacionales o internacionales;
- s) Publicar en su sitio de Internet el registro creado por el artículo 28 de la presente ley, así como los montos de los beneficios otorgados a cada empresa;
- t) En general, realizar todos los actos que sean necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones y de los objetivos de esta ley y su reglamentación.

Art. 12.- *Comisión Federal Asesora.* Créase la Comisión Federal Asesora para la Promoción de la Producción y Uso Sustentable de Pasta Celulosa y de Papel para Diarios, cuya función será la de asistir y asesorar a la autoridad de aplicación.

Dicha comisión estará integrada por un (1) representante de los diarios de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elegidos por los compradores de papel para diarios de la República Argentina que tengan una aparición regular y que no participen en forma directa o indirecta en la producción de papel para diarios o de alguno de sus insumos estratégicos. Asimismo se integrará por dos (2) representantes de las organizaciones representativas de usuarios y consumidores y tres (3) por los







*H. Cámara de Diputados de la Nación*

024-PE-10, 31-PE-10, 6422-D-10,  
6751-D-10, 7381-D-10

OD 10

8/.



trabajadores, correspondiendo un (1) representante a los gráficos, uno (1) a los de prensa y uno (1) a los vendedores de diarios y revistas.

Los representantes de los compradores de papel para diarios durarán cuatro (4) años en sus funciones, debiendo rotar anualmente entre los distintos compradores.

Los representantes de las organizaciones de usuarios y consumidores durarán cuatro (4) años en sus funciones, debiendo rotar anualmente entre las distintas organizaciones.

Art. 13.- La coordinación de la Comisión Federal Asesora será ejercida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Art. 14.- A efectos de integrar la Comisión Federal Asesora los compradores deberán estar inscriptos en el registro que se crea a través del artículo 28 a tal fin en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En el mismo deberán acreditar la personería jurídica.

Art. 15.- A efectos del funcionamiento y la toma de decisiones dentro de la Comisión Federal Asesora todos los medios integrantes tendrán la misma voz y voto con independencia de su tamaño, volumen de producción y/o nivel de ventas.

Art. 16.- Serán funciones de la citada Comisión Federal Asesora:

- a) Analizar la situación y evolución del mercado internacional y local de papel para diarios;
- b) Analizar las condiciones comerciales y de acceso del insumo en el mercado local;

4





*H. Cámara de Diputados de la Nación*

024-PE-10, 31-PE-10, 6422-D-10,  
6751-D-10, 7381-D-10

OD 10

9/.



- c) Controlar y realizar el seguimiento de aplicación de la cláusula de acceso y precio igualitario del citado insumo;
- d) Analizar y realizar propuestas respecto de los planes de inversión de la firma Papel Prensa S. A.;
- e) Proponer medidas tendientes a ampliar el espectro de diversidad, democratización y federalización de la prensa escrita;
- f) Colaborar con el Estado nacional asesorando respecto a su actuación dentro de la firma Papel Prensa S. A.;
- g) Asesorar al Estado nacional respecto de toda la problemática del papel para diarios;
- h) Eventualmente ejercer los derechos políticos del acrecentamiento de participación del Estado nacional en la firma Papel Prensa S. A. producto de la variación de su proporción accionaria mediante aportes de capital;
- i) Darse su propio reglamento de funcionamiento.

Art. 17.- *Contabilidad separada.* Los fabricantes de pasta celulosa y de papel para diarios deben llevar una contabilidad separada para la actividad, en el caso de estar integrados verticalmente.

Art. 18.- *Transparencia.* Los fabricantes, distribuidores y comercializadores de pasta celulosa y de papel para diarios deben mantener actualizada una publicación para los compradores de pasta celulosa y de papel para diarios y para la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Fabricación, Comercialización y Distribución de Pasta Celulosa y de Papel para Diarios.

Esta obligación se entenderá cumplida mediante la creación y actualización diaria de un sitio de Internet en el que consten como mínimo: los





*H. Cámara de Diputados de la Nación*

024-PE-10, 31-PE-10, 6422-D-10,  
6751-D-10, 7381-D-10

OD 10

10/.

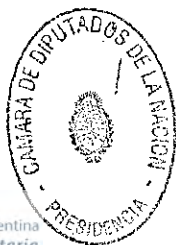


precios de compra equivalente contado, de la madera, la pasta celulósica, el papel para reciclar, la soda cáustica y cualquier otro insumo que, en el futuro, conforme más del diez por ciento (10%) de las compras anuales de la actividad. Sin perjuicio de ello, los fabricantes, distribuidores y comercializadores de pasta celulosa y/o de papel para diarios podrán agregar otras formas de publicidad a la indicada precedentemente.

Art. 19.- *Publicación de balances.* Los fabricantes, distribuidores y comercializadores de pasta celulosa y de papel para diarios deberán publicar para el público en general, los balances trimestrales en los términos y condiciones que establece la Comisión Nacional de Valores.

Art. 20.- *Precio único de pago contado.* Sin perjuicio de lo establecido por el artículo 18 de la presente ley, los fabricantes, distribuidores y comercializadores de pasta celulosa y de papel para diarios deberán publicar para conocimiento de las empresas compradoras y de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Fabricación, Comercialización y Distribución de Pasta Celulosa y de Papel para Diarios:

- a) El stock total y disponible, en forma diaria;
- b) La capacidad de producción máxima y la producción estimada para los próximos tres (3) meses, de manera trimestral;
- c) El precio único pago contado de venta de papel para diarios a la salida de planta, que se obtiene de la fórmula que figura en el cuadro I que forma parte de la presente ley. Este precio será el mismo para toda operación que involucre la adquisición de más de una (1) tonelada de dicho producto, en condiciones de entrega inmediata, tanto comprometidas como nuevas operaciones a confirmar en el día. En ningún caso se efectuarán





H. Cámara de Diputados de la Nación

024-PE-10, 31-PE-10, 6422-D-10,  
6751-D-10, 7381-D-10

OD 10

11/.



contrataciones que involucren un precio inferior al precio único de pago contado.

Art. 21.- Los fabricantes, distribuidores y comercializadores de pasta celulosa y de papel para diarios podrán establecer precios superiores al precio único de pago contado cuando otorgaran plazos de pago.

Art. 22.- *Régimen de ventas.* Los fabricantes, distribuidores y comercializadores de pasta celulosa y de papel para diarios deberán atender, sin discriminación de ningún tipo, todas aquellas solicitudes de abastecimiento para las que exista stock o capacidad de producción no comprometida.

Art. 23.- Los compradores de pasta celulosa y de papel para diarios se encuentran obligados a realizar los pedidos y al cumplimiento en tiempo y forma del retiro de la mercadería que solicitaran. Ello sin perjuicio de las acciones que los fabricantes decidan iniciar para compensar los daños que se hubieren ocasionado.

Art. 24.- En el caso de que para un determinado período persistan excedentes de capacidad sobre los planes de producción comprometidos, quedará a criterio de los fabricantes de pasta celulosa y de papel para diarios, el ajuste de producción o stocks.

Art. 25.- *Régimen de inversiones.* Los fabricantes de pasta celulosa y de papel para diarios deberán comprometer una proyección de capacidad a tres (3) años en función de los programas de inversión que van a llevar adelante. A efectos de la financiación de las inversiones, las empresas contarán con los

37







*H. Cámara de Diputados de la Nación*

024-PE-10, 31-PE-10, 6422-D-10,  
6751-D-10, 7381-D-10  
OD 10  
12/.



beneficios promocionales que ofrece o que en un futuro ofrezca el Poder Ejecutivo nacional.

Art. 26.- La Comisión Federal Asesora estimará, trimestralmente, las necesidades de importación de pasta celulosa y de papel para diarios a partir de la información provista por los fabricantes, distribuidores y comercializadores según lo previsto en el artículo 20 de la presente ley, a fin de asegurar el abastecimiento pleno del mercado local.

Defínese "Qm" como el volumen estimado de importaciones necesarias por trimestre.

La Comisión Federal Asesora estimará, asimismo y en forma trimestral, la producción nacional máxima de pasta celulosa y de papel para diarios a partir de la información provista por los fabricantes conforme lo previsto en el artículo 20 de la presente ley, a fin de asegurar el abastecimiento pleno del mercado local.

Defínese "Qn" como el volumen estimado de producción nacional por trimestre.

Defínese como "P" a la relación entre el volumen estimado de importaciones necesarias (Qm) y el volumen estimado de producción nacional (Qn); siendo  $P = Qm/Qn$ .

A los fines de evitar posibles sobre costos de importación para los compradores pequeños y medianos, el Poder Ejecutivo nacional queda facultado a eximirlos de lo establecido en el artículo 27 de la presente ley.

Art. 27.- A efectos de asegurar un reparto equitativo del costo relativo de importar entre todos los demandantes, el comprador de pasta celulosa y de papel para diarios, para hacerse acreedor a la confirmación de venta de pasta celulosa y de papel para diarios de producción nacional deberá acreditar que



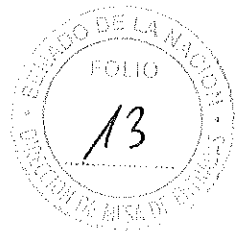


*H. Cámara de Diputados de la Nación*

024-PE-10, 31-PE-10, 6422-D-10,  
6751-D-10, 7381-D-10

OD 10

13/.



importó (o va a importar) directa o indirectamente, la proporción “P” definida en el artículo precedente.

Art. 28.- *Registro Nacional de Fabricantes, Distribuidores y Comercializadores de Pasta Celulosa y Papel para Diarios.* Créase el Registro Nacional de Fabricantes, Distribuidores y Comercializadores de Pasta Celulosa y Papel para Diarios en el ámbito de la autoridad de aplicación.

A los fines de un mejor control de los preceptos del presente marco regulatorio, dicho registro deberá contener los datos y operaciones de los sujetos involucrados en la forma y condiciones que determine la reglamentación.

Art. 29.- *Plazo para registrarse.* Los fabricantes, distribuidores, comercializadores y compradores de pasta celulosa y de papel para diarios contarán con un plazo máximo, a los fines de su inscripción en el registro nacional creado por el artículo que antecede.

Art. 30.- *Control jurisdiccional.* A los efectos de la actuación administrativa de la autoridad de aplicación, será de aplicación la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549, y sus normas reglamentarias.

Agotada la vía administrativa procederá el recurso en sede judicial directamente ante la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en materia contencioso-administrativa con jurisdicción en el lugar del hecho.

Art. 31.- *Régimen sancionatorio.* Cualquier actor alcanzado por la presente ley, que incurra en maniobras violatorias de las disposiciones de la misma, respecto de cualquier otro integrante de la cadena de fabricación,

7





*H. Cámara de Diputados de la Nación*

024-PE-10, 31-PE-10, 6422-D-10,  
6751-D-10, 7381-D-10

OD 10

14/.

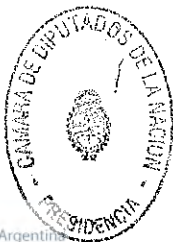


distribución y/o comercialización de pasta celulosa y de papel para diarios, será pasible de las sanciones establecidas en el artículo 33 de la presente ley, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la legislación de fondo.

Art. 32.- El presente marco normativo establece como pasibles de las sanciones prescriptas por el artículo 33 de la presente ley, las siguientes conductas:

1. La negativa o la obstrucción a ser inspeccionado, y la no colaboración con la inspección cuando ésta sea requerida.
2. El incumplimiento de la obligación de mantener los niveles de calidad y cantidad de producción de pasta celulosa y de papel para diarios.
3. El uso en condiciones distintas a las autorizadas por el presente marco normativo de pasta celulosa y de papel para diarios.
4. El incumplimiento de las instrucciones dictadas por la autoridad de aplicación, en el ámbito de sus competencias, sobre salvaguarda de la libre competencia en el mercado.
5. El incumplimiento de las resoluciones adoptadas por la autoridad de aplicación en el ejercicio de sus funciones.
6. El incumplimiento reiterado de los requerimientos de información formulados por la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Fabricación, Comercialización y Distribución de Pasta Celulosa y de Papel para Diarios o por la autoridad de aplicación, en el ejercicio de sus correspondientes funciones.
7. La distribución o venta deficiente de la producción de pasta celulosa y de papel para diarios.

4





*H. Cámara de Diputados de la Nación*

024-PE-10, 31-PE-10, 6422-D-10,  
6751-D-10, 7381-D-10

OD 10

15/.



8. La alteración, manipulación o sustitución fraudulenta de las características de la pasta celulosa y de papel para diarios.
9. El incumplimiento de los plazos establecidos por el presente marco regulatorio.
10. Cualquier otra conducta violatoria de este marco regulatorio o la legislación vigente.

Art. 33.- *Contravenciones y sanciones.* Los incumplimientos de la presente ley serán sancionados por la autoridad de aplicación con:

- a) *Apercibimientos;*
- b) *Multas:* cuyo valor fijará la autoridad de aplicación, teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, reiteración de los hechos, la cuantía del perjuicio ocasionado, la conducta posterior a la infracción por parte del incumplidor, la capacidad económico-financiera del infractor y las demás circunstancias y particularidades del caso;
- c) *Inhabilitaciones:* cuyos plazos serán fijados por la autoridad de aplicación, según los criterios establecidos en el inciso b) del presente artículo;
- d) *Suspensiones:* cuyos plazos serán fijados por la autoridad de aplicación, según los criterios establecidos en el inciso b) del presente artículo;
- e) *Reparación del daño causado:* cuando la conducta hubiere causado un perjuicio a una persona determinada y no resultaren afectados el interés público o de terceros, la autoridad de aplicación puede ordenar la reparación del daño a cargo de los fabricantes, distribuidores y comercializadores de pasta celulosa y de papel para diarios;

23



*[Firma manuscrita]*





*H. Cámara de Diputados de la Nación*

024-PE-10, 31-PE-10, 6422-D-10,  
6751-D-10, 7381-D-10

OD 10

16/.



*f) Clausuras y decomisos.*

Art. 34.- *Fiscalización.* En las acciones de prevención, constatación de contravenciones, cumplimiento de las medidas de secuestro, decomiso u otras que pudieren corresponder, la autoridad de aplicación podrá requerir al juez competente el auxilio de la fuerza pública.

A tal fin bastará presentar ante el juez las correspondientes actuaciones administrativas, y formal requerimiento de autoridad competente.

Art. 35.- *Tasa de fiscalización.* Créase la tasa de fiscalización y asígnase a la autoridad de aplicación la recaudación de la misma, cuyo producido se utilizará para el funcionamiento de la Comisión Federal Asesora y el excedente para el fondo fiduciario que se crea por el artículo 37 de la presente ley.

Art. 36.- Serán obligados al pago de la tasa de fiscalización de la producción de pasta celulosa y de papel para diarios, los fabricantes, comercializadores y distribuidores de dichos productos.

El período de liquidación comprenderá un (1) mes calendario y la base imponible vendrá dada por el cero coma cero uno por ciento (0,01%) de la facturación.

La aplicación, por parte de la autoridad de aplicación, de la tasa creada por el artículo 35 de la presente ley, y la imposición de multas, intereses, actualizaciones y sanciones se regirán por las normas y procedimientos establecidos en la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones.

Art. 37.- *Fondo fiduciario.* Créase un fondo fiduciario para fomento de las inversiones en bienes de capital de las pequeñas y medianas empresas que





*H. Cámara de Diputados de la Nación*

024-PE-10, 31-PE-10, 6422-D-10,

6751-D-10, 7381-D-10

OD 10

17/.



desarrollen actividades relacionadas con la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios y para los compradores registrados.

Art. 38.- El fondo fiduciario creado precedentemente estará integrado por los siguientes recursos:

- a) La totalidad de los recursos provenientes del régimen de sanciones establecido en la presente ley;
- b) Los fondos que por ley de presupuesto se asignen;
- c) Los fondos que se obtengan en el marco de programas especiales de créditos que se acuerden con los organismos o instituciones pertinentes, nacionales e internacionales;
- d) Los aportes específicos que la autoridad de aplicación convenga con los operadores de la actividad;
- e) Los excedentes de la tasa creada por el artículo 35 de la presente ley.

Art. 39.- El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la constitución y funcionamiento del referido fondo, debiendo arbitrar los medios para que la operatoria del mismo tenga la mayor transparencia y eficiencia en su funcionamiento.

#### *Cláusulas transitorias*

Art. 40.- En virtud del cumplimiento de los objetivos de la creación de la firma Papel Prensa S.A., del cumplimiento de la cláusula de acceso igualitario de todos los medios gráficos al citado insumo esencial así como de

7





*H. Cámara de Diputados de la Nación*

024-PE-10, 31-PE-10, 6422-D-10,  
6751-D-10, 7381-D-10

OD 10

18/.



la declaración de interés público de la producción de papel para diarios, la empresa Papel Prensa S. A. deberá:

- a) Operar como mínimo a pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna de papel (cuando ésta sea menor a la capacidad operativa);
- b) Presentar y ejecutar cada tres (3) años un plan de inversiones tendiente a satisfacer la totalidad de la demanda interna de papel para diarios.

Art. 41.- Cuando los fondos necesarios para las inversiones previstas en el artículo anterior sean provistos en forma más que proporcional por el Estado nacional respecto de otros socios, los derechos políticos adicionales emergentes de dichos aportes de capital serán ejercidos por la Comisión Federal Asesora creada por el artículo 12 de la presente ley. Sin perjuicio de lo anterior, los derechos patrimoniales emergentes de los citados aportes forman parte de la participación accionaria del Estado nacional en Papel Prensa S. A., que se ve acrecentada eventualmente mediante este mecanismo.

Art. 42.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Dios guarde al señor Presidente.



Cuadro I

# FORMULA DE PRECIO

$$\text{PRECIO} = \text{COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS POR UNIDAD DE PRODUCTO} + \text{COSTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES APLICADOS AL PRODUCTO} + \text{GASTOS EN DESARROLLO SOBRE CICLO DE VIDA} + \text{COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL INVERTIDO}$$

$$\text{PRECIO} = \sum_{i=1}^n \alpha_{ij} P_i + \sum_{h=1}^m \omega_{hj} w_h + \sum_{k=1}^K \beta_{kj} r_k + \sum_{l=1}^L \gamma_{lj} i_l + \text{CTE} \times p$$

$\alpha_{ij}$  Unidades del insumo "i" necesarias para producir una unidad del producto "j" (consumido en el año sobre producción del año)

$\omega_{hj}$  Unidades del trabajador del tipo h afectados a la producción de j.

$w_h$  Costo Salarial de h. Salario de mano de obra directa e indirecta

$\beta_{kj}$  Tiempos de la unidad k utilizados para la producción del producto j (inversa de la velocidad)

$r_k$  Costo de funcionamiento de la unidad k por unidad de tiempo incluyendo a inversiones necesarias para mantener el equipamiento en marcha (la Amortización como proxy)

$\gamma_{lj}$  Tiempo de la unidad de desarrollo "l" invertida en el producto j sobre la vida útil del producto

$i_l$  Costo del tiempo de la unidad de desarrollo "l"

p Tasa de retorno sobre el capital invertido 8%

CTE

Capital total invertido en la empresa por unidad de volumen vendida

$P_i$  Precio del insumo i (vigente al momento de calcular el costo, puesto en planta)



CONGRESO NACIONAL

CAMARA DE SENADORES

SESIONES ORDINARIAS DE 2011

ANEXO AL ORDEN DEL DIA Nº 852

Impreso el día 20 de diciembre de 2011

SUMARIO

COMISION DE SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y  
LIBERTAD DE EXPRESION

Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios. (CD-85/11)

## DICTAMEN EN MINORIA

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, ha considerado el proyecto de ley venido en revisión de la H. Cámara de Diputados (CD-85/11), por el cual se declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios : y por las razones y fundamentos que expondrá el miembro informante, se aconseja la sanción del siguiente:

### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados...*

**RÉGIMEN PROMOCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN O READECUACIÓN DE NUEVAS PLANTAS PRODUCTORAS DE PAPEL DE DIARIOS Y REVISTAS. FONDO DE AYUDA "PAPEL PARA TODOS".**

#### **Capítulo I. Objetivos**

Art. 1°.- Declárase de interés público el acceso libre e igualitario del papel necesario para editar diarios y revistas en todo el país, a fin de asegurar la libre difusión de información, ideas y opiniones, y el derecho de los ciudadanos a recibirlas.

Art. 2°.- El Estado promoverá y asegurará los medios necesarios para el desarrollo de la prensa gráfica, a través de la fabricación, comercialización, distribución e importación de papel para diarios y revistas.

#### **Capítulo II. Régimen de promoción para la construcción, instalación o readecuación de nuevas plantas productoras de papel para diarios y revistas**

Art. 3°.-El Poder Ejecutivo Nacional elaborará y enviará a la Comisión Bicameral permanente de Control y Seguimiento de la Promoción de la fabricación, comercialización, distribución importación de papel para diarios y revistas, en el ámbito del Congreso de la Nación, un proyecto de "Régimen de promoción para la construcción, instalación o readecuación de nuevas plantas productoras de papel para diarios y revistas", empleando todos los medios que el Estado tenga a su alcance para la concreción de este objetivo. Dicho régimen de promoción, estará destinado, además, a la readecuación de actuales plantas que no estén produciendo papel para diarios y revistas.

Para ello, se deberán atender a los siguientes criterios:

- a) El monto de la inversión.
- b) La competitividad del precio del papel.
- c) Privilegiar la tecnología más avanzada y el desarrollo de investigación aplicada.
- d) La calidad del producto sujeta a los estándares internacionales.
- e) La posibilidad de que el volumen de producción permita sustituir importaciones y, eventualmente, la exportación.
- f) Tener en cuenta las potencialidades regionales.
- g) La utilización de materias primas del lugar.

## *Senado de la Nación*

- h) La estricta preservación del medio ambiente.
- i) El empleo de mano de obra local.
- j) La posible participación de cooperativas.
- k) La concesión de beneficios sociales adicionales a sus empleados.

Art. 4º.- El régimen de promoción deberá contemplar el procedimiento administrativo que regirá para el otorgamiento de los beneficios promocionales.

Art. 5º.- Para el otorgamiento de los beneficios se deberá acreditar fehacientemente que los proyectos aseguren factibilidad, rentabilidad y costos de producción razonables. Los beneficiarios deberán poseer suficiente capacidad técnica y financiera comprobable.

Art. 6º.- Los estímulos promocionales podrán consistir en:

- a) Exención, reducción, suspensión y/o diferimiento de impuestos nacionales.
- b) Exención o reducción de derechos de importación sobre bienes de capital y sus repuestos cuando no se fabriquen en el país o cuando los nacionales no satisfagan condiciones de calidad, plazos de entrega o precios razonables.
- c) Facilidades para la compra, locación o comodato de bienes del dominio del Estado Nacional.
- d) Otorgamiento de créditos de inversión con tasas de interés reducidas.

Art. 7º.- Los beneficios sólo podrán concederse para la construcción e instalación de plantas productoras de papel para diarios y revistas y no podrán extenderse más allá de la puesta en marcha de éstas, salvo en lo referente al diferimiento del pago impuestos que no se otorgarán por más de diez (10) años. En ningún caso la construcción de las plantas podrá exceder los cuatro (4) años contados desde el inicio de las obras.

Art. 8.- Los beneficiarios del régimen de promoción para la elaboración de papel para diarios y revistas quedarán obligados a la producción de papel para diarios y revistas por el plazo de veinte (20) años a partir del otorgamiento de los beneficios

### **Capítulo III. Autoridad de Aplicación**

Art. 9º.- La Autoridad de Aplicación se desempeñará en el ámbito del Ministerio de Industria.

Art. 10º.- La Autoridad de Aplicación tendrá la obligación de controlar el cumplimiento de las obligaciones que asuman los beneficiarios del “Régimen de promoción para la elaboración de papel para diarios y revistas en todo el país” e imponer las sanciones pertinentes en los casos que correspondan.

Art. 11º.- La Autoridad de Aplicación deberá monitorear la implementación del Fondo de Ayuda “Papel para Todos” y presentará anualmente un informe a la Comisión Bicameral permanente de Control y Seguimiento de la Promoción de la fabricación, comercialización, distribución e importación de papel para diarios y revistas.

Art. 12º.- La Autoridad de Aplicación garantizará que hasta tanto la oferta local de papel para diarios no se incremente, como consecuencia de la implementación del Régimen de Promoción, en un porcentaje que asegure el acceso libre e igualitario al papel, a determinar por esa Autoridad de Aplicación, las operaciones de comercialización de papel para diarios deberán efectuarse por un precio igualitario, calculado en puerta de fábrica y de acuerdo al precio que hubiera pagado en las operaciones habituales de compraventa el principal cliente de la vendedora incluyendo las bonificaciones y descuentos que el comprador obtuviera por dicha operación. Se determinará como requisito para la aplicación del precio igualitario que la operación se efectúe al contado.

# Senado de la Nación

## Capítulo IV. Sanciones

Art. 13°.- El incumplimiento por parte de los beneficiarios del régimen de promoción y de las obligaciones que surjan del acto de concesión, dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones:

- a) En caso de incumplimientos meramente formales y reiterados, multa de hasta el uno por ciento (1%) del monto del proyecto.
- b) En caso de incumplimientos sustanciales:
  - 1) Caducidad total o parcial de los beneficios otorgados.
  - 2) Multas de hasta el diez por ciento (10%) del monto del proyecto.
  - 3) Pago total o parcial de los tributos no ingresados con motivo de la promoción acordada, más los intereses que por derecho correspondan.

Art. 14°.- Las sanciones serán impuestas luego de un procedimiento que asegure el debido proceso y la defensa en juicio, y se graduarán de acuerdo a la gravedad de la infracción.

Art. 15°.- Las sanciones podrán ser apeladas de modo fundado dentro del diez (10) días hábiles de la notificación por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal.

## Capítulo V. Fondo de Ayuda “Papel para todos”

Art. 16°.- Créase el Fondo de Ayuda “Papel para todos” que administrará la Autoridad de Aplicación. El Fondo estará constituido por los montos que se asignen en la ley de presupuesto nacional y por el producido de las multas impuestas por infracciones al régimen de promoción.

Art. 17°.- El Fondo de Ayuda “Papel para todos” estará destinado a:

- a) Financiar la adquisición de papel de diarios y revistas a los editores de ciudades de menos de 100.000 habitantes, a través de préstamos con tasas reducidas con garantía prendaria sobre los inventarios de papel.
- b) Garantizar la importación de papel de diarios y revistas cuando los volúmenes de la operación no excedan las 300 toneladas por año.

Art. 18°.- El Poder Ejecutivo Nacional deberá elaborar y enviar anualmente a la Comisión Bicameral permanente de Control y Seguimiento de la Promoción de la fabricación, comercialización, distribución e importación de papel para diarios y revistas, las medidas y políticas a desarrollar por el Fondo de Ayuda “Papel para todos”.

## Capítulo VI. Importación de papel

Art. 19°.- La importación de papel de diarios y revistas será absolutamente libre. Queda prohibida la fijación de todo tipo de arancel, tasa o restricción de cualquier naturaleza sobre la importación de este bien.

Art. 20°.- El Estado no podrá establecer discriminaciones entre la producción y comercialización de papel nacional y la del papel importado. No podrá haber diferencia alguna entre las condiciones que se exijan a los productores locales y a los productores extranjeros que exporten papel al país.



## Senado de la Nación

Art. 21.- En caso que el precio internacional del papel superara al valor promedio del mercado local, el Estado Nacional subsidiará, de resultar necesaria la importación, hasta lograr la equiparación entre ambos precios.

Art. 22.- El régimen promocional contemplará la posibilidad de que los editores que consuman menos de 300 toneladas por año de papel de diarios y revistas, cuenten con un sistema simplificado de tramitación de las respectivas importaciones ante el Registro de Importaciones del Sector Editorial (RISE).

### Capítulo VII. Comisión Bicameral permanente de Control y Seguimiento de la Promoción de la fabricación, comercialización, distribución e importación de papel para diarios y revistas

Art. 23.- Créase en el ámbito del Congreso de la Nación la Comisión Bicameral permanente de Control y Seguimiento de la Promoción de la fabricación, comercialización, distribución importación de papel para diarios y revistas. La Comisión estará integrada por 6 Senadores/as y 6 Diputados/as nacionales respetando respetando la pluralidad de la representación política de cada Cámara cuyo presidente será designado a propuesta bloque opositor mayoritario.

Art. 24.- Las principales funciones de la Comisión Bicameral serán:

- a.- Recibir y aprobar anualmente el informe de gestión y resultados del Régimen de Promoción para la Construcción, Instalación o Readecuación de nuevas plantas productoras de papel para diarios y revistas en todo el país.
- b.- Monitorear por cuenta propia la implementación del Régimen de Promoción. Con tal motivo podrá requerir la información que entienda pertinente a la Autoridad de Aplicación.
- c.- Recibir, evaluar y aprobar, en un plazo de 30 días desde su presentación a la Comisión, el plan del "Fondo de Papel para Todos".
- d.- Recibir, evaluar y aprobar el informe sobre rendimiento anual del Fondo de Ayuda "Papel para Todos".
- e.- Convocar al titular de la Autoridad de Aplicación a informar al Congreso de la Nación acerca de los temas de su incumbencia toda vez que así se lo disponga.
- f.- Realizar un informe semestral sobre el mercado de demanda y oferta de pasta celulosa y papel en la República Argentina, con el propósito de informar, monitorear y detectar cualquier tipo de situación que atente contra el libre ejercicio de la libertad de prensa y expresión de nuestro país.
- g.- Presentar denuncias ante los organismos pertinentes, frente a la detección de anomalías.

### Capítulo VIII. Disposiciones finales

Art. 25°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del H. Senado, este dictamen pasa directamente al Orden del Día.

Sala de la Comisión, 15 de diciembre de 2011

LUIS NAIDENOFF  
Senador de la Nación

JUAN CARLOS MARINO  
SENADOR DE LA NACIÓN